



Environmental Protection and Border Security on the **U.S.-Mexico Border**

**Tenth Report
of the
Good Neighbor
Environmental
Board to the
President and Congress
of the United States**



March 2007

 **GNEB**
Environmental Advisors Across Borders

Protección Ambiental y Seguridad en la Frontera de los Estados Unidos y México

Décimo Informe
de la Junta
Ambiental del
Buen Vecino al
Presidente y al
Congreso de los
Estados Unidos

Marzo 2007



Acerca de la Junta

La Junta Ambiental del Buen Vecino es un Comité independiente de asesoría al Presidente de los Estados Unidos que funciona conforme al Acta del Comité Federal de Asesoría (FACA). Su misión consiste en asesorar al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos sobre las prácticas ambientales y de infraestructura de “buena vecindad” a lo largo de la frontera de los Estados Unidos-México. La Junta no realiza sus propias actividades ambientales en la región fronteriza, ni tampoco tiene presupuesto para financiar proyectos fronterizos. Más bien, su función particular consiste en actuar como un asesor experto e imparcial para el Presidente y el Congreso y recomendar la manera en que el gobierno federal puede trabajar más efectivamente con sus cuantos socios, para mejorar el medio ambiente a lo largo de la frontera de los Estados Unidos y México. Por Orden Ejecutiva Presidencial, sus actividades administrativas fueron asignadas a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y son llevadas por la Oficina de Gestión Ambiental Cooperativa de la EPA.

La composición de la Junta es extremadamente diversa. Incluye altos funcionarios de varias dependencias del gobierno federal de los Estados Unidos y de cada uno de los cuatro estados fronterizos de los Estados Unidos—Arizona, California, Nuevo México, y Texas. Asimismo, se incluyen representantes tribales, del gobierno local, de organizaciones sin fines de lucro, del sector agrícola y ganadero, del sector de negocios y del sector académico. Además, la Junta mantiene un diálogo con su contraparte, los grupos asesores de agencias ambientales mexicanas, y los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS), conocidos simplemente como Consejos, para asegurarse que permanece informada sobre temas de interés del lado mexicano de la frontera.

La junta se reúne tres veces por año calendario en varias comunidades fronterizas de los Estados Unidos y en Washington, DC. Sus consejos son presentados al Presidente de los Estados Unidos y al Congreso en forma de informes anuales que contienen recomendaciones para acciones. Estas recomendaciones se presentan luego de lograr el consenso entre todos los miembros. Las recomendaciones toman forma a través de la combinación de los conocimientos de los miembros de la Junta, el diálogo continuo de sus miembros con su contraparte en los grupos del Consejo, y por los voceros y ciudadanos interesados en ambos lados de la frontera que asisten a sus reuniones en las comunidades fronterizas. La Junta ocasionalmente también publica Cartas Comentario durante el año para contribuir con asuntos de actualidad. Uno de los temas que se repite con más frecuencia en sus consejos es que el apoyo hacia la cooperación transfronteriza es esencial si se quiere lograr un progreso sostenido en asuntos ambientales a lo largo de la frontera de los Estados Unidos y México.

Todas las reuniones de la Junta Ambiental del Buen Vecino son públicas. Para más información, vea el sitio de la Junta en la red, <http://www.epa.gov/ocem/gneb>, o contacte al Oficial Federal Designado, Elaine Koerner, al (202) 233-0069 o koerner.elaine@epa.gov.

Advertencia: Este Informe fue escrito para cumplir con la misión de la Junta Ambiental del Buen Vecino (la Junta); un comité de asesoría pública autorizado bajo la Sección 6 del Acta de Iniciativa de Empresa para las Américas, 7 USC § 5404. Este es el Décimo Informe de la Junta al Presidente y Congreso de los Estados Unidos. EPA maneja las operaciones de la Junta. Sin embargo, este informe no ha sido revisado por la EPA para su aprobación, y por lo tanto, el contenido y recomendaciones del informe no representan necesariamente los puntos de vista y políticas de la EPA, ni de otras agencias que forman parte de la Rama Ejecutiva del gobierno federal, ni tampoco la mención de nombres o productos comerciales constituye una recomendación para su uso.

EPA 130-R-07-003

Para ver una copia electrónica de este informe ir a:

<http://www.epa.gov/ocem/gneb/gneb10threport/espanol-gneb-10th-report.pdf>

<http://www.epa.gov/ocem/gneb/gneb10threport/English-GNEB-10th-Report.pdf>

Crédito fotográfico de la tapa, de arriba a abajo: Paul Ganster, Universidad Estatal de San Diego; Aduanas y Protección Fronteriza de los EEUU; <http://www.midwestwilderness.com>; Paul Ganster, Universidad Estatal de San Diego; y (fondo tenue) Paul Ganster, Universidad Estatal de San Diego.

Tabla de Contenido

Carta al Presidente ii

Recomendaciones a Simple Vista 1

Introducción..... 2

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN LA FRONTERA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO

Sección 1: Contexto 5

Historia de la Protección Ambiental y de la Seguridad Fronteriza 7

Definiciones de Seguridad 9

Instituciones de Protección Ambiental 10

Instituciones de Seguridad Nacional 13

Acontecimientos Recientes 13

Sección 2: Cruces de Indocumentados 17

Impactos Ambientales Mixtos 18

Desafíos y Próximos Pasos..... 19

Proyectos y Asociaciones 24

Sección 3: Cruces de Materiales Peligrosos 27

Cruces Fronterizos 29

Más Allá de los Cruces Fronterizos 31

Desafíos y Próximos Pasos..... 34

Proyectos y Asociaciones 37



Informe Administrativo 41

Reuniones de la Junta en el 2006 42

Otras Actividades 44

Composición de la Junta 52



Chair
Paul Ganster, Ph.D.
Telephone: (619) 594-5423
Email: pganster@mail.sdsu.edu

Designated Federal Officer
Elaine Koerner, DFO
Telephone: (202) 233-0069
Email: koerner_elaine@epa.gov
www.epa.gov/ocem/gnbe

Marzo 14, 2007

Sr. Presidente
Sr. Vicepresidente
Sra. Presidente de la Cámara de Representantes

De parte de la Junta Ambiental del Buen Vecino, su consejera en cuanto a las condiciones ambientales y de infraestructura a lo largo de la frontera Estados Unidos-Méjico, tengo el gusto de presentarle el *Décimo Informe de la Junta Ambiental del Buen Vecino al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos*.

Este año, nuestra recomendación trata sobre la intersección de la protección ambiental y la seguridad en la frontera de los Estados Unidos y Méjico. Hemos concentrado nuestra atención en dos temas: los cruces de personas indocumentadas y los cruces de materiales peligrosos. Para encarar los desafíos relacionados a los cruces de personas indocumentadas, protegiendo al mismo tiempo el frágil medio ambiente de la región, aconsejamos que los responsables de políticas federales se concentren en dos áreas: (1) fortalecer la comunicación y la colaboración entre las agencias de seguridad y de protección ambiental, incluyendo a las agencias de administración de tierras; y (2) aumentar la combinación estratégica de tecnología, infraestructura y personal para reflejar las diferentes necesidades ambientales y de seguridad de los distintos sectores de la región fronteriza. En cuanto a los desafíos relacionados con los cruces de materiales peligrosos, sin descuidar la protección al medio ambiente, también destacamos dos áreas: (1) en los puertos de entrada—promover inspección más minuciosa, cooperación y repetición de las mejores prácticas; y (2) más allá de los puertos de entrada—efectuar un seguimiento más fuerte de materiales peligrosos y apoyar incondicionalmente a los respondedores a emergencias con más entrenamiento, mejor equipamiento y mayor facilidad de movimiento al responder a emergencias transfronterizas.

Apreciamos la oportunidad de ofrecerle a usted estas recomendaciones en este, nuestro Décimo Informe, y respetuosamente le pedimos una respuesta. Además, nos complace el diálogo permanente con la Rama Ejecutiva y el Congreso sobre la implementación de nuestras recomendaciones.

Respetuosamente,

Paul Ganster,
Presidente de la Junta

Administrative support is provided by the U.S. Environmental Protection Agency, Office of Cooperative Environmental Management Mail Code 1601E
655 15th Street NW Suite 800, Washington, DC 20005* (T) 202-233-0090 *(F) 233-0060

Décimo Informe de la Junta Ambiental del Buen Vecino

“Protección Ambiental y Seguridad en la Frontera de Estados Unidos y México”

Recomendaciones a Simple Vista

Cruces de Indocumentados

Para tratar problemas asociados con el flujo no autorizado de gente a través de áreas rurales de la frontera de los Estados Unidos y México, y también para continuar protegiendo la calidad ambiental de la región, la Junta Ambiental del Buen Vecino recomienda:

Fortalecer la comunicación y la colaboración entre las agencias de seguridad y de protección ambiental, incluyendo las agencias de manejo de tierras, en ambos lados de la frontera. La cooperación y participación temprana y continua en el diálogo entre estas agencias contribuirá para lograr soluciones efectivas que sirvan a las misiones fundamentales de seguridad nacional y protección ambiental, abordando al mismo tiempo las preocupaciones sobre la calidad de vida de las comunidades fronterizas.

Emplear estratégicamente una mezcla de tecnología y personal para satisfacer las necesidades ambientales y de seguridad de las diferentes secciones de la región fronteriza. Las barreras vehiculares y tecnología de sensores a lo largo del límite que permitan la conectividad de los hábitats y la migración de especies importantes pueden ser muy útiles en áreas rurales caracterizadas por hábitats frágiles.

Cruces de Materiales Peligrosos

Para proveer seguridad y vigilancia en los puertos de entrada y más allá de los mismos, así como protección ambiental contra los riesgos asociados con el flujo transfronterizo de materiales peligrosos, la Junta recomienda:

En los puertos de entrada, aumentar el número de inspectores de materiales peligrosos y establecer sitios y horarios específicos para los vehículos con materiales peligrosos. Duplicar los métodos exitosos, incluyendo el uso de tecnología apropiada. Aumentar la cooperación entre las agencias ambientales y de seguridad mediante procedimientos que reflejen los requerimientos de personal y lenguaje específicos para cada sitio.

Más allá de los puertos de entrada, resolver las cuestiones de responsabilidad para el personal transfronterizo que responde a emergencias y proveer apoyo puntual que refleje las necesidades de las comunidades fronterizas dentro del gran plan estratégico nacional. Documentar y compartir las mejores prácticas de respuesta a emergencias. Además, aumentar el diálogo con las entidades tribales sobre los materiales peligrosos transportados cerca y a través de sus territorios y aumentar la participación tribal en los ejercicios de entrenamiento.

Introducción

En este Décimo Informe al Presidente y al Congreso, la Junta examina las **ramificaciones ambientales** relacionadas con un tema que ha logrado un papel primordial en el escenario de las políticas internas: la seguridad nacional. Más específicamente, el informe examina cómo las actividades de protección ambiental y seguridad nacional están coinciden a lo largo de la frontera de Estados Unidos-Méjico, y la dinámica que se produce. El resultado: un conjunto de recomendaciones de cómo el gobierno federal de los Estados Unidos puede ayudar a mantener una protección ambiental sólida a lo largo de la frontera y al mismo tiempo fortalecer las actividades de seguridad fronteriza.

Con el objeto de mantener las recomendaciones enfocadas, la Junta decidió concentrarse principalmente en dos tipos de actividades de seguridad fronteriza y los sucesos durante el año de 2006 que ayudaron determinarlos. El primer tipo se relaciona con los posibles impactos ambientales de los cruces de personas indocumentadas como son los migrantes indocumentados y los traficantes de drogas, y el trabajo de seguridad que se lleva a cabo para impedir estos cruces. Aunque se reconoce que algunos cruces no autorizados de personas ocurren por medio de vehículos en los principales puertos de entrada, la Junta decidió concentrarse principalmente en los cruces que realizan en las áreas más rurales. Así, la Junta contempló los posibles impactos a la salud humana y a los ecosistemas.

Un tema que surge es el de la necesidad de un enfoque más estratégico para mitigar la degradación ambiental no intencional que puede ocurrir a raíz de las labores para impedir los cruces de personas indocumentadas. Por ejemplo, las persecuciones a altas velocidades pueden dañar en forma inadvertida el frágil ecosistema de los desiertos, destruyendo plantas y ani-

males, interrumpiendo las rutas migratorias y acelerando la erosión de los suelos.

Además, preocupa que las actividades de la Patrulla Fronteriza en los diques del Río Bravo, que protegen a su valle inferior contra inundaciones, estén deteriorando la integridad estructural de estos diques. Es así como en algunos casos, un aumento en las actividades de seguridad fronteriza puede deshacer la cuidadosa gestión que las agencias de manejo de tierras estatales y federales han implementado por décadas. Al mismo tiempo, cuando un gran número de migrantes indocumentados logra cruzar la frontera, también pueden producirse impactos ambientales. Por ejemplo, basura y heces humanas pueden quedar esparcidas a lo largo del paisaje, las cuales constituyen una amenaza para la salud humana y el medio ambiente.

El segundo tipo de actividad de seguridad fronteriza que trata este informe se relaciona con el transporte fronterizo de materiales y residuos peligrosos. Los tópicos incluidos son la inspección, la aplicación de leyes, seguimiento y preparación para emergencias en los puertos de entrada y más allá de los mismos, que son parte de este proceso. Los métodos de transporte incluyen los materiales transportados en camiones y trenes, pero no las tuberías o los conductos transfronterizos de gas natural, petróleo y derivados del petróleo. En contraste con los cruces de personas, en los puertos de entrada el tráfico comercial, la seguridad fronteriza y la protección ambiental son a menudo implementados conjuntamente. La realidad es que la falta de recursos para este tipo de trabajo de seguridad fronteriza bien puede resultar en daños al medio ambiente. Por ejemplo, un equipamiento y entrenamiento insuficientes para responder a emergencias pueden comprometer la capacidad para responder en forma eficaz a un derrame de material peligroso que contamine un río o un acuífero cercano. Así, un tema que surge de esta sección del informe es la necesidad de mayores recursos que per-



La cerca fronteriza en Otay Mesa entre San Diego y Tijuana. La cerca está construida con placas de acero de desechos de pistas de aterrizaje. Un monumento fronterizo, mantenido por la Comisión Internacional de Límites y Aguas, puede observarse a la derecha en primer plano, y la construcción de la doble cerca e infraestructura asociada pueden verse a la izquierda, más allá de la cerca de placas de acero de pistas de aterrizaje. (Fuente: Paul Ganster, Universidad Estatal de San Diego)

mitan fortalecer estos esfuerzos combinados para la protección del medio ambiente y la seguridad.

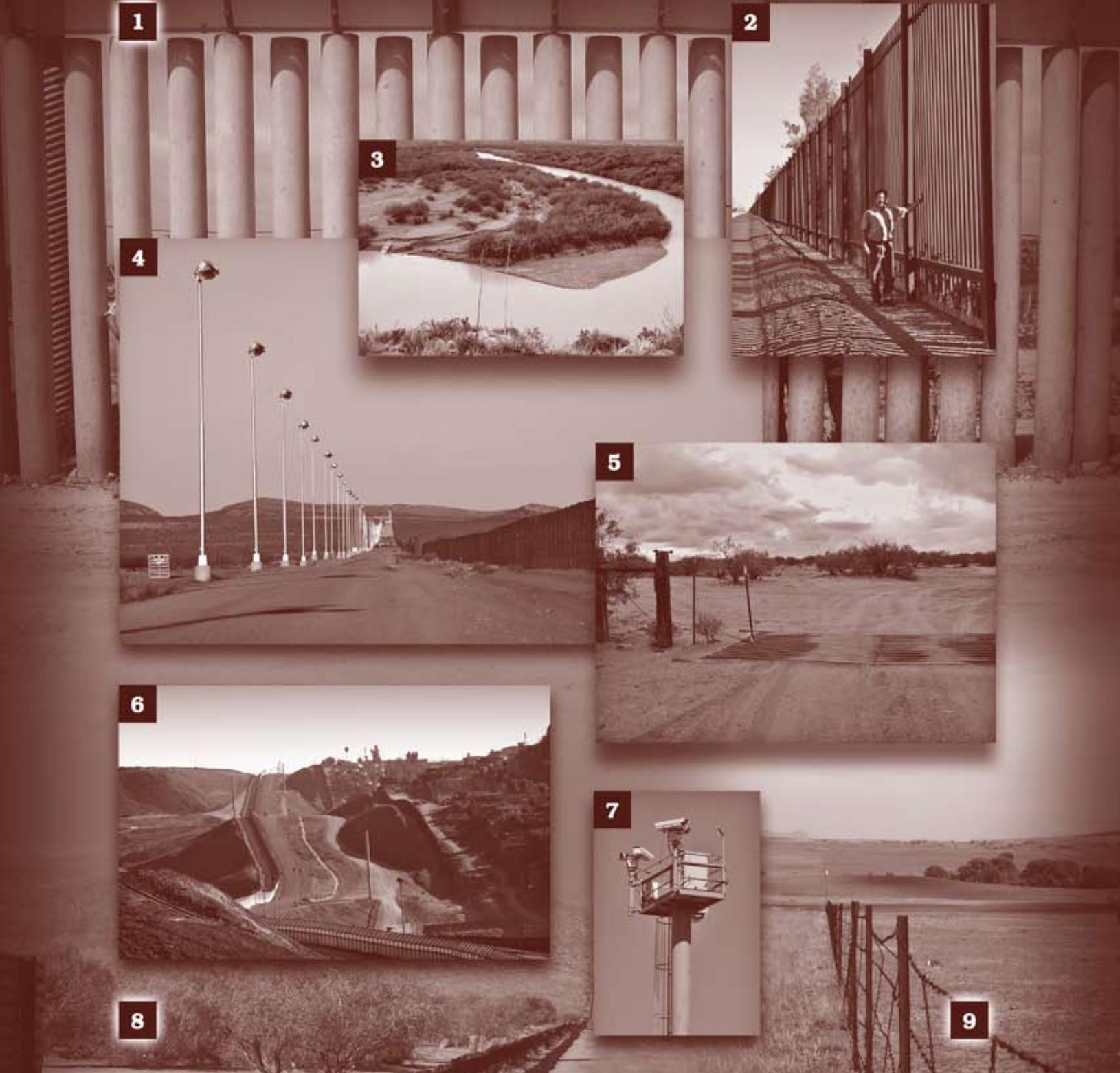
La Junta decidió en forma consciente *no* incluir en este informe otras ramificaciones ambientales significativas como la contaminación del aire que resulta de las demoras por las inspecciones de seguridad en los puertos de entrada (ver el *Noveno Informe* de la Junta, <http://www.epa.gov/ocem/gneb9threport/espanol-gneb-9th-Report.pdf>); las amenazas al ecosistema por especies invasoras (ver *Carta de Comentarios 2004* de la Junta sobre este tema); y la dispersión de pesticidas. La Junta, en su mayor parte, tampoco elabora sobre los vínculos entre la calidad ambiental y las políticas nacionales, en lo que se refiere a inmigración, desarrollo económico e intercambio comercial—aunque reconoce los méritos de examinar estos vínculos. Su enfoque principal ha sido formular recomendaciones basadas en las políticas actuales de seguridad fronteriza y del medio ambiente.

Las comunidades a lo largo de la frontera suroeste de los Estados Unidos enfrentan un conjunto singular de desafíos, y merecen la atención especial de las políticas ambientales a medida que aumentan allí las actividades de seguridad fronteriza. Desde el punto de vista de la Junta, existe una oportunidad crítica para fortalecer las asociaciones entre las instituciones de seguridad y las de protección ambiental en ambos lados de la frontera. Estas asociaciones deberían incluir entidades no gubernamentales y gubernamentales a todo nivel, incluyendo las tribus. Por ejemplo, el Depar-

tamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (U.S. Department of Homeland Security—DHS) tiene la oportunidad de incorporar en sus políticas una fuerte ética ambiental a medida que continúa redefiniendo sus funciones y responsabilidades. También tiene la oportunidad de hacer que las partes interesadas comprendan mejor sus prácticas ambientales y de seguridad a través de una mayor transparencia y comunicación. La existencia de otras oportunidades debe ser identificada y abordada y se deben destacar las asociaciones existentes a todo nivel.

Es importante asegurar nuestras fronteras, pero la protección del medio ambiente no debe quedar relegada a un segundo lugar detrás de la seguridad al momento de promulgar políticas. Una fuerte seguridad y una fuerte protección ambiental a lo largo de la frontera de Estados Unidos-Méjico pueden existir conjuntamente. Dentro de este escenario, el gobierno federal tiene una función esencial. Se espera que las recomendaciones que siguen a continuación ayuden en el avance de un proceso en el que todas las partes saldrán beneficiadas.



1**2****3****4****5****6****7****8****9**

A lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México se utiliza una combinación de barreras y tecnología de vigilancia para ayudar a la Patrulla Fronteriza a tratar los problemas de seguridad. (1) Cerca o barrera tipo Bollard, una combinación de columnas de concreto con malla metálica en la parte superior, localizada cerca de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el tramo del Valle del Río Tijuana de San Diego, California. (2) Cerca alta de barras de acero entre Calexico, California, y Mexicali, Baja California. (3) El Río Bravo/Grande a la altura del Big Bend, Texas. (4) Nueva cerca construida de acero sobrante reciclado, con iluminación de estadio, al este de Naco, Arizona. (5) Barrera guardaganchos en zona fronteriza de la Nación Tohono O'odham al sur de Sells, Arizona. (6) Cerca múltiple, caminos de acceso e iluminación de estadio al este del Puerto de Entrada de San Ysidro, California. (7) Torre con cámara de video al este de Douglas, Arizona. (8) Barrera vehicular en la parte oriental del Condado de San Diego, diseñada para permitir el desagüe y el cruce de pequeños animales dificultando al mismo tiempo el cruce de vehículos. (9) Cerca de alambre de púas en el Valle de San Rafael al este de Nogales, Arizona/Sonora. (Fuente: Paul Ganster, Universidad Estatal de San Diego)

Contexto

La seguridad nacional es un tema complejo y de múltiples facetas, especialmente cuando se refiere a la frontera del sur de los Estados Unidos. Los residentes de México y de más allá, en un afán de encontrar una mejor forma de vida para ellos y sus familias, han estado cruzando la frontera Estados Unidos-México por décadas sin documentación válida de los Estados Unidos. Este flujo siempre creciente de migrantes es acompañado por elementos criminales envueltos en una variedad de actividades ilícitas. Estas actividades criminales incluyen el contrabando de personas por los *coyotes*, el tráfico de drogas y crímenes en contra de los indocumentados como son los asaltos, robos y homicidios. Debido a que los efectos inmediatos de estos flujos migratorios han estado confinados en su mayor

parte a las comunidades fronterizas de la región sureste del país, la inmigración no autorizada ha recibido en el pasado solamente una atención esporádica en el ámbito nacional.

Sin embargo, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, cambiaron todo esto. El impacto de los ataques, combinado con otros problemas fronterizos como el nivel de migración indocumentada sin precedentes de los últimos 15 años, han agudizado la atención de la comunidad responsable de políticas internas en materia de seguridad fronteriza. La primera de estas cuestiones fue el contrabando de drogas, que produjo una ola de violencia y una gran incautación de narcóticos en las comunidades fronterizas mexicanas y estadounidenses. Arrestos de funcionarios estadouni-



La Seguridad Nacional a lo largo de 1,952 millas de frontera entre los Estados Unidos y México es un tema complejo y de múltiples facetas. (Fuente: Harry Johnson, Universidad Estatal de San Diego)

DHS Organizational Chart	
Secretary	
Deputy Secretary	
Chief of Staff	
Executive Secretary	
Military Liaison	
Under Secretary Management	
Under Secretary Science and Technology	
Assistant Secretary Policy	
Under Secretary Preparedness	
Under Secretary Federal Emergency Management (FEMA)	
General Counsel	
Assistant Secretary Legislative and Intergovernmental Affairs	
Assistant Secretary Public Affairs	
Inspector General	
Assistant Secretary Office of Intelligence and Analysis	
Director Operations Coordination	
Director Office of Counternarcotics Enforcement	
Ombudsman Citizenship and Immigration Services	
Privacy Officer	
Civil Rights and Civil Liberties Officer	
Director Federal Law Enforcement Training Center	
Director Domestic Nuclear Detection Office	
Federal Coordinator Gulf Coast Rebuilding	
Assistant Secretary Transportation Security	
Administration	
Commissioner United States Customs and Border Protection	
Director United States Secret Service	
Director United States Citizenship and Immigration Services	
Assistant Secretary Immigration and Customs Enforcement	
Commandant, U.S. Coast Guard	

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es una institución global de más de 180,000 empleados que incluye una variedad de agencias de seguridad previamente independientes. Dentro de ella, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), tiene como función fundamental asegurar la frontera de los Estados Unidos y México. La Patrulla Fronteriza esta dentro de CBP. (Fuente: <http://www.dhs.gov/index.shtml>)

idenses y mexicanos, junto con los de criminales de carrera, produjeron la imagen ampliamente percibida en los Estados Unidos de una frontera sin leyes y fuera de control. Esta imagen ha sido fortalecida por el flujo continuado de migrantes indocumentados a través de la frontera.

El resultado fue un enfoque más intenso para aumentar los controles fronterizos. Algunos observadores pensaron que como tantos trabajadores indocumentados cruzan la frontera con facilidad, también podrían hacerlo los terroristas. Llegaron a la conclusión que los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement—ICE) indicaban que las drogas son introducidas regularmente de contrabando en grandes cantidades a través de la frontera y, por lo tanto, lo mismo podrían hacer con cantidades alarmantes de materiales peligrosos.

No obstante el aumento de la preocupación por la seguridad y la respuesta federal a esta preocupación con la asignación de más recursos dedicados a las prácticas de seguridad, las condiciones ambientales a lo largo de la frontera Estados Unidos-México siguen siendo frágiles. Como la Junta Ambiental del Buen Vecino indicó en previos informes anuales al Presidente y al Congreso, aún persiste una variedad de serios problemas de gestión y protección del medio ambiente. Estos desafíos incluyen la dificultad para gestionar los recursos hídricos en un contexto binacional; los requerimientos hídricos para un rápido desarrollo económico y urbanización que tropiezan con la cantidad limitada de suministros hídricos en una región con clima árido; la complejidad para gestionar especies amenazadas y en peligro de extinción en la región transfronteriza; y la manera de abordar la contaminación del aire en cuencas binacionales.

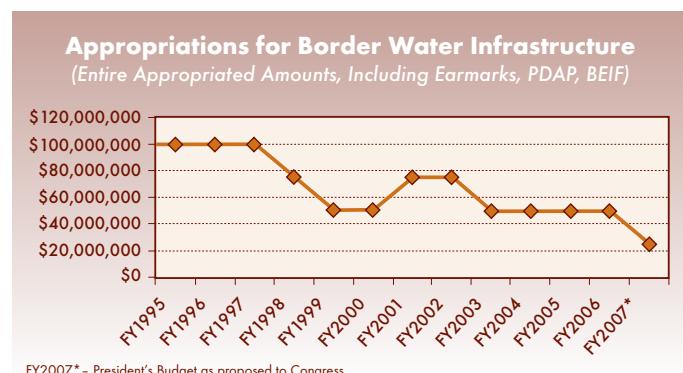
Ahora, con las elevadas preocupaciones por la seguridad, las ya frágiles condiciones ambientales están siendo sometidas a presiones adicionales a raíz de aumentos en los esfuerzos de seguridad y debido al flujo fronterizo de migrantes indocumentados y actividades criminales. Las iniciativas previas que comenzaron a principios de la década de 1990 para intensificar la seguridad fronteriza en los cruces urbanos más grandes, como San Diego y El Paso, han desviado el cruce de indocumentados hacia áreas más remotas en terrenos montañosos y desérticos. La Patrulla Fronteriza y otras agencias de apoyo emplean vehículos con tracción de cuatro ruedas, vehículos para todo terreno, patrullas a caballo y aviones para cumplir con sus responsabilidades de seguridad fronteriza. Caminos provisorios de acceso que son propensos a la erosión también son construidos en estas áreas. Estas actividades de seguridad a menudo dañan en forma inadvertida el paisaje y el hábitat de la fauna y flora silvestre, dejando profundas huellas ambientales en sus trayectorias (ver sección sobre *Cruce de Personas Indocumentadas* en este

informe).

Sumándose a esta amenaza a la calidad ambiental se encuentran los individuos que la Patrulla Fronteriza está tratando de aprehender—migrantes indocumentados, incluyendo muchas mujeres y niños. Estas personas que cruzan, junto con los coyotes y contrabandistas de drogas, han abierto una red de nuevos senderos y de caminos vehiculares informales a lo largo del frágil paisaje y han dejado abandonados en su camino vehículos y toneladas de ropa y basura. Una de las áreas afectadas es el Refugio Nacional de la Vida Silvestre Cabeza Prieta, identificado como uno de los 10 refugios de vida silvestre del país en mayor peligro de extinción. De igual gravedad es el hecho que otros dos terrenos federales en la región—the Refugio Nacional de la Vida Silvestre Buenos Aires, y el Monumento Nacional de Cactus Organ Pipe—han tenido que cerrar al público secciones de sus terrenos en los últimos años por preocupaciones de seguridad vinculadas al contrabando. La cobertura de los medios informativos con respecto al cierre parcial citó estadísticas que indicaban que durante 2004 y 2005 más de 250,000 migrantes ilegales habían entrado al refugio, zanjando más de 1,300 millas de senderos a través de praderas nativas; algunas de estas áreas podrían tardar más de un siglo para su recuperación.

Dentro de este escenario complejo, tanto las agencias de protección ambiental como las agencias de seguridad están encontrando dificultades para efectuar sus trabajos en la forma que desearían. El desarrollo de estrategias exitosas para lograr sus respectivas misiones exige más que un simple esfuerzo global para todo. La región fronteriza cubre cuatro estados de los Estados Unidos, seis estados de México y extensos territorios tribales. Aproximadamente dos tercios de las 1,952 millas de la frontera yacen en Texas y están demarcadas por el Río Bravo. En Texas, la mayoría de las tierras a lo largo de las riberas son de propiedad privada. Por contraste, en Nuevo México, Arizona y California—con excepción de un corto tramo a lo largo del Río Colorado—el límite es una “línea en la arena”, dibujada por una agencia humana a través de un lenguaje de tratados. Esta línea está a menudo contigua a tierras que son de dominio público en la forma de parques nacionales, bosques nacionales, bases militares, terrenos de la Oficina de Administración de Tierras, o parques estatales y locales y áreas protegidas.

Un número importante de tierras a lo largo de la frontera está bajo el dominio de la autoridad soberana de las tribus, especialmente de la Nación Tohono O’odham, cuya reserva ocupa alrededor de 75 millas a lo largo de la frontera con México. Las tribus que habitan en, o cerca, de la frontera internacional están sintiendo las consecuencias de la mayor seguridad en las áreas urbanas, lo que ha empujado a los migrantes indocumentados a cruzar en áreas más rurales, incluyendo las tierras tribales. Las reservaciones en California,



El Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza permite a las comunidades fronterizas de los Estados Unidos y México mejorar sus plantas de tratamiento de aguas residuales y demás infraestructura ambiental. Como lo muestra el gráfico superior, la provisión de fondos ha disminuido en los últimos años. Mientras que en el pasado, la protección ambiental competía principalmente con el crecimiento económico, ahora también se encuentra en desafortunada competencia con la preocupación por la seguridad nacional, para detrimento de ambos intereses importantes. (Fuente: Doug Liden, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, Región 9)

como las de Ewiaapaayp y Campo, han sido abrumadas con la basura abandonada en los cruces de personas indocumentadas, y han padecido un aumento en la violencia relacionada con el contrabando, lo que ha creado condiciones peligrosas para algunos miembros del personal tribal de la agencia ambiental.

Para lograr una fuerte protección ambiental y una fuerte seguridad fronteriza será necesario aplicar métodos específicos para cada escenario, que estén estratégicamente planeados e implementados por medio de la colaboración entre las agencias de protección ambiental y de seguridad y con una participación total de las comunidades afectadas. En esta sección, detallamos el complejo contexto socio-económico, cultural, y ambiental, a partir del cual partes subsiguientes de este informe exploran el nexo entre las preocupaciones ambientales y de seguridad.

Historia de la Protección Ambiental y de la Seguridad Fronteriza

Para balancear los esfuerzos de protección ambiental con los esfuerzos de la seguridad nacional a lo largo de la frontera, resulta útil examinar la historia de ambos conceptos, incluyendo como ha cambiado el debate sobre los mismos desde los eventos del 11 de septiembre de 2001. Hasta principios de la década de 1980, el asunto del medio ambiente/recursos naturales que mereció la atención binacional más formal fue el del abastecimiento de agua. Las aguas superficiales de los dos sistemas principales de ríos fronterizos, el Río

Perfil de la Región Fronteriza de Estados Unidos-México

La región fronteriza de Estados Unidos-México es una de las áreas más dinámicas en el mundo en términos de sus características socio-económicas y tiene un complejo ambiente físico. La zona fronteriza está definida por el Acuerdo de La Paz (ver más abajo) como la región que se extiende aproximadamente 62.5 millas a cada lado de la frontera internacional. Esta frontera internacional se extiende, a su vez, 1,952 millas, desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México.

Un crecimiento rápido de la población y de la economía siguen caracterizando a la región, con una población que se anticipa casi se duplicará entre los años 2000 y 2030. Actualmente, más de 11 millones de personas viven dentro de la zona fronteriza de los 10 estados fronterizos de California, Arizona, Nuevo México y Texas por el lado de Estados Unidos; y de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas por el lado de México.

La mayoría de los residentes fronterizos son urbanos y viven en 14 ciudades hermanas o ciudades gemelas, que se extienden directamente frente a frente a cada lado de la frontera. Los residentes de estas ciudades hermanas efectúan cruces frecuentes de la frontera para trabajar, asistir a escuelas, ir de compras y visitar familiares y amigos. No obstante la presencia de algunas comunidades acaudaladas en la región fronteriza como lo es San Diego, la mayoría está dentro de las áreas más pobres de los Estados Unidos. Si los condados fronterizos de los Estados Unidos constituyeran el quincuagésimo-primer estado, éste estaría situado en el último lugar, con referencia al resto de los estados, en acceso a servicios de salud; segundo en índice de mortalidad debido a la hepatitis; tercero en muertes relacionadas con la diabetes; último en ingresos *per cápita*; primero en número de escolares viviendo en la pobreza; y primero en número de niños sin seguro de salud (informe de la Coalición de Condados Fronterizos de Estados Unidos-México *En la Encrucijada: Condados Fronterizos Estados Unidos-México en Transición*, marzo de 2006). Los asentamientos no autorizados en la región fronteriza de los Estados Unidos, las colonias, son sintomáticos de la relativa pobreza de la región. Estos asentamientos sin regulaciones carecen de servicios básicos como agua potable, tratamiento de aguas residuales, recolección de residuos sólidos, o de calles pavimentadas y aceras. Solo en Texas hay más de 400,000 residentes en más de 1,500 colonias.

La cultura de la región es en mayor parte Hispánica, incluyendo residentes cuyos ancestros arribaron a las tierras fronterizas siglos atrás, a los que se suman los recién llegados desde México. La región también aloja a 26 tribus federalmente reconocidas, así como grupos relacionados de nativos americanos que viven en México. Los Anglos se suman a esta mezcla cultural, produciendo una región con una variedad de grupos, prácticas y valores culturales. Cada año aproximadamente 300 millones de personas cruzan legalmente a los Estados Unidos desde México a través de cerca de 50 cruces fronterizos. Además, debido a los flujos migratorios en gran escala relacionados a factores económicos, muchos otros extranjeros entran sin documentación. Alrededor de 1.1 millones de migrantes ilegales fueron aprehendidos a lo largo de la frontera con México durante el año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2006; se desconoce el número de personas que evitaron ser aprehendidas y entraron a los Estados Unidos sin documentación válida.

Las economías estadounidense y mexicana están profundamente relacionadas. México es el segundo país con mayor intercambio comercial con los Estados Unidos, y los Estados Unidos es el principal para México. Las importantes vías de transporte que atraviesan la región fronteriza facilitan un intercambio comercial bilateral de 292 mil millones de dólares entre los dos países. Esta integración económica es especialmente evidente en la región fronteriza. El robusto intercambio comercial es parcialmente debido a la industria maquiladora, la que con plantas manufactureras en México—normalmente operando conjuntamente con “plantas gemelas” en los Estados Unidos—montan partes industriales foráneas para después exportar los productos terminados. La mayoría del intercambio comercial bilateral se mueve en camiones a través de la frontera y entre las ciudades contiguas, saturando la infraestructura fronteriza de transportación y puertos de entrada. (Los efectos ambientales negativos que resultan, más las iniciativas para tratar estos efectos, se detallan en el *Noveno Informe de la Junta*).

El medio ambiente físico de la región es variado y complejo. Incluye desiertos, cadenas de montañas, ríos, humedales, estuarios y acuíferos compartidos. También abarca una variedad de climas, una notable diversidad biológica, (incluyendo muchas especies raras y amenazadas) y parques nacionales y áreas protegidas. En general, las tierras fronterizas se caracterizan por la aridez y fragilidad de los ecosistemas, los cuales están en grave estrés a raíz del impacto de las actividades humanas.

Grande/Río Bravo y el Río Colorado, fueron compartidas por los Estados Unidos y México de acuerdo con los términos de la Convención de 1906 y el Tratado de Aguas de 1944. Esta partición de las aguas superficiales es administrada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas, Estados Unidos y México (abreviada IBWC en inglés y CILA en español).

En la medida que aumentó la población en el área fronteriza, se agudizaron varias preocupaciones ambientales de larga trayectoria, afectando a residentes y comunidades en ambos lados. Entre las preocupaciones más prominentes figuran la sequía e inundaciones, una infraestructura inadecuada para el saneamiento y para la distribución y el tratamiento del agua, riesgo por pesticidas y residuos peligrosos, pérdida de áreas naturales como el hábitat ribereño, agotamiento y contaminación de acuíferos, cuestiones sobre la calidad del aire en zonas urbanas, contaminación ocasionada por

fundidoras ubicadas en el “triángulo gris” de la región fronteriza de Sonora-Arizona y numerosos problemas concomitantes de salud ambiental. Algunos de estos asuntos fueron atribuidos a condiciones físicas y climáticas, pero la mayoría de las dificultades fueron causadas por el ser humano. Entre las causas que deterioran las condiciones ambientales se encuentran el crecimiento económico y la industrialización; una mayor producción agrícola industrializada; el gran crecimiento de la población; y la rápida urbanización. Estos acontecimientos estresaron y presionaron el medio ambiente y los recursos naturales de la región, y en gran parte quedaron sin ser atendidos en ese entonces.

Sin embargo, en 1983, los presidentes de México y de los Estados Unidos firmaron el *Acuerdo de La Paz sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente*. El Acuerdo de La Paz creó grupos binacionales de trabajo para abordar sistemática-

mente una variedad de problemas ambientales, y pasó a ser la base para subsiguientes acuerdos fronterizos bilaterales del medio ambiente. En 1992, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Environmental Protection Agency—EPA) y su homóloga mexicana (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales—SEMARNAT), comenzaron a elaborar en una serie de programas binacionales de protección ambiental, de los cuales el más reciente es Frontera 2012. Una motivación adicional para una protección ambiental más fuerte provino del acuerdo bilateral ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (North American Free Trade Agreement—NAFTA) de 1994, que incluyó la creación de organizaciones ambientales binacionales y trinacionales.

Las prioridades para una cooperación binacional entre los Estados Unidos y México sin lugar a dudas cambiaron después de los eventos del 11 de septiembre de 2001. Aunque hay puntos de vistas diferentes sobre la medida en que estos acontecimientos produjeron un mayor enfoque en la seguridad fronteriza, no hay dudas que tuvieron un papel muy importante. Algunos observadores llegaron a decir que los subsiguientes intereses reenfocados en la seguridad nacional le quitaron recursos críticos y atención al valioso trabajo ambiental binacional que se estaba efectuando a lo largo de la frontera. Mientras que en el pasado la protección ambiental competía principalmente con el crecimiento económico, ahora también se encuentra en una desafortunada competencia con las preocupaciones por la seguridad nacional, para el detimento de ambos importantes intereses.

Definiciones de Seguridad

Desde los ataques del 11 de septiembre, un sinúmero de debates ha surgido para precisar lo que se incluye dentro de los términos como seguridad interna, seguridad ambiental y seguridad nacional, así como otros conceptos relacionados. A continuación se dan las definiciones seleccionadas por la Junta para ser usadas como puntos de referencia durante el desarrollo del contenido de este informe.

Seguridad Nacional – De acuerdo con *La Estrategia Nacional para la Seguridad Nacional* publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security—DHS) en julio de 2002, seguridad nacional es definida como “un concertado esfuerzo nacional para prevenir ataques terroristas dentro de los Estados Unidos, reducir la vulnerabilidad de los Estados Unidos al terrorismo y minimizar los daños y recuperarse de los ataques que ocurran.” Se describen seis campos críticos de la misión: inteligencia y advertencia; seguridad de las fronteras y de transporte; contratarrorismo interno; protección de infraestructura crítica;

defensa contra terrorismo catastrófico; y preparación para respuesta a emergencias.

Protección Ambiental y Seguridad Nacional – De acuerdo con la *Estrategia para la Seguridad Nacional de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA)*, inicialmente publicada en el año 2002 y revisada en octubre de 2004, los acontecimientos terroristas del 11 de septiembre de 2001 resultaron en una expansión de la misión de la Agencia de Protección Ambiental más allá de su función tradicional de proteger el medio ambiente natural para incluir la protección del medio ambiente contra actos terroristas. Se identifican cinco campos críticos de la misión que están vinculados con la estrategia nacional para la seguridad del territorio y que son también específicos al trabajo de la EPA. Los campos son protección de infraestructura crítica; preparación, respuesta y recuperación; comunicación e información; protección del personal y de la infraestructura de la EPA; y evaluación del uso eficiente de los recursos.

Seguridad Ambiental – Como se describe en *Desertificación, Estrés Ambiental y el Espacio Euro-Mediterráneo* por P. H. Liotta, la seguridad ambiental enfoca cómo la calidad ambiental puede ser degradada por las actividades humanas y cómo esta degradación y escasez de recursos necesarios impactan negativamente el bienestar social. En este aspecto, el enfoque de la seguridad trata la seguridad de la gente y de la sociedad relativa al acceso a recursos adecuados y a la calidad ambiental, y no a las acciones hostiles de otros seres humanos. Por lo tanto, este punto de vista sostiene que la seguridad ambiental y una visión más tradicional de la seguridad, existen en una compleja relación de interdependencia. El fracaso en manejar efectivamente una faceta de esta relación puede llegar a amenazar a la otra dimensión.

Seguridad Fronteriza - Para los propósitos de este *Décimo Informe*, la Junta ha optado por considerar que la seguridad de la frontera de Estados Unidos–México tiene dos componentes claves: atender los impactos asociados con el flujo de migrantes indocumentados a través de la frontera (ver sección *Cruces de Migrantes Indocumentados* de este informe); y fomentar un transporte seguro y eficiente de materiales a través de la frontera (ver sección *Cruces de Materiales Peligrosos* de este informe). También debe señalarse que la publicación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) titulada *La Estrategia Nacional para Seguridad del Territorio* elabora sobre los asuntos de seguridad fronteriza y seguridad del transporte como un solo tema, e incluye ambas fronteras del sur y del norte de los Estados Unidos.

Seguridad Ambiental Fronteriza - Para promover una discusión productiva de políticas nacionales sobre cómo balancear las interpretaciones de seguridad presentadas en el párrafo anterior, la Junta ofrece

Perspectiva Tribal

Las tierras fronterizas de Estados Unidos-México albergan 26 tribus de nativos americanos federalmente reconocidos por los Estados Unidos (ver mapa), como también de grupos de nativos americanos relacionados que viven en México. Estos grupos enfrentan una variedad de problemas asociados con cuestiones del medio ambiente y la seguridad. Por ejemplo, en los Estados Unidos se requiere que soliciten fondos para la seguridad nacional a través de conductos del estado o de los condados. Sin embargo, con frecuencia los estados y condados mismos no reciben suficientes fondos del gobierno federal para poder financiar también a las tribus. El resultado es que la mayoría de las tribus tienen dificultades para obtener fondos que les permitan satisfacer sus más mínimos requerimientos de seguridad nacional (Ver *Frontera 2012 Informe Tribal de Problemas y Resultados*, publicado en abril de 2006 por la Coalición de Protección Ambiental de Nativos Americanos). Una excepción es la Nación Tohono O'odham, que recibió fondos del programa de subvenciones del Departamento de Seguridad Nacional a través del proceso estatal de Arizona para equipos y entrenamiento.

Los fondos para la seguridad nacional son críticamente necesarios debido a que las tribus de la región fronteriza están siendo afectadas profundamente por la nueva modalidad de los indocumentados de cruzar la frontera en áreas rurales, incluyendo tierras tribales. Por ejemplo, en las décadas de los años 1970 y 1980, las reservas tribales cercanas a la frontera del Condado de San Diego, solo ocasionalmente tenían la presencia de migrantes indocumentados y escasa actividad de la Patrulla Fronteriza. Sin embargo, desde el comienzo de la Operación Guardián (Operation Gatekeeper) en 1994, ese escenario ha cambiado dramáticamente. Caso específico: El Hongo, una pequeña comunidad de Baja California en las montañas al este de Tecate cerca de la frontera, se ha convertido en una plataforma central para traficantes de drogas y de extranjeros indocumentados, quienes cruzan la frontera a través de los traspatios de las tribus.

Las tierras tribales a lo largo de la frontera se han convertido en vertederos de grandes cantidades de residuos sólidos que dejan los migrantes indocumentados y contrabandistas de drogas. Adicionalmente, la evidencia anecdótica indica que las tribus están siendo afectadas por las actividades que realizan los agentes del orden para aprehender a extranjeros ilegales. Por ejemplo, las tribus han presenciado un aumento en el número de arrestos en sus comunidades de miembros y no miembros tribales por cobijar a migrantes indocumentados y/o posesión de contrabando. Miembros tribales informan también que los tiroteos aislados y los que cruzan ilegalmente, como también los accidentes por persecuciones en automóviles, están amenazando la seguridad personal en sus comunidades.

Además de las barreras de financiamiento y de los impactos de actividades de los responsables de aplicar las leyes, las tribus también enfrentan barreras de información. Muchas tribus en los Estados Unidos tienen importantes corredores para el transporte e intercambio comercial que atraviesan, o son adyacentes a, sus reservas. Aún así, las tribus no tienen información acerca materiales y residuos peligrosos que son transportados a lo largo de estos corredores. Sin esta información, las tribus no pueden prepararse adecuadamente para responder a emergencias. Por ejemplo, los Indios Cahuilla del Desierto Torres Martínez, tienen un gran número de camiones que cruzan sus territorios transportando materiales peligrosos entre Mexicali y Los Ángeles; sin embargo, la tribu no tiene acceso a la información de los manifiestos de carga que les ayudaría a prepararse para emergencias.

una amplia perspectiva de seguridad ambiental fronteriza que es mitigar y prevenir amenazas potenciales a la salud pública, calidad ambiental e infraestructura social o de la economía, en las fronteras de los Estados Unidos. La seguridad ambiental fronteriza incluye la eliminación de amenazas provenientes de cruces de migrantes indocumentados, así como el transporte inapropiado, no autorizado o indocumentado de materiales peligrosos, tóxicos, radiológicos o patológicos que pudieran potencialmente causar algún daño al público y/o a la infraestructura existente; o que pudieran ser potencialmente usados para amenazar la seguridad de los Estados Unidos o sus aliados fronterizos. Adicionalmente, la seguridad ambiental fronteriza implica asegurar la habilidad de las comunidades para responder a emergencias causadas por estas sustancias en áreas cercanas y de la frontera, o cualquier otro tipo de amenaza.

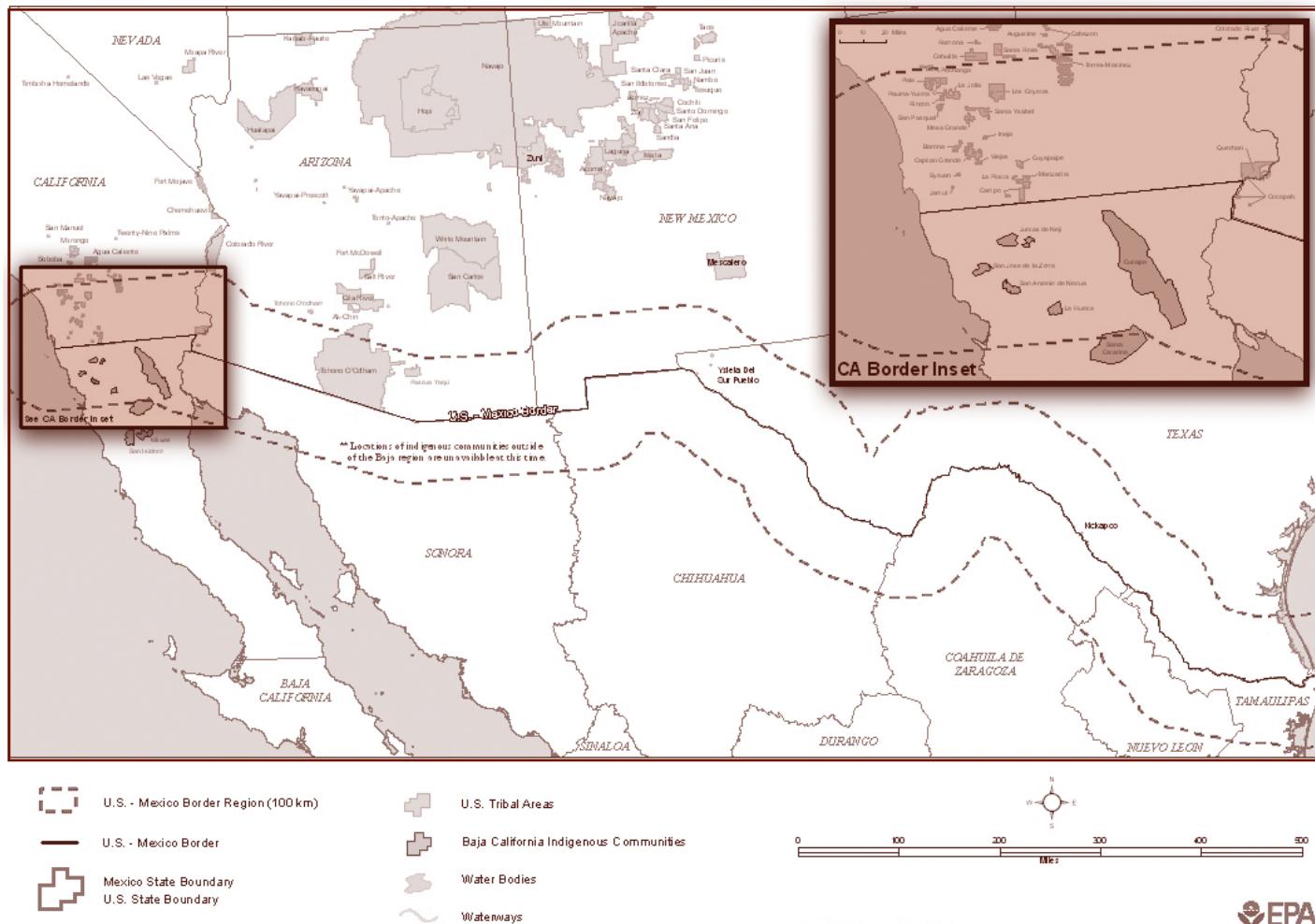
Instituciones de Protección Ambiental

Instituciones de los Estados Unidos

Las principales agencias e instituciones responsables de la protección ambiental a lo largo del lado estadounidense de la frontera, operan en el ámbito federal, estatal y local. Sumándose a esta compleja mezcla de instituciones están las actividades de las tribus de nativos americanos. Algunas de estas actividades tribales son emprendidas en conjunto con las agencias estatales, federales y locales, mientras que otras son emprendidas como naciones autónomas.

En el ámbito federal, la EPA, establece estándares y regulaciones nacionales para proteger la salud humana y el medio ambiente. Aunque la EPA tiene el liderazgo para la regulación y aplicación de la mayoría de los asuntos ambientales en los Estados Unidos, otras agencias federales como el Departamento de Agricultura y el Departamento del Interior cooperan en materias relacionadas con la preservación de tierras y la protección ecológica. Otras agencias federales también tienen funciones claves en la región fronteriza. Por ejemplo, bajo la Ley Nacional de Política Ambiental (National Environmental Policy Act—NEPA), los proyectos financiados federalmente como la construcción de una represa, deben ser evaluados por impactos al medio ambiente. De esta forma, agencias como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, la Oficina de Restauración, la sección estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IWBC), y las agencias del Departamento de Seguridad Nacional como Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pueden participar en las actividades de protección ambiental.

U.S. - Mexico Border Tribes and Indigenous Communities

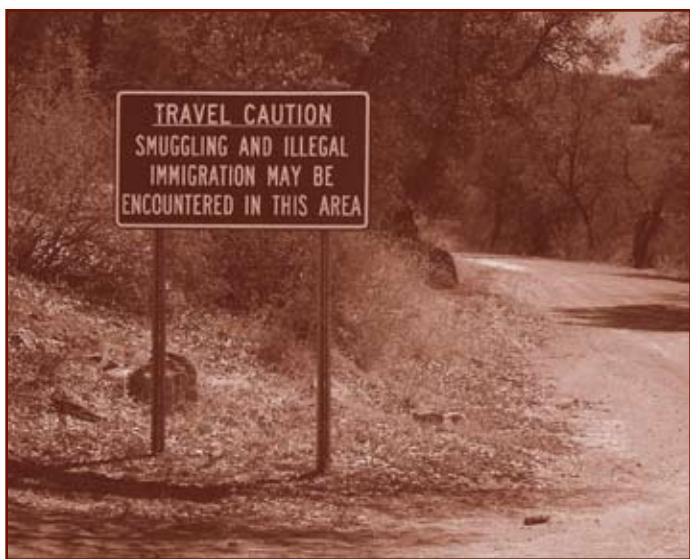


Comunidades de nativos americanos de la región fronteriza enfrentan una gama de desafíos asociados con los asuntos ambientales y de seguridad. (Fuente: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, Región 9 Centro de Sistema Información Geográfica)

Una excepción a esta regla es la Ley de Identificación Real de 2005 (Real ID Act of 2005) (PL 109-13), recientemente promulgada. Esta ley permite al Secretario de Seguridad Nacional eximir todos los requerimientos legales necesarios para asegurar una rápida construcción de barreras y caminos necesarios para prevenir la inmigración ilegal, como fue el caso de la construcción del corredor de seguridad en la región de San Diego-Tijuana.

Las agencias ambientales estatales, locales y tribales intervienen al delegárseles autoridad para ejecutar la mayoría de los programas reguladores federales como el otorgamiento de permisos ambientales y la garantía de cumplimiento. Estas agencias tratan asuntos relacionados con la contaminación y la calidad del aire, protección y regulación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, disposición y manejo de residuos sólidos y líquidos, salud ambiental y ocupacional y materiales peligrosos y respuesta a emergencias.

Aunque cada estado de los Estados Unidos maneja la protección ambiental de modo diferente, los asuntos mismos, y los enfoques de manejo de repartir las responsabilidades recibidas desde el nivel federal, son a menudo similares. Debe también mencionarse que en áreas que no están reservadas para el gobierno federal, los estados han desarrollado leyes y regulaciones bastante distintas; las aguas subterráneas son un ejemplo. En algunos casos, los estados en realidad pueden implementar leyes y regulaciones más estrictas que las implementadas por el gobierno federal, como California que lo hizo recientemente con sus reglamentos y regulaciones para reducir en un 25 por ciento la emisión de gases de efecto invernadero en los próximos 15 años. Los gobiernos locales y las agencias relacionadas también aprueban una variedad de leyes y regulaciones que tratan los asuntos ambientales, lo que agrega más complejidad a las regulaciones ambientales a través de los distintos niveles de gobierno.



Tanto el Monumento Nacional de Cactus Organ Pipe como el Refugio Nacional de Vida Silvestre Buenos Aires han tenido que cerrar al público secciones de sus terrenos en los últimos años por preocupaciones de seguridad vinculadas al contrabando. Aquí, en el cercano Bosque Nacional Coronado, funcionarios federales han erigido carteles alertando a los viajeros sobre el posible encuentro con actividades de contrabando y de inmigración ilegal. (Fuente: Paul Ganster, Universidad Estatal de San Diego)

Instituciones Mexicanas

La frontera internacional que separa a los Estados Unidos de México delinea dos culturas, economías, sistemas políticos y sistemas de administración pública totalmente diferentes. Los Estados Unidos fue creado con un sistema federal en el que el poder es compartido entre el gobierno nacional y de cada estado. En contraste, en México, la autoridad, el financiamiento, y el proceso de decisiones reside principalmente en el gobierno nacional. Aunque se ha dado en los últimos años una gradual evolución hacia la descentralización, México ha retenido una estructura gubernamental fuertemente centralizada. Los funcionarios estatales y municipales frecuentemente dependen de ingresos desembolsados centralmente y tienen una autoridad y presupuestos limitados para manejar los asuntos locales y regionales. En muchos casos, los delegados locales de las agencias federales son las entidades administrativas claves para los asuntos locales. Esta situación se aplica a casi todos los aspectos de gobernabilidad en grados variables: educación, salud, vivienda, trabajo, agricultura, energía—y, por supuesto, el agua, los recursos naturales y el medio ambiente. Aunque la descentralización a través de la delegación de responsabilidades y presupuestos de parte del gobierno federal hacia las entidades estatales y municipales ha estado en proceso por décadas, el progreso es lento.

Varias instituciones federales dominan el proceso de decisiones ambientales en México. La primera es SEMARNAT, que es responsable de asegurar la sustentabilidad ambiental, el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental, y de representar a México en la cooperación ambiental binacional. En el transcurso de los últimos 15 años, SEMARNAT ha trabajado muy de cerca con la EPA para desarrollar y ejecutar una serie de iniciativas ambientales binacionales basadas en el Acuerdo de La Paz: el Plan Integral Ambiental Fronterizo, Frontera XXI y actualmente, Frontera 2012. SEMARNAT mantiene oficinas regionales en cada uno de los estados, y la agencia está constreñida por una limitación presupuestaria, de personal y de influencia entre los ministerios. Asimismo, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que funciona dentro de SEMARNAT, dicta la mayoría de los aspectos relacionados con la política nacional del agua. Sin embargo, para la mayoría de los efectos, CONAGUA es cuasi-autónoma y representa no solo los intereses de SEMARNAT, sino también de varios ministerios más poderosos: finanzas, agricultura, energía, salud, desarrollo social y administración. Las prioridades establecidas por CONAGUA frecuentemente reflejan imperativos de desarrollo nacional, dejando en segundo grado de importancia los intereses ambientales.

Adicionalmente, cada estado de México tiene su propia agencia ambiental y agencia de abastecimiento de agua. Pero debido a que estas instituciones son dependientes del gobierno central para su financiamiento, su campo de acción y su independencia están circunscriptos. Al mismo tiempo, a pesar de los avances logrados en la última década, la sociedad civil mexicana no ha mantenido el mismo paso que sus análogas de los Estados Unidos. Por una variedad de razones—las dificultades para obtener categoría oficial como organizaciones no gubernamentales, el relativo aumento reciente en activismo ambiental, la relativa falta de tiempo libre y otras limitaciones sociales—las comunidades y organizaciones no gubernamentales mexicanas a menudo no han tenido la influencia que han obtenido grupos similares de los Estados Unidos. El resultado es que el proceso de decisiones ambientales en México permanece mucho más centralizado, uniforme y dominado por el gobierno que en los Estados Unidos. Esta situación tiene considerable impacto en la habilidad de los gobiernos estatales y municipales de México para efectuar políticas ambientales a lo largo de su frontera norte con los Estados Unidos.

Otras Instituciones

Además de estas instituciones gubernamentales de los Estados Unidos y México, han sido creadas varias organizaciones internacionales con responsabilidades para la protección ambiental: el Banco de Desarrol-

lo de América del Norte, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y la Comisión de América del Norte para Cooperación Ambiental, la cual es trinacional. También, dentro del marco del Acuerdo de La Paz, el Programa Ambiental Frontera 2012 Estados Unidos-México, reúne a muchas de las partes interesadas y agencias para mejorar el medio ambiente fronterizo.

Nótese también que para enriquecer sus recomendaciones al Presidente de los Estados Unidos, la Junta Ambiental del Buen Vecino se comunica activamente con los representantes de grupos colegas mexicanos de asesoría llamados Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable. Estos son Consejos regionales creados por el gobierno federal mexicano que incluyen partes interesadas elegidas y nombradas provenientes de todos los sectores, y que tratan sobre asuntos del medio ambiente y de desarrollo a través de su asesoría a la agencia federal ambiental de México, SEMARNAT (ver *Informe de Negocios* en este informe).

La Comisión Internacional de Límites y Aguas, de los Estados Unidos y México (IBWC/ CILA), ejerce considerable influencia en asuntos relacionados con aguas transfronterizas a lo largo de la frontera de Estados Unidos-México. La Comisión está compuesta de dos secciones, la sección de los Estados Unidos y la sección de México, y es responsable de la aplicación de los tratados de límites y aguas entre los dos países y de solucionar las diferencias que pudieran surgir de su aplicación. Las responsabilidades de la IBWC/CILA incluyen asegurar que las asignaciones de aguas del Río Bravo y del Río Colorado a cada país estén en conformidad con los tratados de aguas, la demarcación de las fronteras entre los dos países, la erección y mantenimiento de monumentos y marcadores fronterizos en la zona de la frontera internacional, tratamiento de problemas sanitarios en la frontera, operación de las represas internacionales y el manejo de otros aspectos relacionados con la administración de aguas transfronterizas.

Las organizaciones no gubernamentales también han tomado una activa participación en materias concernientes a la protección ambiental en las tierras fronterizas. Son notables las labores de organizaciones nacionales como Defensa Ambiental, Fondo Mundial para la Naturaleza y Defensores de la Vida Silvestre en los Estados Unidos, y Pronatura en México. Localmente, numerosas organizaciones no gubernamentales que tratan asuntos específicos también desempeñan una función. Por ejemplo, el Instituto de Culturas Nativas (comúnmente conocido como CUNA) es una organización mexicana sin fines de lucro que abarca las preocupaciones sobre la salud, la cultura y ambientales de la gente indígena de Baja California, incluyendo los Paipai, Kumiai, Kiliwa y Cucapá. Otro ejemplo es la Coalición de Salud Ambiental, que atiende cuestiones de justicia ambiental y residuos tóxicos en la región fronteriza de California-Baja California. La mayoría de

las ciudades gemelas a lo largo de la frontera tienen organizaciones no gubernamentales que incorporan la participación pública en la formulación y aplicación de políticas ambientales en la región.

Instituciones de Seguridad Nacional

La institución federal principal responsable de la seguridad de los Estados Unidos es el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Creado en 2002 por la Ley de Protección del Territorio, es una institución que alberga a más de 180,000 empleados, abarcando varias agencias de seguridad anteriormente independientes. El DHS que desempeña la función crítica en la seguridad de la frontera de Estados Unidos-México: Protección de Aduanas y Fronteras (Customs and Border Protection—CBP). Dentro de esta agencia se encuentra la Patrulla Fronteriza. Los inspectores de CBP constituyen el personal de los puertos de entrada, mientras que la Patrulla Fronteriza opera primordialmente entre los puertos de entrada.

Las agencias de seguridad de los Estados Unidos, tal como la DHS, basan sus estrategias y acciones, en parte, en la información recopilada y analizada por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. El Plan Nacional de Implementación fue lanzado para eliminar duplicaciones y establecer prioridades para la estrategia contraterrorista de la nación, y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional provee una coordinación y dirección general para estas actividades.

Acontecimientos Recientes

Durante los 2 últimos años, se avanzaron varias iniciativas claves en los Estados Unidos, que están ayudando a dar forma a los esfuerzos de seguridad y protección ambiental fronteriza. Primero, como se indicó antes en este informe, la Ley de Identificación Real de 2005 (PL 109-13), que permite al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional eximir todos los requerimientos legales que sean determinados necesarios para asegurar una rápida construcción de barreras y caminos que sean necesarios para prevenir la inmigración ilegal. Esta provisión fue invocada el 22 de septiembre de 2005 para la construcción de una cerca de seguridad y un corredor en la frontera entre San Diego y Tijuana. Esta provisión exime los requerimientos de NEPA, de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, de la Ley de Manejo de Zonas Costeras, de Ley de Aguas Limpias, de la Ley Nacional de Preservación Histórica, de la Ley de Tratado de Aves Migratorias, de la Ley de Aire Limpio y de la Ley de Procedimientos Administrativos. Los funcionarios del HS han explicado que la agen-

Seguridad Fronteriza, Protección Ambiental y el Sector Privado

En el mercado mundial, las compañías deciden la ubicación de sus instalaciones basadas en numerosas consideraciones. Los recursos hídricos, la infraestructura de carreteras, el costo de la mano de obra y su disponibilidad, impuestos, permisos para operar, calidad de vida y estabilidad son solamente algunas de las consideraciones. Dados estos criterios, una mayor cooperación entre las instituciones de seguridad y de protección ambiental que fortalezca ambos tipos de trabajo beneficiaría a la economía de la región fronteriza.

cia ejerció esta opción para avanzar el proyecto de modo más rápido, y que antes y después de esta exención, la agencia ha continuado regularmente sus reuniones con las agencias estatales, locales y federales y miembros de la comunidad claves.

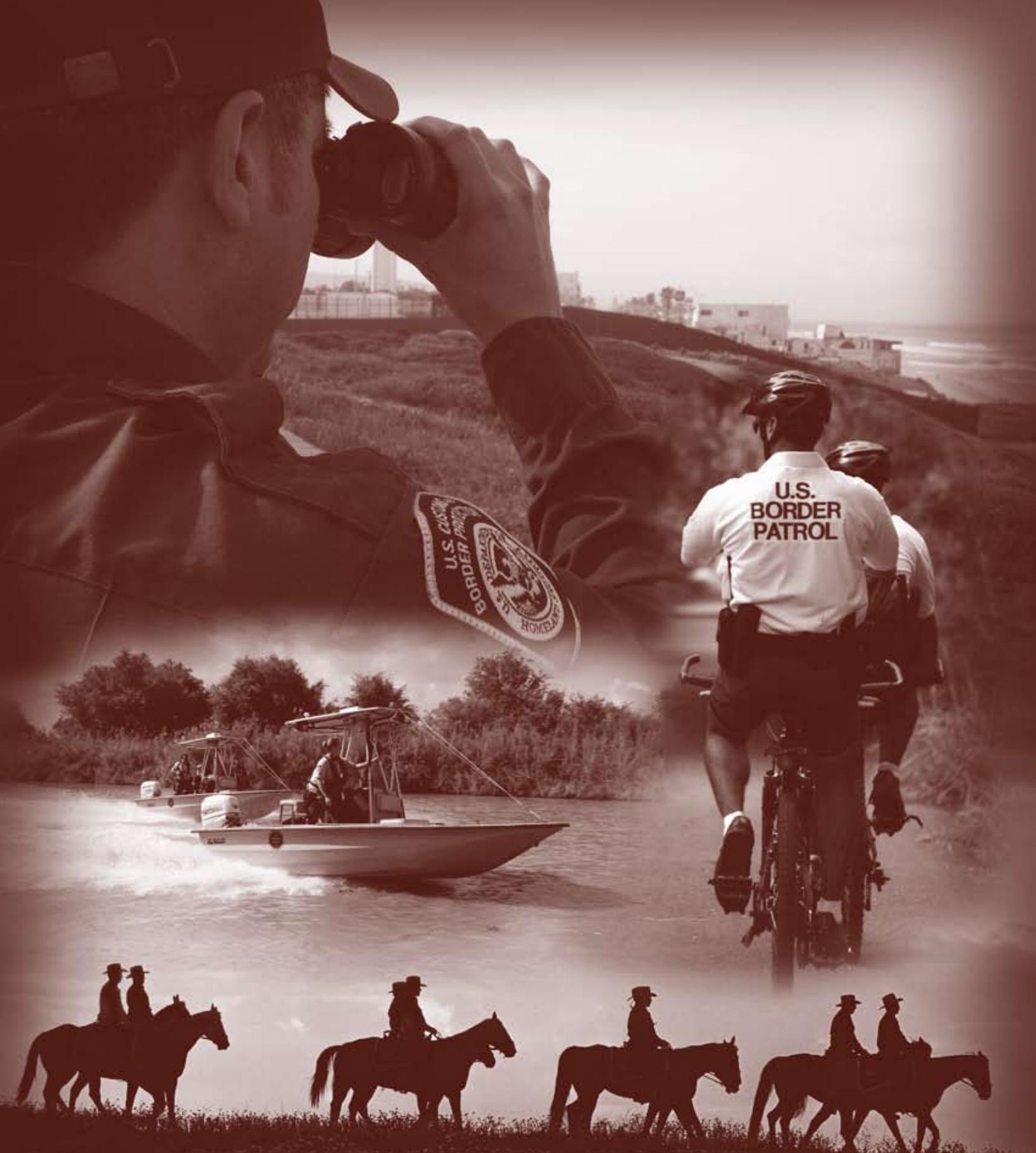
En mayo de 2006, el Presidente Bush propuso desplegar 6,000 tropas de la Guardia Nacional hacia la frontera de Estados Unidos-México para asistir a los agentes de la Patrulla Fronteriza con su trabajo. Las tropas estarían encargadas de ayudar con la operación de los sistemas de vigilancia, analizar inteligencia, instalar cercas, construir caminos de patrullaje y dar entrenamiento, como ha ocurrido en previas ocasiones con el uso de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera. Unos pocos meses después, el Congreso votó por la autorización (pero no el financiamiento) de una cerca física de 700 millas a lo largo de la frontera. Tiempo después, en septiembre de 2006, bajo la Iniciativa para la Seguridad e Fronteras Seguras (Secure Border Initiative—SBI), un importante contrato tecnológico fue otorgado por el HS para la instalación de 1,800 torres de alta tecnología, diseñadas para transmitir videos en vivo a los agentes de la Patrulla Fronteriza equipados con receptores manuales inalámbricos. (SBInet requiere instalar una combinación de cercas, barreras vehiculares, sensores, cámaras y otras tecnologías de vigilancia a lo largo de las fronteras sur y norte de los Estados

Unidos). Mientras tanto, continúa el debate en el Congreso sobre el tipo de infraestructura más efectiva para asegurar la frontera de los Estados Unidos-Méjico del cruce de indocumentados.

En conclusión, el ataque contra los Estados Unidos del 2001 fue sin precedentes y trajo consigo una minuciosa revisión de las prioridades nacionales, incluyendo el funcionamiento de la frontera con México. A raíz de que el ataque constituyó una violación de la soberanía de los Estados Unidos, resultó inevitable que todas las fronteras estadounidenses necesitarían una mejor vigilancia y protección. La frontera sur con México atrajo un intenso escrutinio. El tráfico de drogas, crimen y temor por infiltraciones terroristas, combinados con la creciente preocupación por la inmigración indocumentada, convirtieron el control de la frontera con México en una prioridad nacional.

Considerando las circunstancias que se han caracterizado por un rápido y masivo cambio de prioridades y de distribución de recursos financieros, es esencial poder lograr un sentido de equilibrio razonable. Una fuerte economía mexicana, un medio ambiente sano y por sobre todo, una cooperación y confianza transfronterizas son claves para asegurar la estabilidad y seguridad de la región. La seguridad ambiental (es decir, la garantía de un medio ambiente seguro, abundante, protegido y sustentable), no menos que la impenetrabilidad forzosa, aplicada por las autoridades es un ingrediente esencial para la seguridad nacional. Un medio ambiente saludable en los dos lados de la frontera, con bienestar avanzado para los ciudadanos de ambos países, afianza la seguridad fronteriza. Las soluciones sustentables para los asuntos de seguridad y del medio ambiente requieren la participación múltiples partes interesadas, incluyendo los sectores estatales y locales. La dimensión trinacional es también crítica, en donde las naciones tribales autónomas de los Estados Unidos, y los grupos culturales indígenas relacionados de México, estén activamente incluidos en el desarrollo y la implementación de soluciones efectivas.

En el resto de este informe, la Junta examina las estrategias para balancear la protección ambiental y la seguridad fronteriza en dos escenarios: los cruces de migrantes indocumentados en áreas rurales entre puertos de entradas y los cruces de materiales peligrosos en los puertos de entradas y más allá de los mismos.



Los agentes de la Patrulla Fronteriza cuentan con numerosos medios de transporte para realizar sus labores. (Fuente: Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, fotógrafos Gerald L. Nino y James Tourtellotte, <http://www.dhs.gov>)

Sección 2

Cruces de Indocumentados

Para tratar problemas asociados con el flujo no autorizado de gente a través de áreas rurales de la frontera de los Estados Unidos y México, y también para continuar protegiendo la calidad ambiental de la región, la Junta Ambiental del Buen Vecino recomienda:

Fortalecer la comunicación y la colaboración entre las agencias de seguridad y de protección ambiental, incluyendo las agencias de manejo de tierras, en ambos lados de la frontera. La cooperación y participación temprana y continua en el diálogo entre estas agencias contribuirá para lograr soluciones efectivas que sirvan a las misiones fundamentales de seguridad nacional y protección ambiental, abordando al mismo tiempo las preocupaciones sobre la calidad de vida de las comunidades fronterizas.

Emplear estratégicamente una mezcla de tecnología y personal para satisfacer las necesidades ambientales y de seguridad de las diferentes secciones de la región fronteriza. Las barreras vehiculares y tecnología de sensores a lo largo del límite que permitan la conectividad de los hábitats y la migración de especies importantes pueden ser muy útiles en áreas rurales caracterizadas por hábitats frágiles.



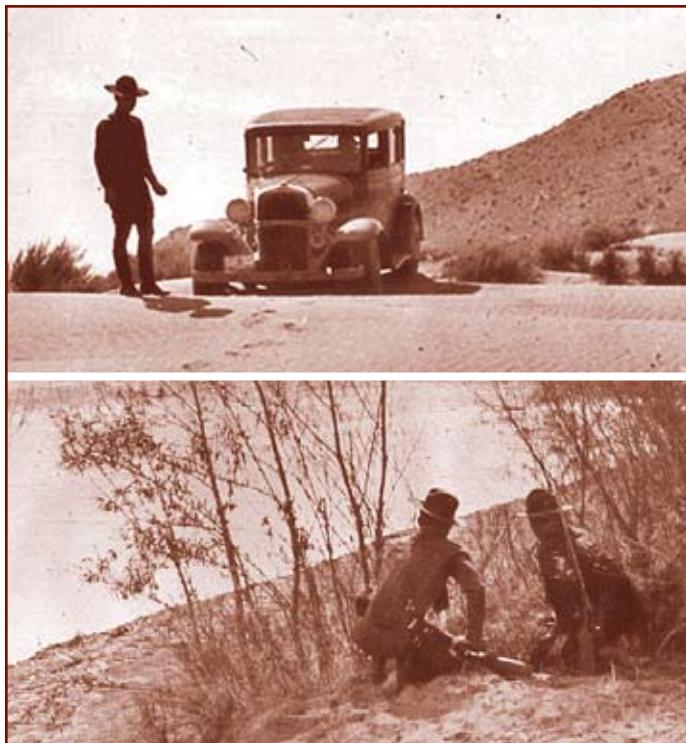
En la actualidad, el cruce ilegal de la frontera entre los Estados Unidos y México significa muy a menudo arriesgar la vida en terrenos montañosos y desérticos de los estados estadounidenses. Estas regiones se caracterizan por una topografía de difícil travesía, temperaturas extremas y la falta de agua. Aunque muchos migrantes indocumentados todavía cruzan en áreas urbanas, el rápido avance de la tecnología de inspección en los puertos de entrada, las mejoras de infraestructura y estrategias más efectivas para aplicar las leyes en las ciudades, han desplazado la mayor parte de este flujo hacia las áreas más rurales. Datos estadísticos confirman esta tendencia. En el año fiscal 1995, la Patrulla Fronteriza del sector de San Diego, California, localizó 524,231 extranjeros deportables. Ese número se redujo a 138,608 en el año fiscal 2004. En ese mismo período, en los sectores más rurales de Yuma y Tucson en Arizona el número creció dramáticamente de 20,894 a 98,060 en Yuma y de 227,529 a 491,771 en Tucson. Este cambio en los patrones de cruce migratorio ha tenido un impacto dramático en el medio ambiente fronterizo.

Varias iniciativas del gobierno de los Estados Unidos han contribuido a este cambio. La primera de ellas, Operación Mantener la Línea (Operation Hold the Line) en El Paso, fue lanzada en 1993. La Operación Guardián (Operation Gatekeeper) en la zona de San Di-

ego comenzó en 1994; La Operación Salvaguardia (Operation Safeguard) en Arizona central empezó en 1995; y la Operación Río Grande se inició en el sur del Valle del Río Grande de Texas en 1997. Estas operaciones incluyeron nuevas estrategias de despliegue de agentes en la frontera y la instalación de infraestructura de seguridad tales como cercas de concreto tipo bollard; cercas de alambrado o de acero doble y triple con caminos de patrullaje; sensores subterráneos; vigilancia por video las 24 horas; iluminación de estadio y binoculares nocturnos infrarrojos. Más recientemente, la Iniciativa de Control Fronterizo de Arizona ha aumentado el número de agentes de la Patrulla Fronteriza estacionados en Arizona, ha expandido el uso de puntos de control y ha reforzado las investigaciones y el cumplimiento de la ley apuntando a las operaciones de contrabando humano.

Para esta sección del informe, la Junta Ambiental del Buen Vecino se concentra específicamente en los cruces indocumentados y el cumplimiento de la ley en áreas rurales. La Junta identifica un conjunto específico de desafíos tanto para los funcionarios de seguridad como para los de la protección ambiental que trabajan en las áreas rurales, y sugiere enfoques interinos y de plazos más largos para seguir avanzando.





La Patrulla Fronteriza ha estado trabajando desde hace más de ocho décadas. (Fuente: Museo Nacional de la Patrulla Fronteriza, El Paso, Texas)

La Patrulla Fronteriza, dependencia de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection—CBP) del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, tiene la responsabilidad principal de aprehender a migrantes indocumentados a lo largo de tanto las secciones urbanizadas como las más remotas de la frontera entre los Estados Unidos y México. Como agencia, ha estado trabajando desde hace más de ocho décadas a lo largo de las fronteras norte y sur de los Estados Unidos. En la década de 1920, nuevas restricciones inmigratorias y la Prohibición aumentaron la preocupación sobre la migración indocumentada y el contrabando de bebidas alcohólicas. En respuesta, el Congreso sancionó la legislación en 1924 para crear la Patrulla Fronteriza. La nueva agencia se expandió rápidamente con 450 funcionarios. La Patrulla Fronteriza de hoy tiene una fuerza laboral de más de 11,000 y el objetivo de la Administración es elevar ese total a 18,000 para el año 2008.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza cuentan con una amplia gama de recursos para realizar su trabajo. Por ejemplo, la vigilancia móvil puede variar desde patrullaje a pie o a caballo hasta helicópteros y aviones de ala fija no tripulados. Además, los agentes utilizan cada vez más toda una gama de recursos tecnológicos: sensores de movimiento y sísmicos instalados en las cercas y escondidas bajo tierra; cámaras estacionarias montadas sobre postes que son revisadas cada vez que los sensores se activan; sensores móviles de video, que son

camiones con cámaras tipo periscopio y equipamiento para visión nocturna, gafas de visión nocturna usados por los agentes de la patrulla fronteriza en torres y durante los patrullajes; y equipo de radar capaz de penetrar el subsuelo y detectar túneles construidos y usados por contrabandistas y narcotraficantes. Según los agentes, la nueva tecnología y el acceso a la base de datos criminales y las listas de alerta terrorista, han sido de ayuda para realizar mejor su trabajo.

Las actividades de seguridad fronteriza en áreas rurales se están intensificando dramáticamente como respuesta al aumento significativo en el número de migrantes indocumentados y contrabandistas. Dado el reciente aumento en la presencia de tropas de la Guardia Nacional, más el despliegue de tecnología más avanzada, y una mejor infraestructura resultante de la Iniciativa para la seguridad de Frontera (ver la sección *Contexto* de este informe), no es probable que se revierta esta tendencia. Al mismo tiempo, las organizaciones de conservación y los administradores de tierras al nivel federal, estatal y local están trabajando arduamente en estas mismas áreas rurales tratando de preservar los recursos naturales en los refugios nacionales de vida silvestre, bosques nacionales, parques estatales, en ranchos privados y en tierras de naciones tribales.

Ecoregiones de la Frontera Estados Unidos-México

La frontera de los Estados Unidos-México atraviesa cinco ecoregiones principales: California con su salvia costera, chaparral y bosques de robles y pinos; el Desierto de Sonora; los bosques de montaña de las Islas del Cielo Madreano; el Desierto de Chihuahua y el matorral espinoso de Tamaulipas. La precipitación en las tierras fronterizas que varía entre 3 y 25 pulgadas anuales (7.5 y 63 mm.), es mayor en las regiones montañosas del sur de Arizona/norte de Sonora, pero es aún baja comparada con la de otras partes de los Estados Unidos. La mayor parte de la frontera es considerada como árida a semiárida. Cada una de las cinco ecoregiones posee cualidades únicas. California es conocida por sus comunidades de arbustos adaptados al fuego y sus plantas extremadamente raras así como su gran biodiversidad. El desierto de Sonora es famoso por sus majestuosos saguaros y hermosos palos verdes, y las Islas del Cielo Madreano son conocidas por sus raras especies de aves, tales como el trogón elegante y el táranga dorso rayado. La mayor diversidad de especies de lagartijas en un solo lugar se encuentra en el Desierto de Chihuahua a lo largo de la frontera, y el matorral espinoso de Tamaulipas que alberga tanto al ocelote como al yaguarundí – dos bellas y sigilosas especies de felinos.

Impactos Ambientales Mixtos

El impacto ambiental combinado resultante del cruce de indocumentados, las agencias de seguridad que intentan aprehenderlos, y las agencias de protección ambiental que buscan prevenir o mitigar el daño de ambos grupos, es variado. Por ejemplo, durante los

últimos años, los migrantes indocumentados y los contrabandistas de droga han creado cientos de millas de caminos que no están documentados, han abandonado cientos de vehículos, dañado los escasos manantiales del desierto y humedales, han dejado miles de toneladas de basura en tierras privadas, estatales, federales y tribales (como se menciona en la sección *Contexto* de este informe). Y, como lo indicara la Junta en su *Noveno Informe*, estas actividades han destruido además valiosos recursos naturales y culturales tales como artefactos arqueológicos y sitios sagrados de los nativos americanos. Cada año, aproximadamente un millón de extranjeros deportables son localizados por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos a lo largo de la frontera con México.

Desde esa perspectiva, una rigurosa seguridad fronteriza puede en efecto prevenir, o al menos limitar, el daño al medio ambiente. Barreras efectivas pueden reducir el número de cruces de indocumentados y así reducir el consecuente daño al ecosistema. Una cerca efectiva o proyecto de muro también pueden reducir la huella de las actividades de patrullaje fronterizo, permitiendo la preservación de un mayor número de hábitats en su estado natural y reduciendo la necesidad de persecuciones fuera de los caminos. Un efecto positivo de la Operación Guardián de San Diego ha sido de proteger los sitios donde anidan las especies de aves en peligro de extinción en las dunas de la Reserva Nacional para la Investigación del Estuario del Río Tijuana. Otro ejemplo positivo es el de los murciélagos hocicudos que se encontraban en peligro de extinción, que han retornado a su cueva en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta; los murciélagos habían sido ahuyentados por los contrabandistas que usaban su cueva como punto de reunión, pero retornaron después que se instaló la cerca fronteriza y los contrabandistas abandonaron la cueva. En un comentario sobre la Iniciativa de Control Fronterizo de Arizona que se mencionó en este informe, sobre la Iniciativa de Control Fronterizo de Arizona, Larry Parkinson, subsecretario asistente del Departamento del Interior dijo “Lo mejor que se puede hacer por el Medio Ambiente es tener el control de la frontera.”

Sin embargo, las mismas actividades de seguridad fronteriza pueden causar daño ambiental. Organizaciones ambientalistas tales como Defensores de la Vida Silvestre, como también representantes de otros grupos no gubernamentales como el Centro para la Diversidad Biológica (Center for Biological Diversity) y la Sociedad para Biología de la Conservación (Society of Conservation Biology), han expresado seria preocupación por los impactos no intencionales de las cercas y otras actividades de seguridad. Como lo indicara además la Junta en su *Noveno Informe*, el aumento del tráfico fuera de caminos y los nuevos caminos de la Patrulla Fronteriza causan daño a terrenos desérticos sensativos y sitios

tribales sagrados. Aunque este daño puede ser considerado como una consecuencia desafortunada pero necesaria para salvaguardar al público, una gran parte de éste podría prevenirse con un planeamiento estratégico más efectivo.



La Junta ha identificado los cuatro desafíos más significativos que enfrentan las agencias de protección ambiental y de seguridad fronteriza relacionados con los impactos asociados con el cruce de migrantes indocumentados. Al preparar sus recomendaciones para los próximos pasos, la Junta examinó cómo se entrelazan las responsabilidades y los resultados que son a veces sorprendentes. Basada en este análisis, la Junta formuló enfoques para superar los desafíos y aprovechar algunas de las oportunidades no identificadas anteriormente.

Desafíos y Próximos Pasos

DESAFÍO 1

Los caminos y senderos creados por los migrantes indocumentados, contrabandistas de migrantes y de drogas y por las agencias de interdicción que los persiguen, causan daño a la vida silvestre y a los frágiles ecosistemas. El uso de caminos sin mejorar, a menudo creados inicialmente como sendas por los migrantes indocumentados, puede dañar la vegetación del desierto y dejar surcos de llantas (neumáticos). Estos surcos, a su vez, erosionan fácilmente y pueden afectar seriamente el ciclo hidrológico. La erosión, la contaminación de polvo y la fragmentación del hábitat son los resultados visibles del tránsito de indocumentados



El trabajo de seguridad fronteriza puede a veces afectar negativamente al medio ambiente, pero en otras ocasiones pueden ocurrir beneficios inesperados. Por ejemplo, los un tanto amenazados murciélagos hocicudos del Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta, fueron ahuyentados de su cueva por los contrabandistas que usaban su cueva como punto de reunión. Últimamente, los murciélagos retornaron después que se instaló la cerca fronteriza y los contrabandistas abandonaron el sitio.

y los esfuerzos para aprehenderlos. Aunque la Patrulla Fronteriza sigue una política de usar solo caminos y sendas designadas, salvo casos de persecución inmediata de indocumentados o de rescate, aún operaciones limitadas como éstas pueden causar daño ambiental significativo.

Próximos Pasos

En la medida que sea posible, usar tecnología en lugar de nuevos caminos y barreras para lograr objetivos de seguridad. Si se requiere una infraestructura adicional de seguridad, combinar barreras vehiculares permanentes con radar terrestre y otra tecnología, así como personal que detenga efectivamente el cruce de indocumentados lo más próximo posible a la frontera. El uso de tecnología tal como radar terrestre, sensores enterrados y detectores de movimiento a lo largo de casi toda la frontera, combinado con barreras vehiculares permanentes, seguramente mejorará la tasa de detenciones cerca de la frontera. El arresto de migrantes indocumentados más cerca de la frontera reduce el impacto de senderos, caminos no planeados y el impacto general sobre estas áreas rurales abiertas.

El DHS debe tomar las medidas apropiadas para identificar recursos naturales importantes o sensibles a lo largo de la frontera Estados Unidos-Méjico y en lo posible evitar, minimizar o mitigar el impacto ambiental sobre tales recursos. Como se mencionó en este informe, la Ley de Identificación Real (Real ID Act) de 2005 otorga al Secretario del DHS la facultad para soslayar las leyes ambientales tales como la Ley Nacional de Política Ambiental (National Environmental Policy Act, NEPA), para asegurar la conclusión expeditiva de los proyectos fronterizos de barreras y caminos. DHS continúa apoyando el uso selectivo de esta renuncia legal, además de mantener su responsabilidad como buen administrador ambiental. Al mismo tiempo, algunos observadores creen que el ejercer esta renuncia legal puede reducir la cantidad y calidad de la contribución pública al proceso y pueden resultar en proyectos que algunas de las partes interesadas pueden percibir como que no atienden adecuadamente las preocupaciones ambientales locales. Estos observadores mantienen que el cumplimiento continuo de todas las provisiones de NEPA y demás legislación pertinente proveerá una oportunidad para comentarios escritos formales sobre las propuestas de la DHS y participación en foros públicos. Los comentarios podrían provenir del público, las agencias de manejo de tierras (tales como el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos [USFWS], la Oficina de Administración de Tierras [BLM], el Servicio Forestal de los Estados Unidos [USFS], el Servicio de Parques Nacionales [NPS] y las agencias ambientales tribales), las organizaciones

ambientales, y otras partes interesadas.

Fortalecer la comunicación y el acercamiento con el público para permitir una mayor interacción con las agencias apropiadas de manejo de tierras y el DHS, logrando así que el público tenga una continua contribución al desarrollo e implementación de proyectos fronterizos. El DHS interactúa en forma regular con los representantes del USFWS, la BLM, el USFS, el NPS y otras agencias federales, estatales y locales. Sin embargo, al público no siempre se entera de las oportunidades para participar. La falta de acceso a los debates en curso, tanto percibida como real, crea en algunos grupos interesados la impresión de que las preocupaciones ambientales son ignoradas. La transparencia y la participación pública son tendencias importantes en la gobernabilidad fronteriza de los Estados Unidos-Méjico y estos principios están plenamente integrados en las operaciones de la Comisión para la Cooperación Ambiental, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, el Banco de Desarrollo de América del Norte y el proceso Frontera 2012. La Junta recomienda que el DHS y las agencias de manejo de tierras tomen los pasos iniciales para fomentar la participación pública en sus discusiones, sin dejar de proteger la información clasificada. La mayor participación del público producirá soluciones más sostenibles que acentuarán la seguridad fronteriza y protegerán el medio ambiente.

Establecer una oficina dentro de una agencia federal pertinente que esté dedicada a analizar y comunicar los impactos de la seguridad fronteriza sobre el medio ambiente. Esta oficina realizaría evaluaciones científicas de los impactos sobre el medio ambiente de los migrantes indocumentados y de las actividades criminales y de contrabando relacionadas, así como los impactos de las actividades de seguridad, y deberá liderar la formulación de políticas y el planeamiento estratégico federal. Hasta que las áreas impactadas sean evaluadas, es difícil para las agencias determinar cómo protegerlas o rehabilitarlas. A medida que la Patrulla Fronteriza adquiera más tecnología e infraestructura para reforzar su control de la frontera, las agencias necesitarán mayor pericia en la fase de recuperación. Este desarrollo podría brindar una oportunidad para que subvenciones u otros recursos sean provistos a las agencias federales afectadas, o a organizaciones no gubernamentales que puedan estudiar los problemas transjurisdiccionales.

Por ejemplo, el Consejo de Tecnología Ambiental (Environmental Technology Council), que depende de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), está trabajando para identificar los problemas ambientales de alta prioridad cuya solución probablemente dependerá de la disponibilidad de nueva tecnología. Dado que uno de los objetivos estratégicos de la EPA es la preservación y recuperación de tierras, parecería apropiado que el Consejo designara a la región



Antes y Despues: Los migrantes indocumentados y contrabandistas de droga han dejado a su paso miles de toneladas de basura a lo largo de la frontera de los Estados Unidos y México. Aunque la mayor parte de esta situación sigue intacta, emprendimientos como el Proyecto del Sur de Arizona de la Oficina de Manejo de Tierras están haciendo notar una diferencia. Los Socios de este Proyecto incluyen a otras agencias federales, condados, ciudades, la Nación Tohono O'odham, y organizaciones sin fines de lucro. (Fuente: Oficina de Manejo de Tierras de los Estados Unidos)

fronteriza de los Estados Unidos y México, y el potencial impacto ambiental que allí causan las operaciones de seguridad, como una de sus máximas prioridades.

DESAFÍO 2

La basura y otros desperdicios dejados por los migrantes indocumentados y los contrabandistas de droga en el proceso de cruce arruinan el paisaje y exponen a la gente y la vida silvestre al riesgo de contraer enfermedades. En la lucha por mantenerse vivos mientras cruzan terrenos inhóspitos, los migrantes indocumentados y otros transeúntes fuera de la ley tienden a abandonar todo lo que no necesitan. En los puntos de encuentro, donde consiguen transporte hasta los centros urbanos, los que cruzan generalmente descartan todo menos la ropa que visten. El resultado es basura de todo tipo, incluyendo recipientes de agua y comida, mochilas, ropa adicional y hasta agujas hipodérmicas. Los vehículos abandonados por los migrantes y contrabandistas arrestados ensucian el paisaje. Los residuos humanos que dejan los migrantes, o aún aquellos que patrullan la frontera, también constituyen un problema.

La basura que dejan los migrantes indocumentados sigue siendo un problema particularmente vejatorio a lo largo de toda la frontera—en terrenos privados, locales, estatales, federales y tribales. La recolección de basura es un gran problema para el Bosque Nacional Cleveland (Cleveland National Forest) en California, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta (Cabeza Prieta National Wildlife Refuge) en Arizona, y el Rancho Gray en Nuevo México, entre otros. La Nación Tohono O'odham, la Tribu de Indios Cocopah, la Tribu

de Indios Quechan, y el Grupo de Indios Kumeyaay de Campo son apenas algunas de las tribus afectadas. En la Nación Tohono O'odham, por ejemplo, se ha estimado que hasta 1,500 migrantes indocumentados arrojan 6 toneladas diarias de basura en la reserva. Aunque la Nación concluyó con éxito un proyecto piloto de recolección de basura en 2005 (Ver *Proyectos y Asociaciones* en la siguiente sección), una intensa migración de indocumentados continúa en el área y no existe ninguna agencia u organización que sea claramente responsable de la recolección y acarreo de los residuos sólidos.

La Junta Ambiental del Buen Vecino pudo constatar directamente los impactos de la inmigración indocumentada sobre las tierras Tohono O'odham durante una visita al campo posterior a su reunión pública de octubre de 2005 cerca de Tucson, Arizona. En la pequeña comunidad tribal fronteriza de New Fields, Arizona, los mayores de la tribu se reunieron con miembros de la Junta para explicar cómo su vida cotidiana está siendo afectada tanto por los cruces de extranjeros indocumentados como por las actividades de vigilancia y control de la Patrulla Fronteriza.

Próximos Pasos

Proporcionar apoyo del gobierno federal a las tribus, a los terratenientes privados, comunidades rurales, parques estatales y áreas protegidas, y agencias federales de manejo de tierras, para tratar los problemas de sanidad y residuos sólidos asociados al cruce de indocumentados. En lo que concierne a la sanidad, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades o los departamentos estatales de salud deberían evaluar el riesgo de enferme-

dad por exposición a residuos humanos dejados por los migrantes. Se deberán proveer instalaciones sanitarias apropiadas para uso del personal que patrulla la frontera, teniendo en cuenta la necesidad de medidas sanitarias compatibles con un despliegue en áreas remotas. En cuanto a las preocupaciones sobre los residuos sólidos, nuevas asociaciones—o por lo menos una mejor coordinación—deberán desarrollarse para remoción oportuna de las pertenencias abandonadas de los migrantes indocumentados cuando éstos son arrestados por el personal de la patrulla fronteriza. Se deberá considerar la utilización de tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la frontera para emprender la recolección de residuos sólidos como parte de su esfuerzo por apoyar las actividades de la Patrulla Fronteriza. En su *Noveno Informe*, La Junta Ambiental del Buen Vecino efectuó una recomendación similar de apoyo.

DESAFIÓ 3

Las cercas impenetrables pueden presentar consecuencias negativas significativas para la vida silvestre y el medio ambiente. Las cercas pueden alterar los patrones hidrológicos, causando erosión e inundaciones. Los territorios y las rutas de migración de algunas especies pueden ser truncados, con fragmentación de hábitats y declinación en la población regional de animales grandes como el ciervo, el oso negro, el berrendo, pumas y jaguares, y de animales pequeños como serpientes, lagartijas, tortugas y zorros. Las aves migratorias, así como el comportamiento reproductivo de aves y mamíferos, se verán afectados en algunas áreas por la iluminación de las cercas. Los proyectos de iluminación fronteriza asociados al cercamiento también han sido criticados por su potencial daño a especies como el yaguarundi y el ocelote en el valle inferior del Río Bravo. Largos tramos de cerca a lo largo de la frontera Estados Unidos-Méjico, con sus caminos relacionados, eliminarían permanentemente cientos de miles de acres de hábitat transfronterizo de vida silvestre.

La Patrulla Fronteriza ha indicado que las crecientes medidas de control fronterizo han disminuido los cruces de migrantes indocumentados en áreas de mucho tránsito, como San Diego, reduciendo así el daño que el tráfico pedestre, la basura y las operaciones de persecución y rescate causaban al frágil hábitat. Aunque las cercas pueden ser una barrera efectiva contra los cruces no autorizados, también presentan un reto singular desde el punto de vista ambiental.

Las propuestas actuales del DHS contemplan la construcción en la frontera de muchas millas de cerca simple, doble y triple, con sus relacionados caminos de acceso. Aunque son alentadoras las recientes declaraciones de Aguilar, Jefe de la Patrulla Fronteriza y Michael Chertoff, Secretario de Seguridad Nacional—que la cerca fronteriza deberá ser apropiada a cada local-

ización y a sus necesidades particulares de seguridad—la Junta reconoce que la participación pública en el diseño y ubicación de la cerca fronteriza e infraestructura relacionada, es esencial tanto para un diseño apropiado como para obtener el apoyo local de los proyectos.

Una de las especies potencialmente en peligro que se vería impactada dramáticamente por una cerca es el berrendo del desierto de Sonora, una clase de antílope que vive en ambos lados de la frontera Arizona-Méjico. Otra especie, el jaguar, recientemente ha sido localizado de nuevo en la región fronteriza de los Estados Unidos, debido a los esfuerzos de organizaciones sin fin de lucro tales como el grupo de ganadería y pastoreo Grupo Fronterizo Malpai (The Malpai Borderlands Group), para preservar espacios abiertos. Este grupo comparte la preocupación por el impacto del cercamiento, diciendo que ésta interrumpiría la migración del jaguar al norte hacia los Estados Unidos, e impediría la oportunidad de establecer una población viable en el área.

Stephen Mumme, profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Colorado y un experto en cuestiones ambientales que afectan la frontera, manifestó que el efecto de las cercas sobre los pequeños arroyos y riachuelos de montaña que atraviesan la frontera podría ser devastador: Estamos hablando de una parte muy frágil del continente norteamericano donde la percolación de apenas algunas pulgadas de agua es vital para el sostenimiento de pasturas y plantas y diferentes tipos de cactáceas. Es esencial para su supervivencia, dijo Mumme.

Próximos pasos

Como una óptima práctica de negocios, llevar a cabo una conferencia nacional sobre tecnología de cercamientos/barreras, que resalte los éxitos a la fecha y que eduque al público, con participación de expertos del sector privado y organizaciones no gubernamentales. Como producto, elaborar recomendaciones de prototipo de cercas que cumplan con los objetivos de seguridad con mínimo daño ambiental o incluso que mejore las condiciones ambientales. Muchos ambientalistas presuponen que las cercas son dañinas para el medio ambiente, mientras que los funcionarios que hacen cumplir la ley pueden suponer que las barreras más benignas para el medio ambiente pueden ser poco seguras. A través de un diálogo amplio que incluya múltiples sectores públicos sobre nuevas tecnologías y diseños alternativos, puede ser posible desarrollar cercas y barreras que satisfagan ambos objetivos de manera eficaz—proveer seguridad efectiva y proteger el medio ambiente.

Continuar esfuerzos para asegurar que la sección estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC) tenga la oportunidad de revisar las propuestas de infraestructura de se-

guridad fronteriza antes de construirlas a fin de proveer asesoría sobre formas de minimizar impactos transfronterizos negativos, tales como la erosión y las inundaciones. Por tratado, la Comisión debe asegurar que los proyectos a lo largo de los tramos fronterizos del Río Grande y Río Bravo no causen obstrucción o desvío del flujo de estos ríos. Para minimizar problemas de demarcación de límite terrestre, la sección estadounidense revisa además los planes de infraestructura a fin de tratar cuestiones de aguas pluviales y asegurar que la infraestructura estadounidense sea construida enteramente dentro de los Estados Unidos y no interfiera con las responsabilidades de demarcación de límites de la Comisión.



La nueva cerca propuesta a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México podría afectar seriamente al berrendo del desierto de Sonora, que vive en ambos lados de la frontera. (Fuente: <http://www.midwestwilderness.com>)

DESAFÍO 4

La falta de colaboración entre las agencias responsables de seguridad fronteriza, de manejo de tierras y de protección ambiental, tiende a disminuir la factibilidad de escenarios ambientales y de seguridad mutuamente beneficiosos. Aunque otorgar exenciones de las leyes ambientales tales como NEPA no sorprende cuando la seguridad nacional está en juego, una mejor comprensión de los impactos ambientales al proceder con unas medidas particulares colocaría a los responsables de las políticas en una mejor posición para prevenir o mitigar daños ambientales potenciales. Además, a pesar del esfuerzo para fortalecer el apoyo a los trabajos de seguridad y ambientales, ambos tipos de actividades siguen enfrentando una falta de personal y financiamiento, lo que causa que las agencias individuales reasignen sus recursos limitados

para asuntos de urgencia de la seguridad fronteriza. Las operaciones de la Patrulla Fronteriza en tierras protegidas pueden potencialmente estar en conflicto con la misión de conservación de las agencias de manejo de tierras tales como el Departamento del Interior de Estados Unidos (DOI), el USFWS, la BLM, el NPS y el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Las agencias de manejo de tierras continúan con recursos insuficientes para poder cumplir su misión, un problema que se agrava porque continuamente tienen que dedicar gran parte de sus recursos humanos y monetarios a los trabajos de seguridad fronteriza en sus territorios. La Junta Ambiental del Buen Vecino también identificó estos problemas en su *Noveno Informe*, haciendo notar que sus supervisores sufren una falta de patrulleros para vigilar las áreas públicas.

Próximos Pasos

Se debería establecer una Grupo de Trabajo interagencial integrada por el DHS, el Departamento del Interior y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos incluyendo sus respectivos componentes de ejercicio y cumplimiento legal; este Grupo de Trabajo podría luego formular planes estratégicos y establecer objetivos mutuos de cambios en el ejercicio de la ley que afectarían a las tierras federales, incluyendo la sensibilidad a los impactos ambientales.

Esta recomendación es un resultado del Informe de Junio 2004 de la Oficina General de Contaduría (General Accounting Office), *Seguridad Fronteriza: las Agencias Necesitan Coordinar Mejor Sus Estrategias y Operaciones en Tierras Federales*. Entre los resultados hubo una recomendación para que las agencias federales tales como la EPA, y programas ambientales específicos como el Frontera 2012, lideren la promoción de una comunicación más estrecha con las agencias de seguridad incluyendo el DHS. Para disminuir cualquier desconfianza existente, en lo posible, se deberá construir sobre la base de las iniciativas actuales exitosas interagenciales. (Nótese que en 2006, se tomaron medidas para agregar un representante del DHS al componente de agencias federales de la Junta Ambiental del Buen Vecino).

En su *Noveno Informe*, la Junta describió además las prioridades conflictivas potenciales entre las agencias de manejo de tierras y las de seguridad fronteriza. Los funcionarios preocupados por la preservación de recursos así como aquellos responsables de la implementación de la seguridad fronteriza tienen diferentes misiones y responsabilidades.

El gobierno federal debería identificar fallas en las comunicaciones y colocar personal de enlace en los estados fronterizos, para facilitar la comu-

nicación entre las agencias de seguridad, medio ambiente y manejo de tierras fronterizas. Este personal de enlace debería trabajar en estrecha relación con los funcionarios de relaciones públicas de la Patrulla Fronteriza, especialmente en áreas relacionadas con la resolución de conflictos entre agencias. Un ejemplo sería permitir que los funcionarios estadounidenses y mexicanos responsables del manejo de tierras, tales como los del Servicio de Parques Nacionales, crucen la frontera con facilidad en regiones remotas y lejanas de los puertos oficiales de entrada. Esta flexibilidad permitirá que los encargados de las áreas protegidas, como la del Parque Nacional Big Ben, puedan continuar con sus valiosos proyectos de asociación binacional para la protección ambiental de tierras públicas en los Estados Unidos y México que se extienden hacia ambos lados de la frontera.

Proyectos y Asociaciones

El Marco de Protección de Infraestructura Crítica (Critical Infrastructure Protection-CIP) Estados Unidos-Méjico, es un esfuerzo cooperativo bilateral para evaluar y acentuar las infraestructuras y los recursos críticos transfronterizos. El Comité Directivo Bilateral CIP, presidido por el DHS, representando al gobierno de los Estados Unidos, y presidido también por la Secretaría de Gobierno, representando al gobierno de México, guía los esfuerzos del sistema CIP de los Estados Unidos y México. El CIP incluye grupos de trabajo para Energía, Transporte, Telecomunicaciones, Agua/Represa, y Salud Pública/Agricultura. El grupo de trabajo para Agua/Represas, liderado por la sección estadounidense de la IBWC y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, han identificado infraestructura y recursos críticos con implicaciones transfronterizas, tales como las Represas Internacionales Falcón y Amistad a lo largo del Río Bravo y los suministros de agua potable y sistemas sanitarios. El grupo elaboró un programa para implementar medidas para reducir vulnerabilidades en orden de prioridad. La sección estadounidense de la IBWC ya ha implementado algunas de las recomendaciones usando fondos existentes de la agencia e implementará otras recomendaciones prioritarias a medida que se disponga de fondos adicionales.

La asociación de aguas pluviales Douglas-Agua Prieta del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), que involucra a la Patrulla Fronteriza y muchas otras agencias, fue creada para reducir la erosión y las inundaciones. Uno de sus objetivos principales es controlar el escurreimiento de aguas pluviales, que a menudo contribuye significativamente a las frecuentes inundaciones en Agua Prieta, México. Esta cuenca binacional presenta un desafío particular para el manejo de aguas pluviales a causa de sus pendientes pronunciadas, la escasa cobertura herbácea para aminorar la velocidad del flujo de las precipitaciones y suelos que no absorben ni retienen la humedad. Numerosas agencias en ambos lados de la frontera participaron en un grupo de trabajo binacional que formuló soluciones para desacelerar el escurreimiento de aguas pluviales y mejorar la salud de la cuenca por medio del manejo de praderas y el tratamiento de vegetación. La Patrulla Fronteriza apoyó este esfuerzo mediante su trabajo para reducir la erosión a lo largo de las cercas fronterizas internacionales.



La instalación de cercas de seguridad sin planificación adecuada que consideren factores ambientales tales como el escurreimiento de aguas pluviales, puede producir erosión acelerada y una consecuente inestabilidad. (Fuente: Comisión Internacional de Límites y Aguas)

entes pronunciadas, la escasa cobertura herbácea para aminorar la velocidad del flujo de las precipitaciones y suelos que no absorben ni retienen la humedad. Numerosas agencias en ambos lados de la frontera participaron en un grupo de trabajo binacional que formuló soluciones para desacelerar el escurreimiento de aguas pluviales y mejorar la salud de la cuenca por medio del manejo de praderas y el tratamiento de vegetación. La Patrulla Fronteriza apoyó este esfuerzo mediante su trabajo para reducir la erosión a lo largo de las cercas fronterizas internacionales.

El Memorando de Entendimiento (Memorandum of Understanding-MOU) para facilitar la seguridad y minimizar el daño ambiental en terrenos fronterizos federales es un acuerdo entre múltiples agencias que asegura a Protección Fronteriza y Aduanas (Customs and Border Protection-CBP) acceso a terrenos públicos, incluyendo el derecho a instalar infraestructura táctica y permitiendo todas las acciones necesarias para proteger la seguridad de los funcionarios y responder a emergencias. Al mismo tiempo, alienta la protección de los recursos naturales, culturales y zonas vírgenes mediante la cooperación entre CBP y los administradores de terrenos federales. Por ejemplo, el MOU requiere que las partes trabajen en conjunto para identificar métodos, rutas y localizaciones para que las operaciones de la Patrulla Fronteriza causen mínimo impacto. La CBP solicitará acceso a terrenos federales que no han sido previamente designados para usos extra viales. Más aún, cualquier uso extra vial en estas áreas deberá minimizar los impactos a especies amenazadas o en peligro de extinción y a los recursos y valores de las tierras federales. Otras provisiones del MOU incluyen el entrenamiento de la agente de la Patrulla Fronteriza en conciencia ambiental y cultural y la elaboración de

mapas que identifiquen vida silvestre específica y áreas ambientalmente o culturalmente susceptibles.

El proyecto de erradicación del cedro salado invasor del Río Colorado es un esfuerzo entre múltiples agencias para tratar la preocupación por las especies invasoras y aumentar la visibilidad del trabajo de seguridad fronteriza. En 2006, el Grupo de Trabajo para el Manejo de Tierras Fronterizas (Borderlands Management Task Force-BMTF) en Yuma, Arizona, emprendió un proyecto en el corredor del Río Colorado para el tratamiento y erradicación del cedro salado. El proyecto incluye las siguientes agencias locales, estatales, federales y tribales: la Patrulla Fronteriza del DHS, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (Army Corps of Engineers), la Agencia de Administración de Tierras (Bureau of Land Management), la Agencia de Recuperación (Bureau of Reclamation), la Nación Cocopah, Vida Silvestre y Pesca de los Estados Unidos (U.S. Fish and Wildlife), la "Yuma Proving Grounds", Caza y Pesca de Arizona (Arizona Game and Fish) y la Oficina del Sheriff del Condado de Yuma (Yuma County Sheriff's Office). El objetivo a corto plazo es ralear o erradicar la vegetación de cedro salado en unos cuantos sitios seleccionados para que los encargados de hacer cumplir la ley y el personal de emergencia puedan trabajar a lo largo de la frontera. A largo plazo, el plan multi-agencia cubrirá 24 millas de densa vegetación. El trabajo consistirá en la erradicación y raleo del cedro salado, reestableciendo además el álamo de virginia, el mezquital y el sauce, que son la vegetación nativa. Este proyecto se está realizando bajo la misión del BMTF para facilitar un foro intergubernamental de cooperación en la resolución de problemas de interés común relacionados con la frontera Arizona-Méjico.

El Proyecto Arizona Sur de la Agencia de Administración de Tierras (Bureau of Land Management-BLM), en sociedad con agencias federales, tribus y otros, está recogiendo los residuos dejados por los indocumentados. Desde 2003, el Proyecto Arizona Sur ha contribuido 3.4 millones de dólares para recoger los residuos que dejan los migrantes indocumentados y los contrabandistas. Los socios del proyecto han rehabilitado también caminos y sendas, han protegido áreas susceptibles ribereñas y plantas amenazadas y en peligro de extinción, han colocado barreras y barricadas para prevenir el tiradero de más basura y han restaurado o protegido áreas, cuencas fluviales nativas de una mayor degradación.

Ejemplos de tal trabajo pueden verse en los proyectos emprendidos por la Tribu Cocopah y la Nación Tohono O'odham. La tribu Cocopah está trabajando en un proyecto de restauración de 60 acres, financiado por el Estado de Arizona, con el objetivo de restaurar la cuenca fluvial y erradicar especies invasoras como el cedro salado, que a su vez, servirá a los encargados del orden

y personal de emergencia que trabajan a lo largo de la frontera. La Nación Tohono O'odham, con financiamiento de la Oficina de Manejo de Tierras (BLM) y la EPA, ha identificado 84 sitios de tiraderos de basura, ha realizado 134 trabajos de limpieza, recolectado más de 62 toneladas de desechos y 1,260 bicicletas, e identificado mercados de reciclado para los residuos con el objetivo final de lograr la sustentabilidad del programa.

Dos proyectos similares están programados para ser implementados. En el primero de ellos, la Nación Tohono O'odham expandirá sus esfuerzos para remover y reciclar vehículos abandonados; su Proyecto de Recolección de Vehículos Abandonados hará un inventario por medio del Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System-GPS) y removerá 220 vehículos, lo cual será implementado por el Programa de Manejo de Residuos Sólidos de esta Nación. El proyecto incluye además al equipo de vigilancia aérea de la Patrulla Fronteriza y el Programa "Rangers" del Departamento de Policía de los Tohono O'odham. El segundo proyecto emprendido por el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (Arizona Department of Environmental Quality-ADEQ) es un proyecto innovador de limpieza en las tierras tribales en cada uno de los cuatro condados fronterizos que al mismo tiempo, desarrolla asociaciones entre varias entidades que pueden colaborar en la limpieza a largo plazo. Con financiamiento a través de una subvención de Frontera 2012 de la EPA, ADEQ contemplará establecer una organización pública/privada de grupos interesados para inventariar los recursos y elaborar una estrategia sustentable de limpieza para la región fronteriza de Arizona. Este proyecto está siendo integrado con el proyecto de la Nación Tohono O'odham para la recolección de vehículos abandonados y residuos sólidos.

El Acuerdo de la Tribu Ewiaapaayp con la Patrulla Fronteriza permite que ésta última tenga acceso a la reserva. La Patrulla Fronteriza tiene las llaves del único portón de entrada y salida de la reserva, el cual está bajo candado.

La Asociación de la Nación Tohono O'odham con el DHS ha permitido la construcción de dos Centros de Guardianes del Orden (Law Enforcement Centers-LEC) en terrenos de esa Nación. Las instalaciones de estos LECs albergan al DHS, CBP, el Departamento de Policía de la Nación Tohono O'odham y más recientemente, personal de la Guardia Nacional. Las instalaciones LEC están situadas en el Distrito Chukut Kuk de la Nación Tohono O'odham y han estado operando desde septiembre de 2004. Cada LEC tiene espacio para oficinas, dormitorios para los agentes de la Patrulla Fronteriza, un centro de procesamiento y celdas de detención temporal para la aprehensión de los migrantes indocumentados. Las LECs procesan hasta 300 migrantes indocumentados por día.



El puerto de entrada de San Luis, Arizona, ubicado cerca de la frontera de California, recibe un número significativo de embarques de residuos peligrosos (Fuente: las agencias del Departamento de Seguridad Nacional como Aduanas y Protección Fronteriza)

Cruces de Materiales Peligrosos

Para proveer seguridad y protección en los puertos de entrada y más allá de los mismos, así como protección ambiental contra los riesgos asociados con el flujo transfronterizo de materiales peligrosos, la Junta recomienda:

En los puertos de entrada, aumentar el número de inspectores de materiales peligrosos y establecer sitios y horarios específicos para los vehículos con materiales peligrosos. Duplicar los métodos exitosos, incluyendo el uso de tecnología apropiada. Aumentar la cooperación entre las agencias ambientales y de seguridad mediante procedimientos que reflejen los requerimientos de personal y lenguaje específicos para cada sitio.

Más allá de los puertos de entrada, resolver las cuestiones de responsabilidad para el personal transfronterizo que responde a emergencias y proveer apoyo puntual que refleje las necesidades de las comunidades fronterizas dentro del gran plan estratégico nacional. Documentar y compartir las mejores prácticas de respuesta a emergencias. Además, aumentar el diálogo con las entidades tribales sobre los materiales peligrosos transportados cerca y a través de sus territorios y aumentar la participación tribal en los ejercicios de entrenamiento.



Un tema que surge de la sección Cruces de Indocumentados de este informe es que las agencias de seguridad fronteriza y de protección ambiental tienen misiones fundamentalmente diferentes cuando se trata de prevenir el cruce de indocumentados (seguridad fronteriza) y proteger los frágiles ecosistemas (protección ambiental).

En contraste, en esta sección—Cruces de Materiales Peligrosos—el trabajo de la seguridad fronteriza y los esfuerzos de protección ambiental a menudo parecen complementarse. El manejo apropiado de materiales peligrosos transportados en vehículos comerciales cerca, y en, los puertos oficiales de entrada, es importante para las misiones de ambos tipos de agencias. Aunque que los agentes de la seguridad fronteriza se concentran en la identificación exacta de los materiales y la amenaza terrorista potencial si el material cayera en malas manos, ellos comparten con los agentes ambientales la preocupación ante el riesgo potencial para la salud humana y el medio ambiente en caso de escapes o explosiones accidentales.

Los materiales peligrosos son un elemento esencial de la sociedad industrializada contemporánea. Sustancias químicas de toda clase se utilizan en la manufactura de bienes de consumo que van desde teléfonos celulares y computadoras hasta automóviles y prendas de vestir o ropa. Muchas de estas sustancias químicas y algunos de sus productos derivados, están



La tecnología sofisticada se utiliza cada vez más para escanear contenidos no autorizados en las cargas entrantes. Aquí se muestran: (1) Un camión pasando por un equipo de detección de rayos gama en el puerto de entrada de Otay Mesa en San Diego (Fuente: Paul Ganster, Universidad Estatal de San Diego); y (2) una imagen radiográfica que muestra vehículos robados dentro de un acoplado de carga, que ha sido instalada en una oficina del puerto de entrada (Fuente: SAIC).

clasificadas como materiales peligrosos, un término que se usa tanto para los compuestos químicos más peligrosos y letales como para productos relativamente benignos como la pintura. Para proteger al público y

al medio ambiente, el gobierno federal administra un amplio conjunto de leyes y regulaciones para asegurar el manejo seguro de materiales peligrosos, incluyendo la delegación de autoridad a las agencias estatales para exigir su cumplimiento. (Ver el *Quinto Informe* de la Junta, que trata los materiales peligrosos en forma más genérica. En este *Décimo Informe*, en cambio, el enfoque específico es en el cruce de materiales peligrosos en vista de la seguridad fronteriza.)

Materiales Peligrosos y Residuos Peligrosos: Definiciones

LOS MATERIALES PELIGROSOS, son designados por el Secretario del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (U.S. Department of Transportation—DOT) como materiales que constituyen una amenaza irracional para el público y el medio ambiente, cuyo transporte está regulado por el DOT. Estos materiales incluyen explosivos, gases, sólidos y líquidos inflamables, sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos, sustancias infecciosas y venenosas (tóxicas), materiales radiactivos, corrosivos y efectos misceláneos peligrosos, entre los que se encuentran los residuos peligrosos (Título 49 del Código Federal de Regulaciones 49 [CFR 172.101]).

LOS RESIDUOS PELIGROSOS son aquellos residuos—ya sean subproductos de procesos de manufactura o productos comerciales simplemente descartados, como líquidos de limpieza o pesticidas—que son potencialmente dañinos para el medio ambiente y perjudicial para los humanos y otros organismos vivientes. Los residuos exhiben características peligrosas (inflamabilidad, corrosividad, reactividad o toxicidad) o se encuentran en una de las cuatro listas (F, K, U o P) de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) (ver 40 CFR Parte 261 Subparte C). Los residuos peligrosos a veces se producen por escape de un material peligroso y en ese momento pasan a estar sujetos a regulaciones de la EPA, o autoridad delegada de la EPA.

Los conductos o tuberías mueven cantidades enormes de materiales peligrosos a través de la frontera Estados Unidos-México e incluyen gas natural, petróleo y subproductos de petróleo. La cantidad total de la transferencia fronteriza de gas natural se espera que aumentará significativamente en los próximos años, con la conclusión de nuevos proyectos en la región de Tamaulipas y una gran planta de tratamiento de gas natural licuado cerca de Ensenada, Baja California. Sin embargo, como se menciona en la *Introducción*, la transmisión de materiales peligrosos por conductos o tuberías está fuera del alcance de este informe.

La región fronteriza Estados Unidos-México, tal como en todo el resto del país, debe enfrentar diariamente el manejo apropiado de materiales peligrosos. No obstante, varios factores especiales intervienen a lo largo de la frontera:

- ◆ El uso de materiales peligrosos en las plantas manufactureras (maquiladoras) en el lado mexicano de la frontera. Muchas de estas plantas importan materiales peligrosos desde los Estados Unidos para usarlos en sus procesos de producción. Para asegurar una disposición posterior al uso, los Estados Unidos acordó aceptar los residuos peligrosos de las maquilas según el Anexo III del Acuerdo de La Paz de 1983.

- ◆ Antes de ser enviados a las plantas de México, las bodegas en ciudades fronterizas y más hacia el interior almacenan grandes cantidades de materiales peligrosos, que ocasionalmente son abandonados, con el peligro de posibles escapes que pueden poner en peligro la salud y la seguridad pública.
- ◆ Los incidentes con estos materiales peligrosos en un lado de la frontera pueden poner en peligro el medio ambiente y la salud pública del otro lado. Entonces, es de sumo interés para ambas naciones, que trabajan con los gobiernos tribales apropiados, cooperar en respuesta a tales emergencias. El equipo y personal de emergencia generalmente deben atravesar por los puntos de cruce fronterizo para llegar a los sitios de los incidentes, lo cual requiere que los gobiernos tengan elaborados acuerdos y protocolos vigentes para permitir que los servicios de emergencia puedan proceder sin demora.

Responsabilidad Institucional

Del lado estadounidense de la frontera, la responsabilidad de manejar materiales y residuos peligrosos es compartida por múltiples agencias del gobierno en varios niveles. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) regula el transporte salvo y seguro de materiales y residuos peligrosos en el comercio interestatal, intraestatal y exterior. DOT administra las regulaciones que especifican los requerimientos de manejo y empaquetamiento apropiados para los materiales peligrosos y requiere a los expedidores indicar los peligros del material mediante el uso de documentación de envío en los manifiestos, empaquetamiento y etiquetados, rótulos en los vehículos, incluyendo la información específica de respuesta a emergencias. El DOT regula además los requisitos de entrenamiento para las personas que preparan los materiales peligrosos que serán enviados o que transportan tales materiales comercialmente (<http://www.dot.gov>). Los envíos de materiales peligrosos que se originan en México y cruzan la frontera hacia los Estados Unidos deben cumplir con todos los requerimientos regulatorios aplicables del DOT.

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos tiene el liderazgo federal para el manejo de residuos peligrosos, junto con la función crítica que desempeñan las otras agencias federales, estatales y locales. Los generadores de residuos peligrosos de origen mexicano que envían sus residuos a los Estados Unidos para su tratamiento y disposición deben cumplir con las regulaciones del manifiesto de la EPA así como las regulaciones estatales pertinentes.

Además, dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Protección de Frontera y Aduanas de los Estados Unidos (CBP) hace cumplir las regulaciones comerciales de los Estados Unidos (<http://www.cbp.gov>).

gov). Al nivel estatal, varias agencias tienen autoridad delegada por EPA para manejar el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos que atraviesan, o son enviados a, sus respectivos estados para tratamiento y disposición final. En algunas comunidades fronterizas estadounidenses, las agencias locales del gobierno tienen también un papel directo, como el Condado de San Diego, que inspecciona camiones en los puertos de entrada.

Del lado mexicano de la frontera, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) tiene la responsabilidad principal de supervisar el manejo de materiales peligrosos y como la EPA, cuenta con el apoyo de un número de agencias federales y estatales con funciones específicas; por ejemplo, Protección Civil es responsable de responder a emergencias, incluyendo materiales peligrosos.

Cruces Fronterizos

Cada año, millones de vehículos comerciales y trenes ingresan a los Estados Unidos desde México transportando materiales de toda clase, incluyendo materiales peligrosos. De acuerdo con los estudios de flujo de materia prima de la EPA, el petróleo, sus derivados y el gas natural constituyen la mayoría de estos materiales peligrosos. Un subconjunto de estos materiales es el de residuos peligrosos. El Centro de Asistencia para Asuntos Fronterizos estima que 43.3 millones de libras de residuos peligrosos son importadas anualmente a los Estados Unidos desde México.

Aunque el porcentaje de residuos peligrosos importados es relativamente pequeño, persisten las preocupaciones sobre asegurar su disposición apropiada y las ramificaciones de no hacerlo. Desafortunadamente, la base de datos "HAZTRAKS", elaborada por la EPA para seguimiento de residuos peligrosos que entran en los Estados Unidos, ya no está disponible; por lo tanto ya no es posible acceder fácilmente a estadísticas completas y actualizadas. Sin embargo, estadísticas puntuales permiten ver que: en un período reciente de 12 meses, unas 11,900 toneladas—cerca del 70 por ciento de todo los residuos peligrosos que ingresan a los Estados Unidos desde México—entraron por el puerto de entrada de Otay Mesa, yendo finalmente a 12 estados para su disposición final, incluyendo Minnesota, Pensilvania y Carolina del Sur. Otros datos muestran que en 2005, de los residuos peligrosos importados desde México a las instalaciones de Texas, más del 50 por ciento, o sea 5,700 toneladas, eran residuos de refinería. La mayor parte del resto de residuos se consideró peligroso porque era inflamable o contenía metales pesados o solventes usados.

Como la Junta lo indicara en su *Noveno Informe*, hay aproximadamente 50 cruces fronterizos y de ellos, menos de 15 aceptan camiones y trenes portadores de

materiales peligrosos. Existen diferencias significativas entre estos puertos de entrada que van desde las pequeñas instalaciones en Naco, Arizona, donde el cruce de materiales peligrosos es limitado, hasta los mega-puertos de Otay Mesa, California, y Laredo, Texas.

La mayoría, pero no todos, los puertos de entrada ofrecen servicios completos, en el sentido que procesan tanto a vehículos comerciales y privados como a peatones. En varios centros muy urbanos como San Diego, Laredo y Brownsville, los cruces se manejan como sistemas y el tráfico comercial es dirigido hacia un solo puerto de entrada donde las agencias de inspección de los Estados Unidos pueden concentrar sus esfuerzos y recursos. Este procedimiento también desvía a los camiones que llevan materiales o residuos peligrosos de las áreas altamente pobladas. El transporte por ferrocarril también juega una función preponderante en el transporte fronterizo. En algunos sitios, los trenes tienen sus propios cruces; en muchos otros, la ubicación de las vías férreas coincide con un puerto mayor. Una vez que cruzan la frontera, los vagones con materiales peligrosos a menudo pasan por áreas urbanas. Por ejemplo, en Nogales, Arizona, una gran cantidad de vagones cargados con ácido sulfúrico destinados a la actividad minera atraviesan el corazón de la ciudad casi diariamente.

Las tribus de los Estados Unidos y pequeñas comunidades han expresado preocupación por el tránsito de materiales peligrosos por sus tierras y comunidades. Con frecuencia, las autoridades locales desconocen el contenido de los camiones y vagones del ferrocarril, y estas áreas suelen carecer de un entrenamiento, equipamiento y capacidad adecuados para responder a emergencias.

Sistema de Entrada para Vehículos Comerciales de los Estados Unidos

Documentación Previa a la Entrada. Como se indicara anteriormente, Protección Fronteriza y Aduanas (CBP), es la agencia federal que primero interactúa con los vehículos comerciales que entran a los Estados Unidos. En todos los puertos de entrada, los expedidores deben presentar de antemano su documentación a CBP de 24 a 72 horas antes de que lleguen sus cargas a la frontera, dependiendo del sistema vigente en cada puerto. Los documentos deben incluir un manifiesto de aduana y un Manifiesto Uniforme de Residuos Peligrosos de la EPA. Este procedimiento previo permite a CBP revisar los documentos, analizar la materia prima y programar la información y llegada. Los envíos que llegan sin la requerida documentación previa son rechazados y devueltos a México. Como se mencionó anteriormente, todos los vehículos o vagones con materiales peligrosos que entran a los Estados Unidos procedentes de México deben cumplir con las reglas y regulaciones pertinentes del DOT.

Inspección Primaria. Puesto que el enorme volumen de comercio hace que sea imposible para CBP efectuar una inspección física meticulosa de cada camión, vagón de tren y contenedor que entra a los Estados Unidos, CBP realiza una inspección primaria de todas las cargas durante la cual revisa la documentación y decide si el envío debería ser referido a una inspección secundaria.

Inspección Secundaria. CBP ha desarrollado procedimientos y tecnologías que ayudan a facilitar el comercio legítimo, identificando envíos de bajo riesgo y concentrando las actividades de inspección en camiones y contenedores que podrían constituir una amenaza mayor para los Estados Unidos. Los procedimientos de inspección no intrusivos utilizando rayos X o rayos gama pueden revelar rápidamente el contenido de un camión o vagón de tren, permitiendo a los funcionarios de CBP revisar vehículos/contenedores sin peligro para ellos o el medio ambiente. En caso de ser necesario, CBP puede referir un camión o vagón a otras agencias locales o estatales con experiencia singular en materiales peligrosos para una inspección adicional. Otras agencias federales pueden también inspeccionar el vehículo, tales como el Departamento de Agricultura (USDA) o la Administración de Drogas y Narcóticos de los Estados Unidos (DEA). Los vehículos salen de la inspección secundaria después de una revisión de la documentación y la aprobación final de un funcionario de CBP.

Los cruces fronterizos que reciben camiones y vagones con materiales peligrosos están equipados con instalaciones especiales para tratar escapes y derrames; estas varían según el puerto de entrada. En muchos casos, un gran escape de una sustancia química peligrosa obligaría a los funcionarios de CBP a obtener asistencia de otras entidades con entrenamiento y equipamiento especializado, tales como el cuerpo local de bomberos o las agencias ambientales estatales.

Inspección de Seguridad Estatal y Federal. Dependiendo del estado y puerto de entrada, puede haber inspecciones adicionales de seguridad para camiones, ya sea en el puerto de entrada, en las instalaciones adyacentes al puerto, o a cierta distancia del cruce fronterizo. Los inspectores federales son los de la Administración Federal de Seguridad de Auto Transporte DOT; los inspectores estatales son de las agencias estatales delegadas. La Administración Federal de Ferrocarriles efectúan las inspecciones de seguridad de vagones de tren.

Transportadores Mexicanos. Los transportistas mexicanos autorizados por el DOT usualmente entregan su carga de material peligroso a una bodega/almacén estadounidense en la zona fronteriza, donde la carga es transferida a un transportista estadounidense. A partir del 10 de agosto de 2006, los conductores mexicanos de materiales peligrosos deben estar inscritos en

el programa Comercio Libre y Seguro (Free and Secure Trade—FAST) y previamente autorizados con verificación de antecedentes para dedicarse al transporte hacia, y en, los Estados Unidos. El programa FAST acelera el procesamiento fronterizo de los participantes de bajo riesgo y permite a CBP concentrarse en el comercio de alto riesgo o desconocido.

Diferencias entre los Sistemas de Entrada de los Estados Fronterizos

Los cuatro estados fronterizos de los Estados Unidos—California, Arizona, Nuevo México y Texas—tienen procedimientos diferentes en sus puertos de entrada. A continuación siguen unas breves descripciones.

California ha promulgado regulaciones ambientales tan estrictas en los puertos de entrada que algunos expedidores, según se informa, desvían sus camiones cargados con materiales peligrosos al cruce fronterizo de San Luis, Arizona. Solo California tiene inspectores locales y estatales que trabajan junto a inspectores federales de Aduanas en los puertos de entrada; en Arizona, Nuevo México y Texas, los inspectores de materiales peligrosos de CBP trabajan de manera independiente, aunque pueden solicitar el apoyo de agencias estatales. Tres de los cruces fronterizos de California procesan materiales peligrosos y utilizan inspectores locales y/o estatales: Otay Mesa en el Condado de San Diego, Calexico Este en el Condado Imperial y Tecate. Otay Mesa y Calexico permiten la importación y exportación de materiales peligrosos, mientras que Tecate es solo para exportación. El puerto de entrada de Otay Mesa programa la importación de materiales/residuos peligrosos desde México 3 días por semana.

En los puertos de entrada de Otay Mesa y Tecate, la exportación de materiales peligrosos no está sujeta a un horario fijo con CBP o su contraparte, Aduanas de México. La División de Materiales Peligrosos (Hazard Materials Division—HMD) del Condado de San Diego realiza inspecciones de camiones al azar para identificar el transporte ilegal de residuos peligrosos hacia México. En el Condado de San Diego, un incidente de materiales/residuos peligrosos del lado estadounidense del puerto de entrada hace que CBP notifique al departamento local de bomberos o a la HMD del Condado de San Diego y el Equipo de Respuesta a Incidentes Peligrosos del Condado es notificado por medio de un procedimiento normal de despacho.

En Arizona, los materiales peligrosos pueden pasar por todos los cruces fronterizos sin restricción de horas de operación. CBP recurre a los respondedores locales o estatales de emergencia según la necesidad. Los inspectores pueden aislar un camión si se detecta algún problema durante la inspección, tal como un derrame

de una sustancia química peligrosa.

La amplia instalación comercial de Nogales/Mariposa tiene el área más extensa de contención; las instalaciones en otros puertos son más modestas. El puerto de entrada de San Luis, ubicado cerca de la frontera de California, recibe el número más significativo de embarques de residuos peligrosos muchos de los cuales se originan en Baja California. Como se ha mencionado, los informes indican que los expedidores optan por pasar por este puerto de Arizona para evitar las inspecciones estrictas de los puertos de California.

Las agencias ambientales tienen una presencia limitada en los puertos de entrada de Arizona: ellas efectúan revisiones esporádicas al azar, pero no tienen los recursos para cubrir siempre todos los puertos. Sin restricción de horario para los materiales peligrosos, un inspector ambiental puede pasar todo un día en un puerto e inspeccionar solo unos cuantos camiones. El Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (Arizona Department of Environmental Quality—ADEQ) desearía aumentar los recursos para cubrir la frontera y la EPA ha provisto alguna ayuda. Aunque ADEQ sigue tratando de conseguir apoyo adicional de manera más completa para las inspecciones fronterizas de envíos de residuos peligrosos, los recursos disponibles de la EPA serán reasignados para fortalecer la presencia actual de ADEQ en los puertos de entrada mexicanos. ADEQ y EPA continúan trabajando con funcionarios de CBP en los puertos de San Luis y Nogales para explorar la posibilidad de restringir las horas de operación para camiones con materiales peligrosos, como se hace en California. Esta restricción de horario mejoraría significativamente la efectividad de los limitados recursos disponibles para las inspecciones ambientales en la frontera Arizona-Méjico.

En Texas, los procedimientos son similares a los de Arizona, pero los investigadores y respondedores de emergencia son empleados por CBP solo cuando es necesario y generalmente no efectúan inspecciones conjuntas con CBP en el puerto de entrada.

Más Allá de los Cruces de Fronterizos

Seguimiento y Aplicación de Reglamentos

El seguimiento de los materiales peligrosos desde su origen hasta su destino final y eventual disposición es un esfuerzo de múltiples agencias. La agencia estadounidense con responsabilidad primaria para este proceso es EPA. La EPA trabaja en estrecha relación con CBP en el seguimiento de las importaciones procedentes de México (la Oficina de Censos de los Estados Unidos es responsable de las exportaciones). Por ejemplo, la Región 6 de EPA ha colaborado con CBP y socios

locales, del condado y estatales para realizar encuestas de flujo de materias primas que proveen una imagen instantánea de los tipos de materiales peligrosos que cruzan la frontera en un puerto de entrada determinado.

Un mecanismo de seguimiento disponible para las agencias federales con responsabilidad en esta área es por medio del requisito doméstico de presentar manifiestos de residuos peligrosos. La exportación de residuos es monitoreada mediante el sistema del Manifiesto Uniforme de Residuos Peligrosos, que entró en vigencia el 5 de septiembre de 2006. El aviso de exportación de la EPA y las regulaciones y procedimientos de consentimiento también proveen información (los residuos transportados para reciclaje están exentos). Otra fuente de información sobre seguimiento la provee la Oficina de Estadísticas del Transporte del DOT, que mantiene bases de datos del tránsito de gente y bienes a través de las fronteras nacionales. (Como ya se mencionó, antes se le daba seguimiento a las importaciones de residuos peligrosos por medio de la base de datos HAZTRAKS de la EPA, pero ésta fue descontinuada en 2003). La aplicación de reglamentos de los envíos de residuos peligrosos es responsabilidad de la EPA la que, a su vez, delega funciones a las agencias locales y estatales de los Estados Unidos.

En México, la regulación de residuos peligrosos requiere documentación y disposición de la cuna a la tumba, tal como lo requiere la Ley de Recuperación y Conservación de Recursos en los Estados Unidos. SEMARNAT utiliza un sistema desarrollado por el Instituto Nacional de Ecología de México llamado SIRREP (Sistema de Rastreo de Residuos Peligrosos) para monitorear la exportación de residuos peligrosos a los Estados Unidos.

Puesto que no existe en la actualidad ningún sistema que permita el seguimiento en tiempo real de materiales peligrosos en la zona fronteriza binacional, las autoridades de los Estados Unidos y México desconocen si hay materiales peligrosos en remolques o bodegas a 50 yardas del otro lado de la frontera; por lo tanto, los agentes de regulación de primera respuesta de ambas naciones con frecuencia se ven forzados a enfrentar incidentes en la zona fronteriza con información incompleta. Para llenar este vacío de información, los Dispositivos de Identificación de Radio Frecuencia (Radio Frequency Identification Devices—RFIDs) son un ejemplo de una tecnología prometedora (ver Proyectos y Asociaciones en sección de más adelante).

Riesgo y Emergencias

Las comunidades fronterizas a través de las cuales se transportan materiales peligrosos pueden estar en riesgo en cualquier hora del día. Un escape accidental o deliberado de un material peligroso, tal como gas amoníaco de un camión-tanque comercial, ácido

sulfúrico de un vagón descarrilado, o un incendio o explosión de un camión-tanque de butano, pueden representar un gran riesgo para los residentes fronterizos. Un incidente de materiales peligrosos puede comenzar en el punto de manufactura, durante el transporte o en los puertos de entrada. Los dos incidentes que se describen a continuación acentúan la necesidad de estar preparados para emergencias fronterizas.

En el primer incidente, un ciudadano de los Estados Unidos proveniente de México que cruzaba por el puerto de entrada de San Ysidro, fue llevado al área de inspección secundaria de la CBP, transportando 20 bolsas de mortero para instalación de azulejos. Una de las bolsas, que en realidad contenía fósforo rojo, fue abierta y se tomó una muestra la cual se incendió y prendió al resto de la carga. Este incendio cerró el puerto de entrada por dos días y varios empleados de CBP manifestaron síntomas de trastornos respiratorios causados por los gases ácidos. El incidente requirió la intervención de los equipos de respuesta de emergencias del condado y de la ciudad de San Diego.

En el segundo incidente, el choque de un camión-tanque de butano con un tren cerca de Matamoros, México, causó una explosión de la que resultaron 5 muertos y 30 heridos, y afectando por lo menos a 35 locales comerciales y hogares. Las autoridades mexicanas así como los cuerpos de bomberos de Brownsville y Harlingen, Texas respondieron al incidente.



La preparación para emergencias transfronterizas data del Anexo II del Acuerdo de La Paz, el cual estableció al Equipo de Respuesta Conjunta (Joint Response Team—JRT) binacional y el desarrollo del Plan de Contingencia Conjunto para Preparación y Respuesta a Emergencias Ambientales en el Área Fronteriza (Joint Contingency Plan—JCP). El JRT está presidido en forma conjunta por EPA y SEMARNAT; ésta última a través de su Procuraduría de Protección al Ambiente (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente—PROFEPA), y su Coordinador General de Protección Civil (Secretaría de Gobernación—SEGOB). El Equipo JRT incluye representantes locales, estatales y federales de ambos países y representantes tribales de los Estados Unidos responsables de la prevención, preparación y respuesta a emergencias en la zona fronteriza.

El JCP fue creado para establecer medidas de cooperación para el Equipo, incluyendo la planificación, ejercicios y entrenamiento de respuesta a emergencias para prepararse y responder a incidentes de petróleo y sustancias peligrosas a lo largo de la frontera. Éste ha sido la base para los Planes Binacionales de Respuesta a Emergencias de 14 Ciudades Hermanas elaborados en estos últimos años. En 2006, el Plan fue revisado por el Grupo de Trabajo Frontera 2012 para la Preparación

y Respuesta a Emergencias (Border-Wide Work Group—BWWG) a fin de incorporar: (1) “todos los peligros”, tales como radiológicos, biológicos y explosiones nucleares; (2) los recientes cambios al Plan de Respuesta Nacional; y (3) partes interesadas adicionales, tales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las naciones tribales fronterizas.

Un ejemplo de la colaboración binacional que ha resultado de la iniciativa es el Acuerdo Binacional de Ayuda Mutua para Materiales Peligrosos entre Del Río, Texas, y Ciudad Acuña, Coahuila. El Acuerdo establece que las dos ciudades hermanas (pares de ciudades estadounidenses y mexicanas ubicadas frente a frente en ambos lados de la frontera) determinen áreas de preocupación común, evalúen recursos colectivos y realicen un ejercicio binacional cada dos años. Más aún, en caso de un escape de emergencia, el Acuerdo estipula procedimientos binacionales de notificación y respuesta, incluyendo cómo pedir ayuda a los estados de Texas y Coahuila. Además, si fuera requerido, el JCP puede ser activado, con la asistencia de la EPA y/o la PROFEPA y SEGOB.

El DOT también cumple una función en la preparación para emergencias transfronterizas. Cada cuatro años, la Administración para la Seguridad Industrial de Materiales Peligrosos y Conductos (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration—PHMSA) del DOT y sus socios canadienses y mexicanos, actualizan su Guía de Respuesta a Emergencias para primeros respondedores. Esta Guía prescribe los pasos iniciales que deben darse en los primeros minutos críticos después de un incidente para proteger al público y mitigar consecuencias potenciales; y está publicada en varios idiomas incluyendo el español, francés e inglés.

PHMSA opera también un programa de subsidios para planificación y entrenamiento para ayudar a los respondedores locales a incidentes con materiales peli-



La planificación, ejercicios y entrenamiento para los respondedores a emergencias de ambos lados de la frontera de los Estados Unidos y México, permitirá a las comunidades fronterizas estar mejor preparadas. (Fuente: Departamento de Salud Ambiental de San Diego)

grosos. El programa de Subsidios para la Preparación para Emergencias presta ayuda a los estados, territorios y tribus de indios y, a través de ellos, a las comunidades locales. Algunos de los subsidios han sido otorgados a agencias de la región fronteriza, así como a tribus fronterizas incluyendo los indios Campo Band de Mission y la tribu de los Cocopah. Desde 2001, un subsidio anual de 160,000 dólares ha sido destinado al Consejo Inter-Tribal de Arizona, y el estado de Arizona recibió 183,238 dólares.

Programa Frontera 2012 de los Estados Unidos y México

El programa Frontera 2012 entre los Estados Unidos y México, ya mencionado en este informe, es un programa ambiental binacional de 10 años para la región fronteriza entre ambos países (<http://www.epa.gov/usmexicoborder/>). Es el esfuerzo de planificación más reciente que se implementa bajo el Acuerdo de La Paz y sigue al Frontera XXI, un programa quinquenal que concluyó en el año 2000.

La objetivo 5 de Frontera 2012 es: Reducir la Exposición a Sustancias Químicas como Resultado de Descargas Accidentales y/o Actos de Terrorismo. El Programa Frontera 2012 para la Preparación y Respuesta a Emergencias (Border 2012 Emergency Preparedness and Response—BWWG) fue creado para coordinar discusiones e implementar este objetivo. El grupo está presidido conjuntamente por la Oficina de Manejo de Emergencias de la EPA y PROFEPA de México, y tiene asociadas otras agencias locales, estatales y federales de los Estados Unidos y México, así como tribus fronterizas de los Estados Unidos responsables de la prevención, preparación y respuesta a emergencias en el área fronteriza. El BWWG funciona esencialmente como el comité directivo del JRT (Ver arriba la sección *Riesgo y Emergencias*).

Dos de las tres metas del objetivo 5 para proteger al público han sido logradas. Primero, se ha establecido un mecanismo de alerta/notificación de emergencia química entre México y los Estados Unidos. Segundo, planes conjuntos de contingencia para los 14 pares de ciudades hermanas están en vigencia y operando, con el establecimiento de comités binacionales para la prevención de emergencias químicas. Los planes conjuntos de contingencia de ciudades ahora están siendo complementados por esfuerzos de preparación y prevención tales como análisis de consecuencias, reducción de riesgos y contratarrorismo.

El Grupo de Trabajo ha revisado también el sistema de notificación de emergencias de todos los peligros entre México y los Estados Unidos y ha actualizado la información de contactos a través de los planes de las ciudades hermanas. El nuevo sistema de notificación vigente ha sido establecido, probado y está incluido ac-

tualmente en el JCP, y el objetivo es incorporarlo eventualmente a todos los planes de ciudades hermanas.

Otro ejemplo de cooperación binacional de preparación para emergencias de Frontera 2012 es su Equipo de Trabajo Arizona/Sonora, presidido por Protección Civil de Sonora y el Departamento de Seguridad Nacional de Arizona. Compuesto por representantes de bomberos, policía, salud, encargados de emergencias, agencias ambientales y aduanas de los Estados Unidos y México, el grupo elaboró los cuatro planes de ciudades hermanas de la región, condujo entrenamiento en diseño de ejercicios y concientización de primeros respondedores, y ejecutó un ejercicio de simulación binacional a gran escala. Una prioridad del Equipo de Trabajo Arizona/Sonora es aumentar la colaboración con otras partes interesadas de la frontera, particularmente la Nación Tohono O'odham y la Comisión Sonora-Arizona/México.

Además de los grupos en el ámbito estatal, un comité local de planificación para Nogales, Arizona, y Nogales, Sonora, fue establecido a fines de 2005 y está presidido conjuntamente por los Cónsules de México y de los Estados Unidos. El comité actualizó su plan conjunto de contingencia, firmado el 25 de abril de 2006, en el carril 7 del cruce fronterizo de Nogales por los alcaldes de ambas ciudades y funcionarios estatales de Arizona y Sonora. El plan incluye respuesta a todos los peligros, procedimientos actualizados de notificación y un compromiso de respuesta transfronteriza.

Preparación Tribal

Un número de tribus nativas americanas tienen reservas adyacentes a, o cerca de, la frontera mexicana, y en algunos casos, el territorio tribal se extiende a ambos lados del límite internacional. Las tribus, igual que otras comunidades, planean para emergencias. A menudo lo hacen, sin embargo, al mismo tiempo que enfrentan barreras financieras y una falta de información sobre materiales peligrosos que atraviesan o rodean sus territorios. Esta falta de recursos e información puede llegar a comprometer su capacidad para estar adecuadamente preparados.

Algunas tribus fronterizas tienen personal técnico y de seguridad que trabajan en estrecha relación con las autoridades locales, estatales y federales. En California, por ejemplo, algunas de las tribus del Condado de San Diego, tales como Pala, Campo, La Posta, Cuyapaipé y Manzanita integran una Autoridad de Fuerzas Conjuntas que, a su vez, utiliza al Departamento de Salud Ambiental de San Diego y al Equipo de Respuesta a Incidentes Peligrosos del Cuerpo de Bomberos de San Diego para ayudar en los incidentes de materiales peligrosos que ocurren en sus tierras. Varias tribus fronterizas en California han creado cuerpos de bomberos para responder a emergencias, y muchas forman parte de los

Equipos de Respuesta a Emergencias de la Comunidad local y/o tienen sus propios Equipos Tribales de Respuesta a Emergencias. Las tribus participan además en los entrenamientos que cubren el Sistema Nacional de Manejo de Incidentes y Evaluaciones de Crisis y Riesgo, y varias tribus tienen establecido planes aprobados de migración previa a desastres.

Los representantes de las tribus fronterizas también participan en actividades de preparación como miembros de los tres Grupos de Trabajo Binacional Frontera 2012 para la Preparación para Emergencias. Estos grupos de trabajo son coordinados por la oficina de la Región 9 de la EPA, que cubre Arizona y California. Como ejemplo, durante la semana del 18 de septiembre de 2006, se realizó un ejercicio de preparación para emergencias. EPA coordinó el ejercicio a petición del gobierno mexicano en representación de PROFEPA y la Tribu Tradicional Kickapoo de Texas. El escenario comprendía un camión tanque con emanaciones de ácido sulfúrico y un vehículo de pasajeros transportando materiales peligrosos desde México que se derramarían y potencialmente afectarían a las tres naciones.

Desafíos y Próximos Pasos

Aunque tanto los funcionarios ambientalistas como los de seguridad se concentran en el transporte seguro de materiales peligrosos en los puertos de entrada y más allá, y planean, para responder a emergencias en caso de una fuga, no siempre tienen la oportunidad de afianzar sus esfuerzos. Además, los grupos como las tribus y comunidades circundantes pueden no ser incluidos completamente en las discusiones estratégicas de planificación, comunicaciones, o asignación de recursos. A continuación sigue un análisis de éstos y otros aspectos, junto con las acciones recomendadas.

DESAFÍO 1

Los puertos de entrada no cuentan con suficiente personal para inspeccionar todos los envíos de materiales peligrosos, incluyendo los residuos peligrosos, y algunos de los respondedores a emergencias locales no tienen entrenamiento adecuado. Las agencias ambientales carecen también de datos para el seguimiento de materiales peligrosos (hazmat) así como también de datos más generales sobre almacenamiento de sustancias químicas. Aunque CBP revisa previamente los envíos antes de que salgan de 32 puertos extranjeros, no hace lo mismo en los puertos terrestres en México. Solo unos cuantos inspectores de CBP en cualquier puerto están entrenados como inspectores hazmat. En caso de un escape o problema con una carga (por ejemplo, un envío con un material no identificado), CBP confía en los

respondedores locales y estatales. Asimismo, a pesar de los esfuerzos del Plan de Contingencia Conjunta para realizar ejercicios con ciudades hermanas, los respondedores locales mexicanos para emergencias (Protección Civil) con frecuencia no están adecuadamente entrenados para responder o están pobemente equipados. Muchos de los ejercicios de respuesta a emergencias en realidad no responden a un evento en México, sino que simulan un derrame o escape del lado estadounidense; una práctica común es pedir asistencia a los respondedores de emergencia de los Estados Unidos si en realidad ocurre un derrame o escape de sustancias químicas. Por último, la información sobre la cantidad y tipo de materiales peligrosos, incluyendo los radiológicos y patológicos, transportados a través o cerca de la frontera en un momento dado es limitada y esto complica la respuesta a emergencias y el cumplimiento transfronterizo de las regulaciones para estos materiales. A excepción del sistema de manifiesto documentado en papel, no ha existido un sistema transfronterizo para el seguimiento de residuos peligrosos desde que cesó el apoyo de la base de datos HAZTRAKS.

Próximos Pasos

Aumentar el número de inspectores hazmat en los puertos de entrada. Los inspectores podrían venir de cualquier agencia federal, estatal, tribal o local. Se necesitan inspectores que puedan inspeccionar residuos y materiales peligrosos en todo puerto fronterizo que acepta tales materiales y en horarios designados.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debería proveer apoyo adicional a las contrapartes mexicanas, especialmente Protección Civil y los cuerpos locales de bomberos. Adicionalmente, el gobierno federal de los Estados Unidos debería considerar el financiamiento de puestos para funcionarios locales y estatales en los puertos de entrada fronterizos de los Estados Unidos para inspecciones y respuesta a emergencias. También debería apoyar los esfuerzos estadounidenses locales para entrenar a primeros respondedores mexicanos y proveer el equipamiento necesario de respuesta a emergencias. Se deberían también tener fondos disponibles para realizar ejercicios conjuntos de entrenamiento en ambos lados de la frontera.

Establecer sitios/horarios específicos en los puertos de entrada para los vehículos hazmat. Los puertos de entrada designados tendrían personal entrenado y tecnología hazmat actualizada para revisar los vehículos y realizar inspecciones. Los inspectores de los Estados Unidos podrían certificar y sellar la carga y tendrían la opción de abrir los sellos y confirmar la documentación hazmat.

Las mejores prácticas, tales como el programa de inspección hazmat del Condado de San Diego o la ordenanza de bodegas de la Ciudad de Laredo,



Los puertos de entrada que unen a México con los Estados Unidos comenzaron como modestos cruces. La foto muestra el puerto de entrada de San Ysidro, California, en la década de 1930. En la actualidad, este mismo cruce consiste 24 carriles y se estima que permite el acceso a los Estados Unidos a 17.4 millones de vehículos de pasajeros por año—ver el Noveno Informe de la Junta. (Fuente: Museo de la Patrulla Fronteriza de El Paso)

necesitan ser compartidas con otras comunidades.

Estos programas probablemente tendrán que ser financiados por medio de algún tipo de tarifa local para ser implementados en otras comunidades. Es necesario compartir la información de los programas estatales y locales.

Nuevo Manifiesto Electrónico. La EPA está proponiendo que se instale un sistema de Manifiesto Electrónico (e-Manifest) en los próximos 3 o 4 años. Una vez implementado, los datos de envío de residuos peligrosos podrán ser transmitidos electrónica e instantáneamente. El objetivo es que este manifiesto electrónico sea compatible con un sistema similar en México.

Sistema de Identificación por Radio Frecuencia (RFID). Para complementar el Nuevo Manifiesto Electrónico, el cual no da seguimiento a los residuos peligrosos más allá de la frontera, la EPA actualmente está probando el sistema de Identificación por Radio Frecuencia para dar seguimiento a los envíos de materiales peligrosos desde su punto de origen hasta las instalaciones de destino final (de la cuna a la tumba), y si tienen éxito las pruebas de campo, propone implementar esta tecnología en colaboración con México (ver Proyectos y Asociaciones en la sección más adelante).

Entorno Comercial Automatizado/Base de Datos de Comercio Internacional (Automatic Commer-

cial Environment/International Trade Data System—ACE/ITDS) Acelerar la participación de la EPA al sistema ACE de Aduanas de los Estados Unidos y al sistema multiagencia ITDS (ver Proyectos y Asociaciones en sección subsiguiente).

DESAFÍO 2

Los respondedores a emergencias no pueden cruzar la frontera fácilmente en respuesta a incidentes por cuestiones de seguros, responsabilidad, soberanía nacional y cuestiones de autoridad, y los procedimientos aduaneros y fronterizos pueden demorar la respuesta. Cuando ocurre un incidente en México cerca de la frontera y se solicita la respuesta de emergencia tribal y de los Estados Unidos, los respondedores de emergencia de los estados unidos y de las tribus estadounidenses con frecuencia tienen dificultad para proveer esa asistencia debido a preocupaciones sobre seguros y responsabilidad. Los funcionarios federales mexicanos pueden mostrarse reacios a sancionar la asistencia y cuestiones de autoridad pueden entorpecer una respuesta adecuada. Además, con frecuencia preocupa a CBP el reingreso a los Estados Unidos del equipo y personal de respuesta después de que ha ocurrido un incidente. De manera similar, puede ser difícil para los respondedores mexicanos entrar a los Estados Unidos, aunque el Consejo Fronterizo de Bomberos (Ver Proyectos y Asociaciones en la sección que sigue) ha elaborado procedimientos que permiten la respuesta de los bomberos mexicanos. En la Reunión del Equipo de Respuesta Conjunta para el Interior de Estados Unidos-Méjico celebrada en San Diego, California, en febrero de 2006, los participantes identificaron a los procedimientos de frontera y aduanas como posibles obstáculos que pueden demorar el tiempo de respuesta ante una emergencia real, lo que podría resultar en daños adicionales al medio ambiente, salud pública, propiedades, o bienestar. La Nación Tohono O'odham participó en esta reunión y se acordó trabajar en la realización de un evento de respuesta de emergencia en los terrenos de la Nación.

Próximos Pasos

Resolver cuestiones de responsabilidad y riesgo para los respondedores a emergencias transfronterizas. Puede ser necesario que las legislaturas estatales de los Estados Unidos tengan que atender los problemas de responsabilidad de seguros; estos asuntos deberían ser identificados para entonces presentar y promulgar la legislación pertinente. El DHS también necesita integrarse al Plan Conjunto de Contingencia entre los Estados Unidos y México para asegurar que si el personal de respuesta de los Estados Unidos o tribal cruza la frontera para atender un incidente en México,

se les permita cruzar la frontera y con su equipo, sin temor a confiscación. Es necesario desarrollar una protección de responsabilidades similar para los respondedores de México que cruzan la frontera para atender un incidente en los Estados Unidos.

Coordinar las aduanas federales binacionales. La coordinación de políticas y procedimientos para atender a la seguridad fronteriza y la protección ambiental como un concepto tandem, facilitará el grado de preparación y acelerará la respuesta a emergencias, mejorando la seguridad nacional en ambos lados de la frontera. Tanto CBP como su contraparte mexicana (Aduana de México) en la actualidad están elaborando procedimientos para acelerar la entrada y salida de los respondedores a emergencias durante incidentes a lo largo de la frontera Estados Unidos-México.

DESAFÍO 3

Equipo tecnológico y cuestiones de personal: *Las necesidades de protección ambiental de las pequeñas comunidades estadounidenses, de las comunidades mexicanas y de las tribus estadounidenses son ignoradas en la “visión general.”* Con la seguridad nacional como máxima prioridad, los grandes paquetes de financiamiento para desarrollar e implementar una tecnología avanzada que sea aplicada en gran escala han adquirido una mayor importancia. No obstante, embargo a lo largo de la frontera Estados Unidos-México, tribus o pequeñas comunidades de ambos países con recursos muy limitados, pueden necesitar equipos relativamente básico para operar con mucha mayor efectividad, pero a menudo no tienen los recursos para comprarlo. El enfoque que elementos más costosos hace perder de vista a las pequeñas comunidades que no fueron contempladas en la “visión general”. Incluso las poblaciones mexicanas fronterizas que son muy grandes pueden contar con pocos recursos. Por ejemplo Reynosa, Tamaulipas (población de 620,000 en 2006), solo tiene dos estaciones de bomberos: una estación principal y una subestación.

Próximos Pasos

Proveer apoyo adicional a los esfuerzos locales de protección ambiental de baja tecnología y pequeña escala, a las comunidades mexicanas, y a las tribus como parte de la planificación estratégica global para la seguridad nacional. Las comunidades fronterizas más pequeñas y sus necesidades de respuesta a emergencias deben tener mayor consideración cuando se distribuyen los fondos de seguridad nacional. Solo dos de las ciudades fronterizas de los Estados Unidos tienen poblaciones de más de 500,000 habitantes (San Diego y El Paso), seguidas en población por Laredo, Texas, con 230,000. La mayor-

ía de las comunidades estadounidenses tienen poblaciones considerablemente menores, tal como Hidalgo, Texas (población 7,322 en el año 2000), que se encuentra frente a Reynosa, Tamaulipas, o Eagle Pass, Texas (población 22,413 en 2000), frente a Piedras Negras, Coahuila (170,000). Asimismo, la mayoría de las tribus también tienen poblaciones pequeñas.

Afortunadamente, algunas comunidades fronterizas pequeñas de los Estados Unidos como McAllen, Brownsville, y Harlingen, Texas, ya han recibido apoyo de la DHS para mejorar o acentuar su capacidad de respuesta hazmat; desafortunadamente, no ha ocurrido lo mismo con sus ciudades hermanas de México. Una solución sería establecer un fondo para comunidades mexicanas y/o tribus fronterizas y hacerles notar que ahora pueden solicitar fondos de Frontera 2012.

Donde los respondedores locales de emergencias de los Estados Unidos proveen asistencia, sus experiencias deben ser documentadas y compartidas para beneficio de otros colegas estadounidenses y mexicanos. Por ejemplo, en el choque y explosión de un tren con un camión-tanque de butano en Matamoros, mencionado anteriormente, los respondedores locales de los Estados Unidos entraron a México. En otro incidente ese mismo mes, vagones cargados con ácido sulfúrico descarrilaron en San Lázaro, Sonora, a un lado del Río Santa Cruz, cerca de la frontera Sonora-Arizona. Se derramaron aproximadamente entre 25,000 y 30,000 galones de ácido sulfúrico que llegó hasta el río. Personal de la DHS y EPA deberían realizar una entrevista de “lecciones aprendidas” con los respondedores de ambos incidentes y compartir esta información con los respondedores a emergencias locales de toda la frontera.

DESAFÍO 4

Se necesita un plan estratégico global para los puertos de entrada de la región fronteriza que refleje el desarrollo, población, idioma, y requerimientos de personal, el cual también reduciría las tensiones que existen entre el personal de seguridad y de protección ambiental en algunos puertos de entrada. Despues de los hechos del 11 de septiembre de 2001, hubo cambios en la confianza que los inspectores de CBP habían depositado en los funcionarios locales y estatales para ayudar con las inspecciones. Por ejemplo, CBP pidió a los investigadores de la Comisión de Calidad Ambiental del Estado de Texas suspender su ayuda en algunos puertos de entrada del sur de Texas. Si los investigadores estatales o respondedores a emergencias no pueden ayudar a CBP en la inspección de envíos transfronterizos de residuos peligrosos, aunque sea en forma infrecuente, se multiplican los riesgos ambientales a las comunidades fronterizas.

Otras preocupaciones fronterizas incluyen el desarrollo industrial en la frontera y la gran población en la frontera, la falta de equipo de protección personal de los respondedores a emergencias mexicanos, la barrera del idioma, y los turistas y trabajadores migrantes en el área. Todos estos factores podrían exacerbar los efectos de un escape de una sustancia química—puesto que afectaría a gran cantidad de gente el accidente e incluso, la tasa de mortalidad podría aumentar y cuestiones del idioma podrían resultar en errores adicionales.

Próximos Pasos

Fortalecer la comunicación y la colaboración.

La comunicación en todos los niveles entre el personal de seguridad y de protección ambiental en ambos lados de la frontera debe fortalecerse por medio de reuniones cara-a-cara entre el personal de las agencias pertinentes locales, estatales y federales y las tribus fronterizas de los Estados Unidos. Estas actividades deben ser seguidas por memorandos de entendimiento o acuerdo (aunque los últimos toman más tiempo para implementarse, éstos formalizan la estructura). Las comunicaciones por radio y telefonía celular entre Protección Civil y los grupos de respuesta a emergencia de los Estados Unidos y tribales, deben probarse y actualizarse regularmente. El financiamiento por medio de subsidios del DHS ha permitido establecer comunicaciones interoperativas para algunas comunidades como las del valle inferior del Río Bravo en Texas, pero solo del lado estadounidense de la frontera.

En la planificación para emergencias fronterizas, considerar la configuración actual de la frontera. Los desafíos singulares de la planificación binacional para respuesta a emergencias a lo largo de la frontera, requieren medidas adicionales de respuesta, enfocadas y cooperación. Los planes más efectivos se elaboran e implementan basados en localidad a localidad, con apoyo estatal y federal. Los respondedores de respuesta a emergencias de ambos lados de la frontera deberían reunirse regularmente y planear para contingencias; los planes de ciudades hermanas requieren ejercicios regulares de planificación. Dado que las administraciones locales en México tienen un período de 3 años, junto con una considerable rotación de personal por que no existe un sistema de servicio civil para la permanencia del personal, los ejercicios frecuentes son críticos. Los respondedores a emergencias de los Estados Unidos deberían familiarizarse con los posibles sitios industriales de México donde quizás deban acudir y viceversa. Los planes que se adopten deberían reflejar las preocupaciones de las comunidades y situaciones locales.

DESAFÍO 5

El financiamiento y comunicación tribal plantean un desafío, específicamente la incapacidad de las tribus fronterizas para recibir fondos para respuesta a emergencias y las comunicaciones nada deseables sobre materiales peligrosos transportados a través o rodeando sus territorios. En los Estados Unidos, casi todas las tribus no pueden cumplir con los requisitos mínimos para calificar para recibir directamente fondos de seguridad nacional para ayudar a prevenir ataques terroristas, o planificar para los impactos de tales ataques. En cambio, se les requiere que soliciten fondos a través del condado o el estado. Estas entidades, a su vez, no reciben del gobierno federal suficiente financiamiento ellas mismas para financiar las tribus, como lo indica el Informe de la Coalición de Nativos Americanos para la Protección Ambiental titulado “*Informe Frontera 2012 sobre Logros Tribales y Asuntos Relacionados*” (abril 2006). Entre las excepciones se encuentra la Nación Tohono O’odham, que recibió fondos directamente del DHS, y la ayuda del DOT al Consejo Intertribal de Arizona, que incluye varias tribus fronterizas. Como se indicara anteriormente en este *Décimo Informe*, es necesario que haya una mejor comunicación con las tribus acerca del transporte de materiales peligroso a través o cerca de sus territorios.

Próximos Pasos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debería asignar fondos específicamente para las tribus fronterizas. Como naciones soberanas, se debería permitir que las tribus soliciten fondos para respuesta a emergencias directamente al gobierno federal, o sus solicitudes deberían recibir mayor consideración.

Aumentar la participación tribal en los ejercicios de entrenamiento que involucran entidades locales, estatales y federales. El trabajar en cooperación con los gobiernos tribales y sus agencias tribales permitirá una más pronta respuesta y una protección más eficiente de las comunidades afectadas y de los recursos ambientales circundantes. Los gobiernos tribales están mejor equipados que las agencias externas para contactar a sus comunidades tribales.

Proyectos y Asociaciones

Esta sección presenta algunos ejemplos de asociaciones que están marcando una diferencia y, por lo tanto, potencialmente podrían ser contactadas para ayudar a elaborar un plan estratégico para atender tanto a la seguridad fronteriza como la protección ambiental. Algunas son asociaciones entre agencias de seguridad y

ambientales, mientras que otras son asociaciones entre agencias dentro del sector seguridad.

Asociaciones Frontera 2012. Para lograr el objetivo de Frontera 2012 de reducir el riesgo de la exposición pública a escapes químicos, biológicos y radiológicos, y para realizar el Acuerdo de La Paz, el Plan de Contingencia Conjunta y los planes de ciudades hermanas, se han iniciado un número de asociaciones al nivel regional y nacional. Una de esas iniciativas es el proyecto Piloto de Identificación por Radio Frecuencia (ver siguiente proyecto).

Proyecto Piloto de Identificación por Radio Frecuencia para dar seguimiento a los envíos de residuos peligrosos. La EPA, en sociedad con el Centro Espacial Dryden de la NASA y varios proveedores, está probando el uso de tecnología RFID para dar seguimiento a los envíos transfronterizos. Con fondos de la Oficina de Investigación y Desarrollo (ORD) de la EPA y la Oficina de Asuntos Internacionales, este proyecto piloto probará la factibilidad de usar esta tecnología emergente. Los proveedores voluntariamente contribuyen las etiquetas, los lectores y el personal técnico necesario para las pruebas de laboratorio y de campo, y los resultados son anunciados en la Internet. El objetivo de este proyecto piloto es de dar seguimiento a los residuos peligrosos desde su origen en la zona fronteriza México-Estados Unidos, a través de la frontera y hasta su arribo a una instalación receptora en los Estados Unidos. La prueba de campo está programada para principios de la primavera de 2007.

Instituto para Manejo de Emergencias de Baja California. En abril de 2006, esta asociación binacional publica/privada firmó un memorando que provee una infraestructura y cronograma para la preparación sustentable para emergencias. Basado en Tijuana, los socios incluyen a la Protección Civil del Estado de Baja California; el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Tijuana; PROFEPA; la Universidad Autónoma de Baja California (el coordinador fiscal y de organización del Instituto); EPA; el Condado de San Diego; el Instituto de Entrenamiento Especializado de California; y socios industriales como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Cámara Nacional de Comercio de México) y la Asociación pro-Bomberos de Tijuana. Las actividades adicionales del Instituto en el 2006 incluyeron estandarizar y certificar cursos para primeros respondedores, crear equipos binacionales para realizar entrenamiento técnico HAZMAT y colaborar con la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades para ofrecer entrenamiento bilingüe sobre las consecuencias médicas de la exposición a agentes químicos de oportunidad. Entre septiembre y noviembre de 2006, los socios del Instituto auspiciaron cinco sesiones binacionales de capacitación que alcanzaron a 260 participantes. Tres de esas sesiones cubrieron múltiples programas ambientales tales como la pre-

paración/respuesta a emergencia, manejo de riesgos y prevención de la contaminación.

El Consejo de Agencias Fronterizas para Incendios (Border Agency Fire Council—BAFC). Este Consejo del área fronteriza de San Diego-Baja California ejemplifica la colaboración transfronteriza eficaz para responder a emergencias para combatir incendios fuera de control. Fue establecido formalmente durante la temporada de incendios de 1996 después de un aumento dramático de estos incidentes causado por las fogatas de los migrantes indocumentados en áreas montañosas remotas del Condado de San Diego y de la frontera. El Consejo está compuesto por 33 miembros de los Estados Unidos y México, incluyendo agencias de gobierno, funcionarios electos, respondedores a emergencias, organizaciones privadas y especialistas ambientales. Desde 1998, un acuerdo de asistencia mutua ha permitido a los respondedores de emergencias cruzar la frontera para proteger vidas y propiedades. Bajo este convenio, los cuerpos de bomberos mexicanos han cruzado hacia el Condado de San Diego en algunas ocasiones para ayudar a los bomberos locales. Asimismo, las agencias estadounidenses regularmente proveen asistencia al sur de la frontera.

Colaboración entre Cuatro Ciudades Hermanas (Condado Imperial, California, y Mexicali, Baja California; Yuma, Arizona, y San Luis Río Colorado, Sonora). En 2006, estos dos pares de ciudades hermanas iniciaron proyectos para mejorar la preparación y reducir el riesgo de todos los escapes peligrosos en esta área de cuatro estados con una población combinada de más de un millón de habitantes. Los proyectos incluyeron: fortalecer la capacidad de los primeros respondedores, involucrar a la industria en los ejercicios y actualizaciones de los planes de las ciudades hermanas, implementar sistemas de manejo de emergencias enfocados al cumplimiento industrial de las leyes de protección civil y desarrollar y ejercer protocolos de cruces fronterizos rápidos para el personal de emergencia.

Colaboración entre el Equipo de Trabajo para la Preparación y Respuesta a Emergencias de Arizona/Sonora y el Comité para Manejo de Emergencias de la Comisión Arizona/Méjico. Este Equipo de Trabajo está colaborando con la Comisión Arizona/Méjico y tres condados de Arizona, la Nación Tohono O'odham y la Comunidad de Sonoyta, Sonora, para elaborar un plan trinacional de contingencias para emergencias. El Equipo de Trabajo y el Comité tuvieron una reunión conjunta el 15-17 de noviembre de 2006, para ver el progreso en la planificación trinacional así como el entrenamiento adicional de 100 agentes fronterizos de primera respuesta.

Ejercicio Interagencial de Inspección Portuaria de Arizona. En el verano de 2006, una operación interagencial coordinada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para inspeccionar camiones

de materiales peligrosos en los cruces comerciales principales de Arizona, Nogales/Mariposa y San Luis, detectaron algunas infracciones, aunque la mayoría de los camiones estaban en regla. Esto puede deberse, en parte, al hecho de que gran parte de los camiones de materiales peligrosos con rumbo al norte y al sur son clientes regulares—expedidores y conductores familiarizados con los procedimientos y bien conocidos por los inspectores. Los vehículos de expedidores desconocidos naturalmente que se les da escrutinio especial.

Consortio de Investigación y Política Ambiental del Suroeste (Southwestern Consortium for Environmental Research and Policy—SCERP). La conferencia de SCERP de 2007, que se celebra anualmente en Río Rico, Arizona, examinará el tema de la seguridad nacional y el medio ambiente fronterizo. SCERP es una colaboración de cinco universidades de los Estados Unidos y cinco de México ubicadas en los 10 estados fronterizos. Las cinco universidades estadounidenses son la Universidad del Estado de Arizona, la Universidad del Estado de Nuevo México, la Universidad Estatal de San Diego, la Universidad de Texas en El Paso y la Universidad de Utah. Las Universidades mexicanas son el Colegio de la Frontera Norte, el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (<http://www.scerp.org/>).

Proyecto de Monitoreo de Residuos de la Comisión de América del Norte para Cooperación Ambiental (Commission on Environmental Cooperation—CEC) Proyecto de Seguimiento de Residuos. La CEC ha emprendido un estudio de seguimiento transfronterizo de residuos peligrosos en América del Norte en su función como organización internacional creada por Canadá, México y los Estados Unidos conforme al Acuerdo de Cooperación Ambiental de Norte América (North American Agreement on Environmental Cooperation—NAAEC). El Acuerdo complementa las provisiones ambientales del Acuerdo de Libre Comercio de Norte América (North American Free Trade Agreement—NAFTA). Este proyecto tiene tres objetivos: (1) acelerar el movimiento de materiales legales a través de las fronteras; (2) poner fin a los envíos ilegales que podrían amenazar la salud humana y el medio ambiente; y (3) mejorar la capacidad de hacer cumplir las leyes. El proyecto, cuya conclusión está programada para diciembre de 2009, incluirá intercambio de información, entrenamiento para los funcionarios de aduanas y otros agentes del orden, incluyendo inspectores fronterizos y de puertos; y aumento de la capacidad dentro de los sistemas judiciales y legales.

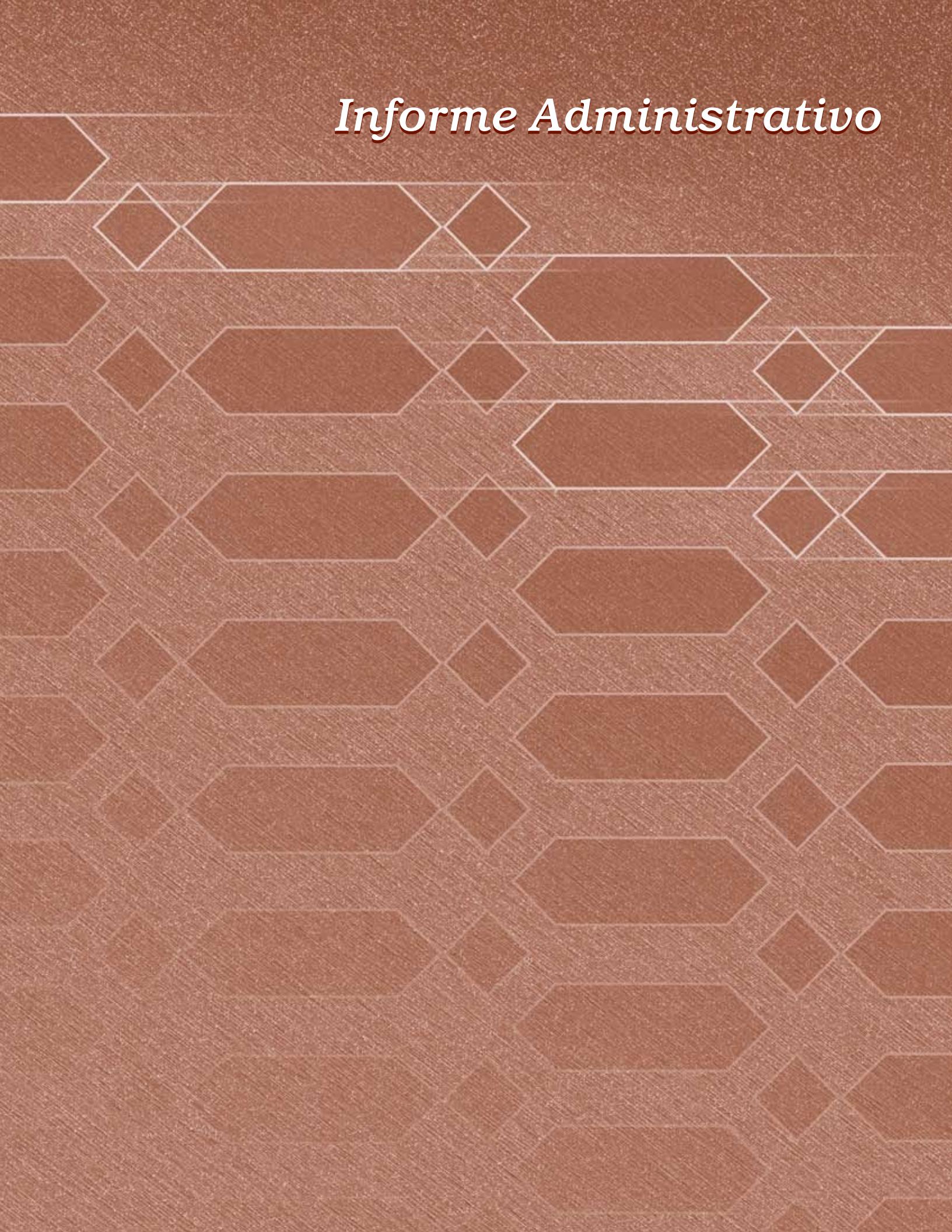
Entorno Comercial Automatizado/Base de Datos de Comercio Internacional (ACE/ITDS). Durante 2006, la EPA obtuvo por primera vez acceso directo, en línea, a los datos de importaciones de Aduanas de los Estados Unidos. Este acceso permite una comparación entre la cantidad permitida de importación de residuos y la cantidad real importada, para así identificar discrepancias. La EPA está agregando sus necesidades de datos de importación y exportación a la modernizada base de datos de Aduanas, llamada ACE, el cual actualmente está en etapa de desarrollo. El objetivo de esta base de datos de varios años, de más de 300 millones de dólares, es proveer un sistema seguro, integrado, de amplia utilización dentro del gobierno, para el manejo electrónico de datos de intercambio comercial y transporte. Unas 25 agencias federales, organizadas como ITDS dependen de ACE. El ACE/ITDS permitirá a las agencias federales concentrarse en las cargas de alto riesgo mientras que agilizando las de bajo riesgo, y además permitirá a los importadores y exportadores suministrar sus datos electrónicamente, sin necesidad de presentar múltiples informes a varias agencias. Parte de la información ACE/ITDS que necesita la EPA, no va a estar disponible sino hasta el 2009.

Programas de Entrenamiento de la EPA para Asistencia en la Aplicación y Cumplimiento de Regulaciones. La Oficina de Asistencia para el Apli-cación y Cumplimiento de la EPA, ha desarrollado entrena-miento en línea sobre el tráfico indocumentado de especies en peligro de extinción; entrenamiento para jueces mexicanos; identificación, comprensión y atención sobre las diferencias en las leyes entre países; y sobre desarrollar y compartir protocolos para detectar envíos transfronterizos de residuos peligrosos que no cumplen con las regulaciones.

Plan de Contingencia Conjunto (JCP). El JCP atiende las emergencias causadas por escapes, derrames, incendios o explosiones de sustancias peligrosas y provee un mecanismo de respuestas cooperativas a incidentes potencialmente contaminantes en el área fronteriza de los Estados Unidos y México (ver previa la sección *Riesgo y Emergencias* para mayor información)

Participación Tribal en Ejercicios Trinacionales. La Tribu Tradicional Kickapoo de Texas fue anfitriona de reuniones y participó en un ejercicio trinacional de respuesta a emergencias con representantes de todos los niveles de gobierno de los Estados Unidos y México. Este ejercicio se realizó durante la semana del 18 de septiembre de 2006, y contó además con la participación de las ciudades hermanas de Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, Coahuila.

Informe Administrativo



Reuniones de la Junta

En el 2006, como en años anteriores, la Junta sostuvo tres reuniones públicas. Una tuvo lugar en Washington, DC, y las otras dos en comunidades fronterizas de los Estados Unidos—San Diego, California, y Alpine, Texas. Un aspecto sobresaliente de la reunión de Washington, DC, fue la distribución del informe anual de la Junta al Presidente y al Congreso. En esta reunión también se incluyeron resúmenes informativos de los responsables de políticas nacionales y una sesión de planificación estratégica.

En contraste, el foco de las dos reuniones comunitarias fronterizas fue examinar con mayor detalle las cuestiones ambientales particulares que presentan desafíos y oportunidades para esa porción de la región fronteriza. Entre los oradores hubo representantes del gobierno local así como expertos en política ambiental regional. Fueron particularmente valiosas las sesiones abiertas al Comentario Público, en las que la Junta escuchó las perspectivas de los miembros de las comunidades cuyas vidas diarias están afectadas por las normas y política ambiental de la región fronteriza. Los siguientes son resúmenes de las reuniones de 2006, incluyendo una lista del público asistente.



(1) Steve Johnson (derecha) Administrador de la EPA, junto a Jerry Clifford (izquierda) Coordinador de Frontera 2012 de los Estados Unidos y Paul Ganster (centro) Presidente de la Junta en la reunión de Washington, DC. (2) Miembros de la Junta reciben información adicional de las presentaciones de los oradores invitados. (3) y (4) Las salidas al campo posteriores a la reunión—tal como ésta al Parque Nacional del Gran Recodo que tuvo lugar después de la reunión en Alpine, Texas—permite a los miembros de la Junta una mejor comprensión de los problemas que enfrentan sectores específicos de la región fronteriza. (5) La asistencia del público, tal como estos participantes de la reunión de San Diego, agregan sus perspectivas a través de sesiones de Comentario Público y debates informales.

Washington, D.C. – 14 y 15 de marzo

La reunión anual de la Junta en Washington, DC, tuvo lugar del 14 al 15 de marzo de 2006. La reunión del 14 de marzo comenzó con una introducción inaugural de parte del Honorable Stephen L. Johnson, Administrador de la EPA, seguida por palabras de Jerry Clifford, Coordinador Nacional de Frontera 2012 de los Estados Unidos y del secretario del Administrador Asistente de la Oficina de Asuntos Internacionales de la EPA. Todos agradecieron a la Junta por las recomendaciones contenidas en su Noveno Informe, que acababa de ser entregado a la prensa en un evento previo a la reunión. Luego, dos paneles integrados por expertos en política ambiental de la frontera Estados Unidos-México contribuyeron con sus impresiones sobre el informe. Entre los panelistas para la sección Calidad del Aire y Transporte del informe estuvieron Gary A. Ragatz de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP); Jill Hochman de la Administración Federal de Autopistas; Merrylin Zaw-Mon de la Oficina del Aire y Radiación de la EPA; Carlos de la Parra, Ministro del Medio Ambiente, Embajada de México; y Sergio Sánchez, Iniciativa de Aire Limpio para Ciudades Latinoamericanas, Banco Mundial. Los panelistas para la sección Recursos Naturales y Culturales del informe incluyeron a Alida Montiel del Consejo Intertribal de Arizona, Mariddie J. Craig de la Tribu Apache White Mountain, Daniel G. Carey del Fondo Nacional para la Preservación Histórica, David Tarler del Departamento del Interior de los Estados Unidos, y Melinda Tajbakhsh del Servicio de Pesca y Fauna Silvestre. Durante la tarde del 14 de marzo, la Junta escuchó a oradores expertos en los temas que la Junta había seleccionado para su Décimo Informe: la intersección de la protección ambiental y la seguridad de la frontera Estados Unidos-México. Oradores incluyeron a Kevin Stephens de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); Janet Bearden de la Oficina de Seguimiento de Implementación y Cumplimiento de la Ley de la EPA (OECA); y Brian Segee de los Defensores de Vida Silvestre. Al día siguiente, 15 de marzo, la Junta tuvo su sesión anual de Planeamiento Estratégico y resumió las recomendaciones de su informe para otros funcionarios del área de Washington, DC.

Asistencia Pública

Timothy Borky, Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA); *Oscar Carrillo*, EPA; *Steve Cook*, Informe Ambiental Diario; *Tricia Elbrock*, Grupo Fronterizo Malpai, Animas, Nuevo México; *Brian Hansen*, Servicio de Noticias Platts; *Chris Hope*, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Departamento de Seguridad Nacional (DHS); *Sherry Hutt*, Servicio de Parques Nacionales (NPS); *Davis Jones*, EPA; *Cynthia D. Jones-Jackson*, Directora Asociada, Oficina de Gestión Ambiental Cooperativo, EPA; *Aurelia Micko*, Departamento de Estado; *Toni Rousey*, EPA; *Phoebe L. Ng*, Tribu Apache White Mountain, Whiteriver, Arizona; *Chris Oh*, CBP, DHS; *Jonathan Putnam*, NPS; *Christine Senteals*, Enlace Hispánico, Washington, DC; *Marc Thomas*, EPA; *P. Sanchez*, UNIVISION; *Ron Slortkin*, EPA; *D. Rick Van Schoik*, Consorcio Suroeste para la Investigación de Normas y Políticas Ambientales (SCERP); *Maven Williams*, DHS.

San Diego, California – 18 y 19 de julio

La segunda reunión de 2006 tuvo lugar en Diego, California, del 18 al 19 de julio de 2006; La reunión fue precedida la tarde anterior por una sesión conjunta previa con el Grupo de Trabajo "Preparación para Respuesta a Emergencia Frontera 2012" en el Centro Comunitario de Chula Vista. La reunión comenzó el 18 de Julio con comentarios iniciales del Honorable Denise Moreno Duchene, Senador Estatal por el Distrito 40º de California, y el Secretario Enrique Villegas, Director General de Protección Ambiental, Baja California. Los oradores del 18 de julio abordaron el tema de la seguridad fronteriza y la protección ambiental e incluyeron a Michael Hance de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos; Diane Takvorian de la Coalición para la Salud

Ambiental; Michael P. Dorsey, Funcionario del Grupo de Trabajo Frontera 2012 para Respuesta a Emergencias de California/Baja California; Barbara Maco de la Región 9 de la EPA; Flavio Olivieri, Enlace del Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable; Ing. José Luis Sánchez del Grupo Ambiental del Noroeste; Mike White del Instituto de Biología de Conservación; Tina Terrell, Supervisora de Bosques, Bosque Nacional de Cleveland; y Leonardo Hurtado, SAIC. El segundo día de la reunión, 19 de julio, la Junta tuvo una reunión administrativa por la mañana. Luego de la reunión, para aumentar su comprensión de las cuestiones ambientales en este sector de la región fronteriza, la Junta volvió a reunirse en la tarde para realizar una excursión al campo que incluyó los siguientes componentes: Parque Estatal Campo Fronterizo por el Valle del Río Tijuana, Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales, y Planta de Reciclaje de Aguade la Ciudad de San Diego; una breve discusión del Estuario Tijuana y una vista del sitio de la "triple cerca" propuesta; y una visita a las instalaciones de inspección comercial del Puerto de Entrada de Otay Mesa así como del sitio de un nuevo cruce fronterizo propuesto al Este de Otay Mesa.

Asistencia Pública

Javier Avila, Oficina del Senador Ducheny del Estado de California; *Edward Cardenas*, Destacamento de Bomberos de San Diego; *Lawrence Chang*, Universidad de California en San Diego (UCSD); *Jorge Garces*, Director Ejecutivo del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank); *Amelia Giacalone*, UCSD; *Cecilia Gonzalez*, UCSD; *Deanneka Goodwin*, Oficina de Susan Davis, Congresista de California; *David Heilig*, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos; *Edward Janowicz*, UCSD; *Alven Lam*, Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos; *Cecilia Lavaniga*, UCSD; *April Lee*, Coalición para la Protección Ambiental de Nativos Americanos; *Doug Liden*, EPA; *Charles Mallon*, Ciudadano, San Diego, CA; *Brian Martin*, Patrulla Fronteriza, El Cajón, CA; *Nick Martorano*, Oficina Fronteriza de San Diego, EPA; *Katie Meehan*, Universidad de Arizona; *Suzanne Michel*, Instituto de Biología de Conservación; *Ryan Moreland*, UCSD; *Jennifer Neeley*, Defensores de la Vida Silvestre; *Daniel Newbold*, UCSD; *Franco Ocampo*, UCSD; *Tae Park*, UCSD; *Mitesh Patel*, UCSD; *Jim Peugh*, Sociedad Audubon de San Diego; *Jessica Piekeilek*, Universidad de Arizona; *Jose C. Pierre*, Ciudadano, Tijuana, México; *Lorena López Powers*, Oficina Fronteriza de San Diego, EPA; *Oscar Romo*, Administración Nacional para el Océano y la Atmósfera; *Christin Rubin*, Estado de California y Agencia de Servicios al Consumidor; *Ron Saenz*, Asociación de Gobiernos de San Diego; *Melody Sees*, Grupo de Indios Los Coyotes; *Stephen Siciliano*, Oficina de Asuntos Nacionales; *Paula Stigler*, Grupo de Indios Pala de Misiones; *Sean Sullivan*, Sierra Club; *Tomas Torres*, Director, Oficina Fronteriza de San Diego, EPA; *Alice Tsing*, UCSD; *Juliet Valdez*, Ciudadana, San Marino, CA; *Rick Van Schoik*, SCERP; *Chris Wong*, UCSD

Alpine, Texas – 24 al 26 de octubre

El tema de la reunión final de 2006, que tuvo lugar del 24 al 26 de octubre de 2006, en Alpine, Texas, fue Big Bend/El Gran Recodo. Los comentarios iniciales fueron de Vic Morgan, Presidente de la Universidad Estatal Sul Ross; del Alcalde de Alpine, Mickey Clouse; y del Juez del Condado Val Clark Beard. Los oradores se dirigieron a la Junta abordando cuestiones ambientales pertinentes a la región del Gran Recodo. Los oradores de apertura incluyeron al Dr. Ernesto Enkerlin, Presidente, Comisión Nacional de Áreas Protegidas, México; y Russ Whitlock, Coordinador Estatal, Parques Nacionales de Texas, Servicio de Parques Nacionales. Otros oradores fueron Paul Silver, terrateniente del Río Grande; Tom Beard, Región de Planificación Hídrica del Lejano Oeste de Texas; David Schanbacher, Ingeniero Jefe, Comisión de Calidad Ambiental de Texas; Jack Schmidt, Profesor, Universidad Estatal de Utah; y Mark Briggs, Fondo Mundial Para la Vida Silvestre (WWF). El 25 de

octubre, la Junta escuchó presentaciones de otros funcionarios del Servicio de Parques Nacionales en una visita al Parque Nacional del Gran Recodo que duró todo el día. Los oradores fueron Brad Traver, Vidal Dávila, Joe Sirotnak, Jeff Bennett, y Don Corrick. La Junta escuchó también una presentación de Billy Pat McKinney de CEMEX. El último día de reunión, 26 de octubre, se reservó para una reunión administrativa durante la cual se determinaron las fechas y lugares de reunión para el 2007: 13 y 14 de marzo en Washington, DC; 24 y 25 de julio en Brownsville, Texas; y 3 y 4 de octubre en Las Cruces, Nuevo México.

Asistencia Pública

Larry Allen, Ciudadano, Albuquerque, Nuevo México; Adelina Beall, Universidad Estatal Sul Ross (SRSU); Tom Beard, Ciudadano,

Alpine, Texas; Jeff Bennett, Físico, Parque Nacional Big Bend; Vidal Davila, Parque Nacional Big Bend; Margaret Ernest, Comisión sobre Calidad Ambiental de Texas; Chad Ellis, Servicio de Conservación de Recursos Naturales, Alpine, Texas; Ty Fain, Instituto Río Grande; Aimee Roberson, Servicio de Vida Silvestre y Pesca de los EEUU; Juan Antonio Flores, Director de Asuntos Públicos, NAD-Bank; Leslie Hopper, Centro de Investigaciones Río Grande, SRSU; Keith Klein, Profesor, Departamento de Industria y Tecnología, SRSU; Matthew O'Toole, Técnico Investigador, Centro de Investigaciones Río Grande, SRSU; Tom Shiller, SRSU; Keith Sternes, Director, Departamento de Biología, SRSU; Brad Traver, Superintendente Interino, Parque Nacional Big Bend; Kevin Urbanczyk, Director, Departamento de Ciencias Físicas y de la Tierra, SRSU.

Otras Actividades

Entre reuniones, los miembros de la Junta continuaron activamente involucrados en el trabajo de la Junta a través de varias vías: algunos sirvieron como miembros de comités de planificación para futuras reuniones, otros tomaron un papel de liderazgo para redactar secciones del próximo informe, y otros más continuaron con la función de difundir el informe actual en varios eventos de la región fronteriza y nacionales. Además de su informe anual, la Junta publicó también varias Cartas Comentario breves sobre temas de interés inmediato. Finalmente, la Junta siguió también con su intercambio de información sobre el desarrollo de política ambiental en la frontera de los Estados Unidos-Méjico con su contraparte, los grupos de asesoría mexicanos, llamados Consejos.

Uno de los aspectos sobresalientes del año fue el desarrollo de una relación de trabajo más estrecha con el Consejo de Calidad Ambiental, del que Presidente, James Connaughton, es el principal consejero del Presidente sobre política ambiental.

Publicación del Noveno Informe de la Junta

Después de presentar sus recomendaciones a funcionarios claves de la Administración, la Junta públicamente divulgó su Noveno Informe el 14 de marzo de 2006, en un evento de prensa que precedió su reunión de dos días en Washington, DC. La cobertura de los medios de comunicación fue extensa, incluyendo artículos en publicaciones tales como *Informe Ambiental Diario del BNA, Archivo del Departamento del Estado de Washington, Congressional Quarterly, el Union Tribune de San Diego, el Tribune de Albuquerque, el Star de Arizona y el diario USA Today*. Miembros de la Junta también se reunieron con funcionarios superiores de la agencia y de otras organizaciones a fin de difundir el informe e invitar comentarios y reflexiones sobre sus recomendaciones.

El Noveno Informe aconseja dos cosas: (1) trabajar para lograr aire limpio y saludable apoyando al mismo tiempo las actividades de transporte; y (2) multiplicar los esfuerzos de protección para los recursos naturales y culturales. Las recomendaciones requieren las siguientes acciones:

Calidad del Aire y Transporte

Estaciones Fronterizas e Infraestructura de Transporte: Reforzar la infraestructura, tecnología, personal, y actividades relacionadas a través de nuevo financiamiento sustancial e intensificar la planificación a largo plazo y la coordinación a niveles binacional, nacional, estatal y local para poder manejar la congestión en los cruces fronterizos y reducir así la contaminación del aire.

Emisiones: Utilizar tecnologías nuevas y emergentes y combustibles que reduzcan las emisiones de los camiones diésel, autobuses, flotas municipales, privadas y vehículos de pasajeros, e identificar fuentes de financiamiento públicos y privados para acelerar el proceso.

Transporte Público y Alternativas a Conducir Solo: Fomentar el transporte público, compartir automóviles, vehículos, utilizar

bicicletas y caminar en ciudades fronterizas para que cada vez menos gente conduzca sola, reduciendo así el número de viajes por vehículo y las emisiones de contaminantes.

Recursos Naturales y Culturales

Aumentar Capacidad: Usar eficientemente y expandir las existentes iniciativas federales de apoyo tales como el Programa Áreas de Patrimonio Nacional. Establecer más asociaciones público-privadas para incrementar ambos niveles de financiamiento y de personal. Fomentar la participación pública en la preservación de los recursos culturales a través de una fuerte campaña de información para que el público comprenda su valor.

Crecimiento: Aumentar las asociaciones entre grupos y agencias de preservación para comprar terrenos con recursos naturales y culturales de alto valor, ayudando así a manejar el crecimiento. Crear programas de incentivo para estimular en los terratenientes y promotores inmobiliarios el interés por proteger voluntariamente los recursos culturales. Alentar a los gobiernos y agencias tribales para que participen en consultas gobierno-a-gobierno para minimizar el daño a los recursos culturales, incluyendo los sitios sagrados.

Seguridad: Emprender iniciativas de seguridad fronteriza reconociendo la necesidad de proteger los recursos naturales y culturales. Mejorar los esfuerzos para la interacción, coordinación y cooperación entre los gobiernos federal, tribal, estatal, y local. Estudiar métodos para reducir el número de migrantes indocumentados que cruzan las tierras tribales de la frontera, reduciendo así el daño causado a sitios sagrados, de sepultura, sitios arqueológicos, ecosistemas importantes y estilos de vida tradicionales.

Para el texto completo del informe en inglés, ver www.epa.gov/ocem/gneb/gneb9threport/English-GNEB-9th-Report.pdf. Para el texto completo en español, ver <http://www.epa.gov/ocem/gneb/gneb9threport/espanol-gneb-9th-report.pdf>



CHAIRMAN

EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT
COUNCIL ON ENVIRONMENTAL QUALITY
WASHINGTON, D.C. 20503

November 2, 2006

Dr. Paul Ganster
Presidente, Junta Ambiental del Buen Vecino
5500 Campanile Drive
San Diego, California, 92182-4403

Estimado Dr. Ganster:

Tengo el gusto de responderle de parte del Presidente George W. Bush al Noveno Informe de la Junta Ambiental del Buen Vecino, titulado "Ambiente Fronterizo Estados Unidos- México: Calidad del Aire y Transportación y Recursos Culturales y Naturales." El Presidente Bush y su Administración aprecian el valioso papel que desempeña la Junta informando sobre las decisiones relacionadas a cuestiones ambientales y de infraestructura a lo largo de la frontera de los Estados Unidos con México.

La diversidad y amplitud de sus miembros ubican a la Junta del Buen Vecino en una posición única para suministrar información y recomendaciones que son de gran valor en la formulación de nuestra política ambiental nacional en la región fronteriza. Vuestas ideas sobre cómo fortalecer la colaboración para proteger el frágil medio ambiente fronterizo reforzando al mismo tiempo su economía, están resultando especialmente valiosas.

Quiero agradecer además su reciente pedido de que el Consejo sobre Calidad Ambiental tenga una participación más activa y visible en las actividades de la Junta. Como es de su conocimiento, he designado a Mitch Butler de mi equipo de asesores para que trabaje con usted en estos asuntos de singular importancia. Mitch se mantendrá en contacto frecuente conmigo para asegurar que tanto yo como el personal asesor pertinente sigamos bien informados e involucrados a medida que avanzamos.

Vayan mis mejores deseos a usted mientras completa la preparación del Décimo Informe al Presidente y al Congreso; con el mayor agrado estoy dispuesto a trabajar con usted en éste y en informes futuros.

Respetuosamente,

James L. Connaughton



*an independent federal advisory committee
on environmental sustainability in the
U.S.-Mexico border region*

Chair
Paul Ganster
Telephone: (619) 594-5423
Email: pganster@mail.sdsu.edu

Designated Federal Officer
Elaine Koerner
Telephone: (202) 233-0069
Email: koerner.elaine@epa.gov
Website: www.epa.gov/ocem/gneb

14 de abril de 2006

Sr. Presidente

Sr. Vicepresidente

Sra. Presidente de la Cámara de Representantes

Como asesores en asuntos ambientales y de infraestructura a lo largo de la frontera de los Estados Unidos y México, le escribimos para expresar nuestro continuo apoyo al Banco de Desarrollo de América del Norte (NADB, en inglés) y a la Comisión de Cooperación para el Medio Ambiente Fronterizo (BECC, en inglés). Ambas agencias fueron creadas en 1993 bajo un acuerdo bilateral paralelo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte para mejorar la infraestructura ambiental en la región fronteriza de los Estados Unidos con México. El NADB fue establecido específicamente para ayudar a financiar proyectos certificados por la BECC en la frontera de los Estados Unidos y México.

Los medios de comunicación de los EEUU y México indican en informes recientes que en los últimos años, miembros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos han estado debatiendo con miembros de la Secretaría de Finanzas y Crédito Público de México el posible cierre del NADB. En realidad, voceros del Departamento del Tesoro han admitido estas conversaciones en declaraciones públicas. Mientras parece que el cierre ha sido evitado por ahora, la Junta Ambiental del Buen Vecino continúa muy preocupada por que este debate podría reiniciarse, y por que los beneficios del NADB no sean todavía comprendidos totalmente.

Cualquier acción tendiente a la eliminación del NADB es, en nuestra opinión, extremadamente lamentable ya que el Banco y la Comisión (BECC) son precisamente las instituciones que más ayudan a solucionar las necesidades de infraestructura ambiental en la región fronteriza: Hasta el 31 de diciembre de 2005, el NADB ha proporcionado 704 millones de dólares a través de subvenciones o préstamos, para 90 proyectos fronterizos de infraestructura ambiental en las regiones fronterizas de los Estados Unidos y México. Estos proyectos tienen un costo total estimado de 2,350 millones de dólares y demuestran la influencia y capacidad del NADB para obtener capitales adicionales. Como resultado de estas subvenciones o préstamos del NADB, muchas de las comunidades que han recibido fondos han mejorado sus instalaciones de agua potable o plantas de tratamiento de aguas residuales; en algunos casos, estos fondos han hecho posible la construcción de nuevas instalaciones en lugares donde ninguna existía anteriormente.

Administrative support: U.S. Environmental Protection Agency, Office of Cooperative Environmental Management,
Mail Code 1601E, 655 15St. N W Suite 800
Washington, D. C. 20460 * (T) 202-233-0090 *(F) 233-0060

Los programas de provisión de agua y tratamiento de aguas residuales del NADB están directos e indirectamente beneficiando a más de 6 millones de personas en la frontera de los Estados Unidos con México.

Reconocemos que todas las instituciones pueden ser mejoradas y respetamos las recientes reformas que su administración ha hecho en el NADB y la BECC. Justamente el año pasado, usted promulgó la Orden Ejecutiva 13380 que se refiere a una Junta mixta integrada por miembros del NADB y la BECC. Adicionalmente, en abril de 2004 usted firmó la ley HR 254, que efectuó cambios al NADB y la BECC, precedida por una Declaración de Normas Administrativas (26 de febrero del 2003), que se lee así:

“La Administración apoya decididamente la promulgación del H.R. 254, que autoriza reformas claves al Banco de Desarrollo de Norte América (NADB) y a la Comisión de Cooperación para el Medio Ambiente Fronterizo (BECC). Desde que se hizo cargo de la presidencia, el Presidente Bush ha trabajado muy estrechamente con el Presidente Fox de México para hacer que estas instituciones sean más efectivas para abordar las necesidades ambientales críticas de las comunidades de la región fronteriza de los Estados Unidos y México, y de esta manera, mejorar la calidad de vida para los 12 millones de residentes de la región... ”

En enero de este año, los miembros estadounidenses fueron incorporados a esta junta mixta con el objeto de cumplir con la Orden Ejecutiva 13380. Con esta serie de reformas recientes al NADB y la BECC, creemos que se debería esperar un tiempo para permitir que estos cambios realicen su curso. Además, urgimos enérgicamente a los miembros de la nueva junta a realizar una reunión pública tan pronto como sea práctico y para actuar sobre los proyectos pendientes.

La región fronteriza de los Estados Unidos y México continúa siendo un área con tremendas necesidades ambientales y de infraestructura. Más de 900 millones de dólares en necesidades de infraestructura para aguas y aguas residuales fueron identificadas en 2005. La disolución del NADB crearía serios problemas para los residentes de la comunidad fronteriza y, por último, para la nación. Mejor que considerar la terminación del NADB, aconsejamos, en vez, que el NADB sea fortalecido a través de una financiación continuada y un nuevo compromiso de los miembros de su Junta Directiva, como también de parte del personal de alta jerarquía del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para avanzar en su importante trabajo.

Respetuosamente,



Paul Ganster,
Presidente

Nota: Como la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Estado de los Estados Unidos son miembros de la junta mixta BECC-NADB, los representantes de dichas agencias en la Junta Ambiental del Buen Vecino se abstuvieron de participar en esta Carta Comentario. Adicionalmente, los representantes de los Departamentos de Agricultura, Salud y Servicios Humanos, del Interior, y de Transportación de los Estados Unidos también se abstuvieron de participar, así como el Comisionado de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de los Estados Unidos.



*an independent federal advisory committee
on environmental sustainability in the
U.S.-Mexico border region*

Chair
Paul Ganster
Telephone: (619) 594-5423
Email: pganster@mail.sdsu.edu

Designated Federal Officer
Elaine Koerner
Telephone: (202) 233-0069
Email: koerner.elaine@epa.gov
Website: www.epa.gov/ocem/gneb

Octubre 12, 2006

Sr. Presidente
La Casa Blanca
Washington, D.C. 20500

Estimado Sr. Presidente:

Miembros de la Junta Ambiental del Buen Vecino (Junta)* están preocupados por los posibles impactos ambientales que pueden resultar de la construcción de una nueva cerca, caminos de acceso e infraestructura relacionada que han sido propuestos y, en algunos casos, construidos a lo largo de la frontera con México. La Junta apoya la necesidad de acentuar la seguridad nacional y fronteriza; sin embargo, tratamos de asegurar que estos esfuerzos estén balanceados con los de la protección ambiental.

La Junta cree que se pueden desarrollar proyectos de seguridad fronteriza que promuevan tanto la seguridad como la conservación. La falta de un enfoque balanceado reducirá la efectividad de ambos intentos. Para promover tal perspectiva en forma equilibrada, respetuosamente solicitamos que cuando las agencias federales de los Estados Unidos diseñen e implementen proyectos de infraestructura para consolidar la seguridad fronteriza entre los Estados Unidos y México, sigan las siguientes recomendaciones:

- Utilizar el corredor amplio de seguridad, a veces llamado “triple cerca”, sólo en áreas donde el daño ambiental será mínimo y donde esta nueva infraestructura va a proteger importantes recursos ambientales, históricos y culturales.
- En áreas rurales sensibles que son corredores importantes para la vida silvestre, promover el uso de barreras impermeables al tránsito vehicular pero que permitan el movimiento de la vida silvestre.
- Investigar exhaustivamente la utilización de tecnologías de información y teledetección que acentúen la seguridad fronteriza y reduzcan la huella física de las actividades de interdicción a lo largo de la frontera.

**La Junta del Buen Vecino es un comité federal independiente que asesora al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos en cuestiones ambientales y necesidades de infraestructura a lo largo de la frontera con México. El Décimo Informe Anual de la Junta, que estamos elaborando, busca balancear las actividades de seguridad nacional con el compromiso permanente de proteger la calidad ambiental en los territorios fronterizos de los Estados Unidos y México.*

- Incorporar más integralmente al diseño e implementación de todos los proyectos de infraestructura de seguridad fronteriza una apropiada revisión ambiental, participación pública y análisis científico; esta revisión deberá incluir la consideración de los patrones de drenaje transfronterizos.
- Establecer entrenamiento continuo para el personal de seguridad fronteriza sobre el medio ambiente local y los significativos recursos naturales y culturales.
- Trabajar con el gobierno de México para proteger los hábitats que son particularmente importantes y sensibles que comprenden la frontera.

Gracias por considerar esta solicitud. Nos agradaría conversar sobre su contenido con los miembros apropiados de la Administración, y apreciaríamos una respuesta sobre este asunto tan importante.

Respetuosamente,



Paul Ganster, Presidente
Junta Ambiental del Buen Vecino

CC Sr. Vicepresidente
 Sr. Presidente de la Cámara de Representantes
 James L. Connaughton, Presidente, Consejo sobre Calidad Ambiental
 Stephen L. Johnson, Administrador, Agencia de Protección Ambiental de los EEUU.

Nota: Los representantes ante la Junta Ambiental del Buen Vecino del Departamento de Estado y del Departamento de Transportación de los EEUU, del Departamento del Medio Ambiente de Nuevo México y de la Comisión sobre Calidad Ambiental de Texas, rehusaron participar en esta Carta Comentario.



EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT
COUNCIL ON ENVIRONMENTAL QUALITY
WASHINGTON, D.C. 20503

CHAIRMAN

December 7, 2006

Dr. Paul Ganster
Presidente, Junta Ambiental del Buen Vecino
Mail Code 1601 E., 655 15th St. NW Suite 800
Washington, DC 20460

Estimado Presidente Ganster,

Gracias por su carta referente a los posibles impactos ambientales resultantes de la construcción de cercas, caminos de acceso, y otras infraestructuras a lo largo de la frontera con México. El Presidente George W. Bush aprecia estos importantes puntos de vista de la Junta y me ha solicitado que le responda a usted en su nombre.

El Acta Cerca Segura (Acta) aprobada como ley el 26 de octubre de 2006, autorizó la instalación de una infraestructura física adicional en la frontera de Estados Unidos-Méjico. Como un importante paso hacia adelante en los esfuerzos de nuestra nación para controlar nuestras fronteras, el Acta también servirá como una fuente de protección contra el ambientalmente dañino tráfico de inmigrantes a través de las tierras públicas que se extienden a lo largo del 39 por ciento de nuestra frontera sur.

Gracias por su sugerencia relacionada con el uso de equipos con sensores remotos, barreras benignas para la vida silvestre, y otras tecnologías. Como es de su conocimiento, el Acta autoriza al Departamento de Seguridad Nacional el uso de vigilancia, instrumentos de barreras "y otros medios" para asegurar las áreas montañosas donde la construcción de una cerca sería difícil. El Presidente y su Administración están comprometidos a asegurar que esta autoridad sea utilizada en una forma que incremente la seguridad y al mismo tiempo mitigue el impacto a las numerosas especies de vida silvestre que usan los corredores montañosos a lo largo de la frontera.

La Administración está también comprometida a trabajar con las agencias federales y no federales del gobierno, el gobierno mexicano, los terratenientes, y las organizaciones de conservación para identificar y utilizar métodos adicionales de mitigación ambiental en todas las áreas de implementación del Acta donde sea posible.

El Presidente comprende que aunque las preocupaciones por la seguridad nacional son de extrema importancia, nosotros podemos y debemos proteger la nación de una manera que tome en cuenta la importancia de la administración ambiental y la preservación de los recursos naturales. El Presidente y su Administración permanecen comprometidos a seguir trabajando con los futuros objetivos de la Junta Ambiental del Buen Vecino. Sería un placer para mí poder reunirme con usted y otros miembros de la Junta para discutir sus recomendaciones y la implementación del Acta de Cerca Segura. Gracias por sus puntos de vista y por su continuo servicio a nuestro país.

Respetuosamente,

James L Connaughton

Grupos Consultivos de la Contraparte Mexicana, los "Consejos"

El siguiente informe fue preparado por el representante del "Consejo" Flavio Olivieri del Sector Comercial de Baja California, Junta Regional del Noroeste, Junta Consultiva de Ciudadanos para el Desarrollo Sustentable.

Los "Consejos" mexicanos asesoran a la Secretaría Federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) suministrándole recomendaciones escritas sobre política ambiental. Estos grupos consultivos están compuestos por cinco consejos regionales (Noreste, Noroeste, Sur, Central y Centro-Oeste) y un consejo nacional. La Junta Ambiental del Buen Vecino trabaja más estrechamente con los Consejos del Noreste y Noroeste. Los miembros de los Consejos se desempeñan como representantes electos de cada estado y provienen de organizaciones no gubernamentales; de los sectores sociales, comerciales y académicos; y de los gobiernos estatales y congresos locales. Las mujeres, los jóvenes y los representantes indios son designados en el consejo nacional.

Los Consejos estuvieron muy activos en el 2006, que terminó con las preparaciones para la transición de la nueva administración del gobierno federal en México. Durante el año, la relación del Consejo con la Junta Ambiental del Buen Vecino se acentuó con la participación de miembros del Consejo de los estados fronterizos del norte en dos de las reuniones de la Junta. Además, el Noveno Informe de la Junta fue distribuido a todos los miembros del Consejo de los estados fronterizos del norte y también a través de presentaciones en las reuniones nacionales del Consejo.

Los consejos regionales y el consejo nacional trabajaron en grupos técnicos para elaborar sus recomendaciones. En la reunión del consejo nacional de noviembre, se aprobaron 44 recomendaciones. El Grupo de trabajo Asuntos Internacionales y Fronterizos se concentró en los siguientes tópicos:

- Fortalecer la participación y financiamiento de SEMARNAT en el Grupo de Trabajo Frontera 2012, la Comisión para la Cooperación Ambiental, y las actividades de la Comisión de Cooperación para el Ambiente Fronterizo.
- Promover grupos de trabajo binacionales para revisar y presentar recomendaciones sobre cómo mitigar los posibles impactos ambientales causados por la construcción de cercas en la frontera de los Estados Unidos-Méjico.

- Continuar el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (registro de emisiones de México) y armonizarlo más con los Estados Unidos y Canadá.

- Fortalecer la perspectiva y resolución de los conflictos ambientales en la frontera sur de México con Belice y Guatemala.

Además de preparar las recomendaciones, la mayoría de los miembros del consejo participaron en otros grupos de trabajo y foros. Entre sus logros más sobresalientes se incluyen:

- *Decreto Presidencial para la Zonación Ambiental Marina del Golfo de California.* Varios miembros del Consejo participaron durante dos años con distintos funcionarios del gobierno local, estatal y federal para elaborar el Plan de Zonación Ambiental Marina para el Mar de Cortés, que fue finalmente aprobado por el Presidente de México y publicado en la Gaceta Oficial el pasado noviembre. Este Plan proporcionará a las autoridades federales lineamientos ambientales para regular el uso sustentable de este mar prístino.
- *Cuarto Foro Mundial del Agua.* Un grupo numeroso de miembros del Consejo participó en la organización y preparación de presentaciones para el Cuarto Foro Mundial del Agua que tuvo lugar entre el 16 y 22 de marzo de 2006, en la Ciudad de México. Casi 20,000 personas de todo el mundo participaron en las 206 sesiones de trabajo en las que se presentaron un total de 1,600 acciones locales. Participaron representantes oficiales y delegados de 140 países, incluyendo 120 Alcaldes y 150 legisladores así como expertos y representantes de organizaciones no gubernamentales, de compañías y de la sociedad civil.
- *Programa de Educación Nacional para el Desarrollo Sustentable.* Miembros de los Grupos de Trabajo sobre Educación Ambiental de los Consejos colaboraron con el Centro de Educación para el Desarrollo Sustentable de SEMARNAT para preparar el primer programa nacional de educación para el desarrollo sustentable.

Composición de la Junta

La Junta sigue siendo diversa en su composición, incluyendo representantes de sectores de negocios, académicos, del gobierno local y estatal, tribales, y organizaciones sin fines de lucro. La representación federal incluyó los departamentos de: Agricultura, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Desarrollo Urbano, Interior, Estado, y Transportación; de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos; y el Encargado de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de los Estados Unidos.

Junta Ambiental del Buen Vecino Lista de Miembros

Miembros no Federales (No Gubernamental, Estatal, Local, Tribal)

Paul Ganster, Ph.D., Presidente

Director

Instituto para Estudios Regionales de las Californias
Universidad Estatal de San Diego
5500 Campanile Drive
San Diego, CA 92182-4403
619-594-5423; 619-594-5474 (fax)
Correo electrónico: paganster@mail.sdsu.edu

Amanda Aguirre

Presidente y OEJ
Centro Regional para la Salud Fronteriza, Inc.
P.O. Box 1669
San Luis, AZ 85349
928-627-9222; 928-627-8315 (fax)
Correo electrónico: amanda@rcfbh.com

Larry S. Allen*

Junta Directiva
Grupo Fronterizo Malpai
1310 Sara Way
Rio Rancho, NM 87124
505-898-3424
Correo electrónico: Larry9869@msn.com

Christopher P. Brown, Ph.D.

Profesor Asociado
Universidad Estatal de Nuevo México
P.O. Box 30001/MSC MAP
Las Cruces, NM 88003-8001
505-646-1892; 505-646-7430 (fax)
Correo electrónico: brownchr@nmsu.edu

Gedi Cibas, Ph.D.*

Gerente
Programas Fronterizos
Departamento del Medio Ambiente de Nuevo México
1190 St. Francis Drive, P.O. Box 26110
Santa Fe, NM 87502-6110
505-827-2176; 505-827-2836 (fax)
Correo electrónico: Gedi_Cibas@nmenv.state.nm.us

Ron Curry

Secretario
Departamento del Medio Ambiente de Nuevo México
1190 St. Francis Drive, P.O. Box 26110
Santa Fe, NM 87502-6110
505-827-2855; 505-827-2836 (fax)
Correo electrónico: ron.curry@state.mn.us

Michael P. Dorsey

Jefe
División de Materiales Peligrosos
Departamento de Salud Ambiental del Condado de San Diego
P.O. Box 129261
San Diego, CA 92112-9261
619-338-2395; 619-338-2319 (fax)
Correo electrónico: michael.dorsey@sdcounty.ca.gov

Edward Elbrock

Grupo Fronterizo Malpai
P.O. Box 25
Animas, NM 88020
505-548-2270
Correo electrónico: elbrock@vtc.net

Gary Gillen

Presidente
Control de Pestes Gillen
205 S. 10th Street
Richmond, TX 77469
281-342-6969; 281-232-6979 (fax)
Correo electrónico: gary@gillenpestcontrol.com

Genevieve S. Long

Alcaldesa Suplente
City of Mission
101 Tom Landry Boulevard
Mission, TX 78572
956-580-7852; 956-580-8669 (fax)
Correo electrónico: longen.1@netzero.com

Rosario Marin

Secretaria
Agencia de Servicios del Consumidor del Estado de California
915 Capitol Mall, Suite 200
Sacramento, CA 95814
916-653-2979; 916-653-3815 (fax)
Correo electrónico: rmarin@sca.ca.gov

Jennifer A. Montoya

Directora de Programa de Estados Unidos
Proyecto de Conservación del Desierto Chihuahuan
World Wildlife Fund
100 E. Hadley Street
Las Cruces, NM 88001
505-525-9537; 505-523-2866 (fax)
Correo electrónico: jatchley@zianet.com

Stephen M. Niemeyer, P.E.

Comisión de Calidad Ambiental de Texas
MC-121
Austin, TX 78711-3087
512-239-3606; 512-239-3333 (fax)
Correo electrónico: sniemeye@tceq.state.tx.us

Ned L. Norris, Jr.

Vice Presidente
 La Nación Tohono O'odham
 P.O. Box 837
 Sells, AZ 85634
 520-383-2028; 520-383-3379 (fax)
 Correo electrónico: Ned.Norris@tonation-nsn.gov

Kenneth Ramirez

Brown McCarroll, LLP
 111 Congress Avenue, Suite 1400
 Austin, TX 78701
 512-479-9711; 512-226-7271 (fax)
 Correo electrónico: kramirez@mailbmc.com

David Randolph

Funcionario de Coordinación Fronteriza
 Comisión Arizona-México
 1700 W. Washington, Suite 180
 Phoenix, AZ 85007
 602-364-0338; 602-542-1411 (fax)
 Correo electrónico: randolphdavide@aol.com

Diane Rose*

Alcaldesa
 City of Imperial Beach
 825 Imperial Beach Boulevard
 Imperial Beach, CA 91932
 619-423-8303; 619-429-9770 (fax)
 Correo electrónico: dianehomeloans@yahoo.com

Peter S. Silva*

Vice Presidente
 Junta Estatal de Control de los Recursos Hídricos
 1001 I Street
 Sacramento, CA 95814
 916-341-5607
 Correo electrónico: psilva@waterboards.ca.gov

Douglas S. Smith

Director
 Seguridad y Salud Ambiental Corporativa
 Sony Electronics, Inc.
 16450 W. Bernardo Drive
 San Diego, CA 92127
 858-942-2729; 858-942-9181 (fax)
 E-mail: Douglas.Smith@am.sony.com

Robert Varady, Ph.D.

Subdirector
 Centro Udall para Estudios de Gestión Pública
 Universidad de Arizona
 803 E. First Street
 Tucson, AZ 85719
 520-626-4393; 520-626-3664 (fax)
 E-mail: rvarady@email.arizona.edu

Ann Marie A. Wolf

Presidente
 Instituto de Investigaciones Ambientales de Sonora, Inc.
 3202 E. Grant Road
 Tucson, AZ 85716
 520-321-9488; 520-321-9498 (fax)
 Correo electrónico: aawolf@seriaz.org

Miembros Federales**Departamento de Agricultura**

Rosendo Treviño, III
 Asistente Especial del Jefe
 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
 5563 De Zavala, Suite 290
 San Antonio, TX 78249
 210-691-9248; 210-691-9270 (fax)
 Correo electrónico: rosendo.trevino@tx.usda.gov

Departamento de Comercio

(actualmente vacante)

A. Leonard Smith*

Director Regional
 Administración de Desarrollo Económico de Seattle
 Departamento de Comercio de los Estados Unidos
 915 Second Avenue, Suite 1856
 Seattle, WA 98174
 206-220-7660
 Correo electrónico: lsmith7@eda.doc.gov

Departamento de Salud y Servicios Humanos**Marilyn DiSario**

Directora Asociada de Salud Global
 Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades
 Centro Nacional para Salud Ambiental
 Centros para Control y Prevención de Enfermedades
 1600 Clifton Road, N.E., MS-E97
 Atlanta, GA 30333
 404-498-0909; 404-498-0064 (fax)
 Correo electrónico: mdisirio@cdc.gov

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano**Shannon H. Sorzano**

Asistente del Subsecretario para Asuntos Internacionales
 Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos
 451 Seventh Street, S.W., Room 8118
 Washington, DC 20410
 202-708-0770; 202-708-5536 (fax)
 Correo electrónico: shannon_h._sorzano@hud.gov

Departamento del Interior**James Stefanov**

Oficina de Estudios Geológicos de los Estados Unidos
 Departamento del Interior de los Estados Unidos
 8027 Exchange Drive
 Austin, TX 78754-4733
 512-927-3543; 512-927-3590 (fax)
 Correo electrónico: jestefan@usgs.gov

Departamento de Estado**Daniel D. Darrach**

Coordinador, Asuntos Fronterizos Estados Unidos-México
 Departamento de Estado de los Estados Unidos, WHA/MEX
 2201 C Street, N.W., Room 4258
 Washington, DC 20520
 202-647-8529; 202-647-5752 (fax)
 Correo electrónico: darrachdd@state.gov

John Ritchie*

Coordinador Fronterizo
 Oficina de Asuntos de México
 Departamento de Estado de los Estados Unidos
 2201 C Street, N.W., Room 4258-MS
 Washington, DC 20520
 202-647-8529; 202-647-5752 (fax)
 Correo electrónico: RitchieJA@state.gov

Departamento de Transporte**Linda L. Lawson**

Directora
 Seguridad, Energía y Medio Ambiente
 Departamento de Transporte de los Estados Unidos
 400 Seventh Street, S.W.
 Washington, DC 20590
 202-366-4416; 202-366-0263 (fax)
 Correo electrónico: linda.lawson@ost.dot.gov

Agencia de Protección Ambiental**Carl Edlund**

Director
 División de Planeación y Permisos Multimedia
 Región 6
 Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
 1445 Ross Avenue, Suite 1200, MC 6PD
 Dallas, TX 75202-2733
 214-665-8124; 214-665-7263 (fax)
 Correo electrónico: edlund.carl@epa.gov

Comisión Internacional de Límites y Aguas**Carlos Marin**

Comisionado Interino
 Sección Estadounidense
 Comisión Internacional de Límites y Aguas
 4171 N. Mesa, Suite C-100
 El Paso, TX 79902
 915-832-4101; 915-832-4191 (fax)
 Correo electrónico: carlosmarin@ibwc.state.gov

Funcionarios Federales Designados**Elaine M. Koerner**

Funcionaria Federal Designada
 Junta Ambiental del Buen Vecino
 Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
 1200 Pennsylvania Avenue, N.W.
 Mail Code 1601E
 Washington, DC 20460
 202-233-0069; 202-233-0060 (fax)
 Correo electrónico: koerner.elaine@epa.gov

***Nota:** La lista más arriba incluye todos los miembros que sirvieron durante el año 2006. El asterisco (*) indica a individuos que cumplieron su servicio durante el año. Vea el Sitio de Red de la Junta Ambiental del Buen Vecino para una lista más reciente de miembros (<http://www.epa.gov/ocem/gneb>).

Nótese también, que hacia fines de 2006, el Departamento de Seguridad Nacional DHS) participó de manera informal en las actividades de la Junta, incluyendo el desarrollo del Décimo Informe. Aunque el Departamento concuerda con muchas de las recomendaciones de la Junta, en varios casos mantiene puntos de vistas diferentes (por ejemplo, la recomendación de la Junta para que el DHS lleve a cabo un mayor alcance público, adicionalmente a lo que ya está haciendo en sus actividades relacionadas con la Ley Nacional de Política Ambiental).

Especialistas en Recursos

(individuos que no son miembros de la Junta que trabajan en relación estrecha con la misma)

Suplentes de Agencias Federales

Manuel Ayala

Gerente Recursos Naturales
 Servicio de Conservación de Recursos Naturales
 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
 1400 Independence Avenue, S.W., Room 4237-S
 Washington, DC 20250-1081
 202-720-1883; 202-720-0668 (fax)
 Correo electrónico: manuel.ayala@usda.gov

Miguel Flores

Director
 División de Protección Calidad del Agua
 Región 6
 Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
 1445 Ross Avenue, Suite 1200, MC 6PD
 Dallas, TX 75202-2733
 214-665-8587; 214-665-7263 (fax)
 Correo electrónico: flores.miguel@epa.gov

Rachel Kauffman, Ph.D., M.P.H.

Oficina de Salud Global
 Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades
 Centro Nacional para Salud Ambiental
 Centros para Control y Prevención de Enfermedades
 1600 Clifton Road, N.E., MS-E97
 Atlanta, GA 30333
 404-498-3053; 404-498-0064 (fax)
 Correo electrónico: rbk8@cdc.gov

Rachel Poynter

Oficina de Asuntos de México
 Departamento de Estado de los Estados Unidos
 2201 C Street, N.W., Room 4258-MS
 Washington, DC 20520
 202-647-8529; 202-647-5752 (fax)
 Correo electrónico: PoynterRM@state.gov

Christina Machion Quilaqueo

Analista de Programa
 Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos
 451 Seventh Street, S.W., Room 8118
 Washington, DC 20410
 202-708-0770; 202-708-5536 (fax)
 Correo electrónico: christina_a._machion@hud.gov

Sally Spener

Secretaria Interina
 Comisión Internacional de Límites y Aguas
 4171 N. Mesa, Suite C-100
 El Paso, TX 79902
 915-832-4175; 915-832-4195 (fax)
 Correo electrónico: sallyspener@ibwc.state.gov

Contactos de Oficinas Regionales de la EPA

REGION 9

Hector Aguirre
 Región 9
 Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
 75 Hawthorne Street
 San Francisco, CA 94105-3901
 415-972-3213; 415-947-8026 (fax)
 Correo electrónico: aguirre.hector@epa.gov

(OFICINA FRONTERIZA)

Tomas Torres
 Coordinador Programa Fronterizo Estados Unidos-México
 Región 9
 Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
 610 W. Ash Street (905)
 San Diego, CA 92101
 619-235-4775; 619-235-4771 (fax)
 Correo electrónico: torres.tomas@epa.gov

REGION 6

Gina Weber
 Coordinador Programa Fronterizo Estados Unidos-México
 Región 6
 Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
 1445 Ross Avenue, Suite 1200, MC 6PD
 Dallas, TX 75202-2733
 214-665-8188; 214-665-7263 (fax)
 Correo electrónico: weber.gina@epa.gov

(BORDER OFFICE)

Carlos Rincon, Ph.D.
 Director Oficina Fronteriza
 Región 6
 Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
 4050 Rio Bravo, Suite 100
 El Paso, TX 79902
 915-533-7273; 915-544-6026 (fax)
 Correo electrónico: rincon.carlos@epa.gov

Cambios en la Composición de la Junta

Miembros no Federales

El Administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) Stephen L. Johnson nombró a dos nuevos miembros de la Junta en representación de los gobiernos de sus respectivos estados. *Rosario Marin* de la Junta de Manejo Integral de Residuos de California, y *Ron Curry*, Secretario del Departamento del Medio Ambiente de Nuevo México. Además, tres de los miembros actuales de la Junta fueron nombrados para cumplir un segundo período de servicio: *Paul Ganster* de la Universidad Estatal de San Diego (como Presidente de la Junta); *Ned Norris, Jr.*, Vicepresidente de la Nación Tohono O'odham; y *Robert Varady*, Subdirector del Centro Udall para Estudios de Políticas. También fueron nombrados los siguientes nuevos miembros: *Christopher P. Brown* de la Universidad del Estado de Nuevo México; *Michael P. Dorsey* de la División de Materiales Peligrosos del Departamento de Salud Ambiental del Condado de San Diego; *Edward Elbrock* del Grupo Fronterizo Malpai; *Gen Long*, Alcalde Interino de la Ciudad de Mission, Condado de Hidalgo, Texas; y *Jennifer A. Montoya* del Fondo Mundial para la Vida Silvestre. En 2006 concluyeron su período de servicio los siguientes miembros no federales: *Larry Allen* del Grupo Fronterizo Malpai; *Gedi Cibas*, Gerente del Programa Frontera, Departamento del Medio Ambiente de Nuevo México (representando a Nuevo México); *Diane Rose*, Alcalde, Ciudad de Imperial Beach, California; y *Pete Silva* de la Junta de Recursos Hídricos de California (representando a California).

Miembros Federales

Los nuevos miembros federales que se incorporaron a la junta en 2006 son: *Daniel D. Darrach*, Coordinador, Asuntos Fronterizos Estados Unidos-México, Departamento de Estado de los Estados Unidos; *Marilyn DiSirio*, Directora Asociada, Salud Integral, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos; *Carl Edlund*, Director de la División de Planificación de Multimedios y Permisos, Región 6 de la EPA; *Carlos Marin*, Director Interino de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de los Estados Unidos; y *James Stefanov*, Subdirector del Centro de Ciencias Hídricas de Texas, Servicio Geológico de los Estados Unidos, Departamento del Interior. Los miembros federales cuyos períodos expiraron en 2006 son: *John Ritchie*, Coordinador de Frontera, Oficina de Asuntos de México, Departamento

de Estado de los Estados Unidos; y *A. Leonard Smith*, Director Regional, Administración de Desarrollo Económico, Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Fueron reelegidos: *Linda L. Dawson*, Directora, Seguridad, Energía y Medio Ambiente, Departamento de Transporte de los Estados Unidos; *Shannon H. Sorzano*, Delegada del Subsecretario para Asuntos Internacionales, Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos; y *Rosendo Trevino, III*, Conservacionista Estatal, Servicio de Preservación de Recursos Naturales, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Nota de Agradecimiento

Nuevamente este año, la preparación de este Décimo Informe al Presidente y al Congreso por parte de la Junta fue altamente sumamente fortalecida por el valioso aporte de muchos funcionarios responsables por políticas sobre la conducción ambiental de la región fronteriza. Estas contribuciones fueron muy apreciadas por Miembros de la Junta, Alternos, Especialistas en Recursos, y contactos de la Oficina Regional (ver Lista de Miembros del 2006).

Vaya nuestro agradecimiento a todos aquellos individuos que aparecen en la lista que sigue y a cualquier otro cuyo nombre que pudo haber sido omitido inadvertidamente. Apreciamos el valor agregado a las deliberaciones de la Junta Ambiental del Buen Vecino que ayudaron a formular sus recomendaciones: *Michael Hance*, y *Kevin Stevens* (DHS); *Roger Di Rosa*, *Shela McFarlin*, y *Ernesto Reyes* (DOI); *David DeCarme*, *John Gray*, *Sylvia Grijalva*, *Jill Hochman*, *Bob McGuire*, *Camille Mittelholtz*, *Jeanne O'Leary*, *Bob Richard*, *Chuck Rombro*, y *Shari Schaftlein* (DOT); *Linda Chambers*, *Dave Fege*, *Valmichael Leos*, *Lorena Lopez-Powers*, *William Luthans*, *Barbara Maco*, *Yvonne Manske*, *Linda Reeves*, *Stacey Takeda*, y *Juan Zepeda Valdez* (EPA); *Raymundo Aguirre*, *Cesar Boisselier*, *Isela Canava*, *Gabriel Duran*, *Rong Kuo*, y *José Nuñez* (IBWC-Sección EEUU); *Plácido dos Santos* (ADEQ); *Cindy Padilla* (NMED); *Kim Vacariu* (Proyecto Tierras Virgenes); *Ken Wheatley* (Sony Electronics, Inc.) *Mary Miner*, *Martín Ramírez*, y *Angie Russo* (TCEQ); *Melissa Estes* (Grupo de Indios Kumeyaay de Campo); *Desí Vela* (Grupo de Indios Ewiaapaayp de Misiones); *Nina Hapner* (Coalición para la Protección Ambiental de Nativos Americanos); *Cornelius Antone* y *Lorinda Sam* (Nación Tohono O'odham).

About the Board

The Good Neighbor Environmental Board is an independent U.S. Presidential advisory committee that operates under the Federal Advisory Committee Act (FACA). Its mission is to advise the President and Congress of the United States on “good neighbor” environmental and infrastructure practices along the U.S. border with Mexico. The Board does not carry out border-region environmental activities of its own, nor does it have a budget to fund border projects. Rather, its unique role is to step back as an expert, nonpartisan advisor to the President and Congress and recommend how the federal government can most effectively work with its many partners to improve the environment along the U.S.-Mexico border. Under Presidential Executive Order, its administrative activities were assigned to the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and are carried out by the EPA Office of Cooperative Environmental Management.

Membership on the Board is extremely diverse. It includes senior officials from a number of U.S. federal government agencies and from each of the four U.S. border states—Arizona, California, New Mexico, and Texas. It also includes representatives from the tribal, local government, nonprofit, ranching and grazing, business, and academic sectors. In addition, the Board maintains dialogue with its counterpart Mexican environmental agency advisory groups, and the Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS), referred to as Consejos, to help ensure that it remains informed about issues on the Mexico side of the border.

The Board meets three times each calendar year in various U.S. border communities and in Washington, DC. Its advice is submitted to the U.S. President and Congress in the form of annual reports that contain recommendations for action. These recommendations are submitted after consensus is reached across the entire membership. They are shaped by the combined expertise of the Board members, by the Board's ongoing dialogue with its Consejo counterpart groups, and by the speakers and concerned citizens from both sides of the border who attend its meetings in border communities. The Board also occasionally issues Comment Letters during the year to provide input on timely topics. One of the most frequently recurring themes in its advice is that support for cross-border cooperation is essential if sustained progress is to be made on environmental issues along the U.S.-Mexico border.

All meetings of the Good Neighbor Environmental Board are open to the public. For more information, see the Board Web Site, <http://www.epa.gov/ocem/gneb>, or contact the Designated Federal Officer, Elaine Koerner, at (202) 233-0069 or koerner.elaine@epa.gov.

Notice: This report was written to fulfill the mission of the Good Neighbor Environmental Board (the Board); a public advisory committee authorized under Section 6 of the Enterprise for the Americas Initiative Act, 7 USC § 5404. It is the Board's Tenth Report to the President and Congress of the United States. EPA manages the operations of the Board. This report, however, has not been reviewed for approval by EPA and, hence, the report's contents and recommendations do not necessarily represent the views and policies of EPA, nor of other agencies in the Executive Branch of the Federal Government, nor does mention of trade names or commercial products constitute a recommendation for use.

EPA 130-R-07-003

An electronic copy of this report can be found at:

<http://www.epa.gov/ocem/gneb/gneb10threport/English-GNEB-10th-Report.pdf>

<http://www.epa.gov/ocem/gneb/gneb10threport/espanol-gneb-10th-report.pdf>

Front cover photo credit, top to bottom: Paul Ganster, San Diego State University; U.S. Customs and Border Protection; <http://www.midwestwilderness.com>; Paul Ganster, San Diego State University; and (backdrop) Paul Ganster, San Diego State University.

Table of Contents

Letter to the President.....ii

Recommendations at a Glance1

Introduction2

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND BORDER SECURITY ON THE U.S.-MEXICO BORDER

Section 1: Context5

History of Environmental Protection and Border Security	7
Definitions of Security	9
Environmental Protection Institutions	10
Homeland Security Institutions	13
Recent Developments	13

Section 2: Undocumented Human Crossings17

Mixed Environmental Impacts	18
Challenges and Next Steps	19
Projects and Partnerships.....	24

Section 3: Hazardous Materials Crossings27

Border Crossings.....	29
Beyond Border Crossings	31
Challenges and Next Steps	34
Projects and Partnerships.....	37



Business Report41

Board Meetings in 2006	42
Other Activities	44
Membership	52



Chair
Paul Ganster, Ph.D.
Telephone: (619) 594-5423
Email: pganster@mail.sdsu.edu

Designated Federal Officer
Elaine Koerner, DFO
Telephone: (202) 233-0069
Email: koerner.elaine@epa.gov
www.epa.gov/ocem/gnbe

March 14, 2007

The President
The Vice President
The Speaker of the House of Representatives

On behalf of the Good Neighbor Environmental Board, your advisor on environmental and infrastructure conditions along the U.S.-Mexico border, I am pleased to submit to you the *Tenth Report of the Good Neighbor Environmental Board to the President and Congress of the United States*.

This year, our advice addresses the intersection of U.S.-Mexico border security and environmental protection. We have focused our attention on two topics: undocumented human crossings and hazardous materials crossings. To address the challenges associated with undocumented human crossings, while also protecting the region's fragile environment, we advise that federal policymakers concentrate on two areas: (1) stronger communication and collaboration between security agencies and environmental protection agencies, including land management agencies; and (2) more strategic mixing of technology, infrastructure, and personnel to reflect differing security and environmental needs for different sections of the border region. To address the challenges associated with hazardous materials crossings, while also continuing to protect the environment, we also single out two areas: (1) at ports of entry—promote enhanced inspection, cooperation, and replication of best practices; and (2) beyond ports of entry—enable more robust hazardous materials tracking and fully support emergency responders through increased training, improved equipment, and greater ease of movement when responding to crossborder emergencies.

We appreciate the opportunity to offer these recommendations to you in this, our Tenth Report, and respectfully request a response. In addition, we welcome continued dialogue with the Executive Branch and Congress on implementation of our advice.

Respectfully yours,

Paul Ganster,
Chair

Administrative support is provided by the U.S. Environmental Protection Agency, Office of Cooperative Environmental Management Mail Code 1601E
655 15th Street NW Suite 800, Washington, DC 20005 * (T) 202-233-0090 * (F) 233-0060

Tenth Report of the Good Neighbor Environmental Board

"Environmental Protection and Border Security on the U.S.-Mexico Border"

Recommendations at a Glance

Undocumented Human Crossings

To address problems associated with unauthorized flows of people across rural areas of the U.S.-Mexico border, and also continue to protect the environmental quality of the region, the Good Neighbor Environmental Board recommends:

Strengthen communication and collaboration between security agencies and environmental protection agencies, including land management agencies, on both sides of the border. Early and ongoing cooperation and participation in the cross-agency dialogue will contribute to effective solutions that serve the core agency missions of homeland security and environmental protection, while also addressing quality of life concerns of border communities.

Strategically employ a mix of technology and personnel to meet the security and environmental needs of different sections of the border region. Vehicle barriers and sensor technology along the boundary that permit habitat connectivity and migration of important species can serve well in rural areas characterized by fragile habitats.

Hazardous Materials Crossings

To provide safety and security at ports of entry and beyond, as well as environmental protection from risks associated with the transborder flow of hazardous materials, the Board recommends:

At ports of entry, increase the number of hazmat inspectors and establish specific sites and hours for hazmat vehicles. Duplicate successful approaches, including use of appropriate technology. Increase cooperation between environmental agencies and security agencies through approaches that reflect site-specific language and staffing requirements.

Beyond ports of entry, resolve liability issues for cross-border emergency responders and provide targeted support that reflects the needs of border communities within the larger national strategic plan. Document and share best emergency response practices. In addition, increase dialogue with tribal entities about hazardous materials transported near and through tribal lands and increase tribal participation in training exercises.

Introduction

For its Tenth Report to the President and Congress, the Board examines the **environmental ramifications** of an issue that has taken center stage on the domestic policy scene: homeland security. More specifically, it looks at how environmental protection and homeland security activities intersect along the U.S.-Mexico border and the dynamics that result. The outcome: a set of recommendations on how the U.S. federal government can help maintain strong environmental protection along the border while also strengthening border security activities.

To keep its recommendations focused, the Board decided to concentrate primarily on two types of border security activities and the events during 2006 that helped to shape them. The first type relates to the potential environmental impacts of undocumented human crossings, such as undocumented migrants and drug traffickers, and the security work that is carried out to prevent these crossings. While recognizing that some unauthorized human crossings take place via vehicles at major ports of entry, the Board decided to focus primarily on crossings in more rural areas. It looked at potential impacts on both human health and ecosystems.

One theme that emerges is the need for a more strategic approach to mitigate the unintended environmental degradation that may occur while working to prevent undocumented human crossings. For example, high-speed chases may inadvertently damage fragile desert ecosystems by destroying plants and animals, disrupting migration routes, and accelerating soil erosion. In addition, there is concern

that Border Patrol activities on the Rio Grande River levees, which protect the Lower Rio Grande Valley from flooding, are degrading the integrity of these levees. Thus, in some cases, stepped-up border security activities may undo the careful stewardship implemented by state and federal land management agencies for decades. At the same time, when large numbers of undocumented migrants are able to cross the border, there also may be environmental impacts. For example, trash and human waste may be left behind scattered about the landscape, which can threaten human health and the environment.

The second type of border security activity addressed in this report relates to the cross-border shipment of hazardous materials and hazardous waste. Topics covered include the inspection, enforcement, tracking, and emergency preparedness activities at ports of entry and beyond that are part of this process. Conveyance methods include materials carried by truck and railroad but not cross-border pipelines of natural gas, petroleum, and petroleum products.

By contrast with human crossings, at ports of entry commercial crossings, border security work and environmental protection work often go hand in hand. In fact, a lack of resources for this type of border security work may well result in environmental damage. For example, insufficient emergency response equipment and training may compromise the ability to respond effectively to a hazardous material spill that pollutes a nearby river or aquifer. Thus, one theme that emerges in this section of the report is the need for more resources that enable this combined environmental protection and security work to be strengthened.



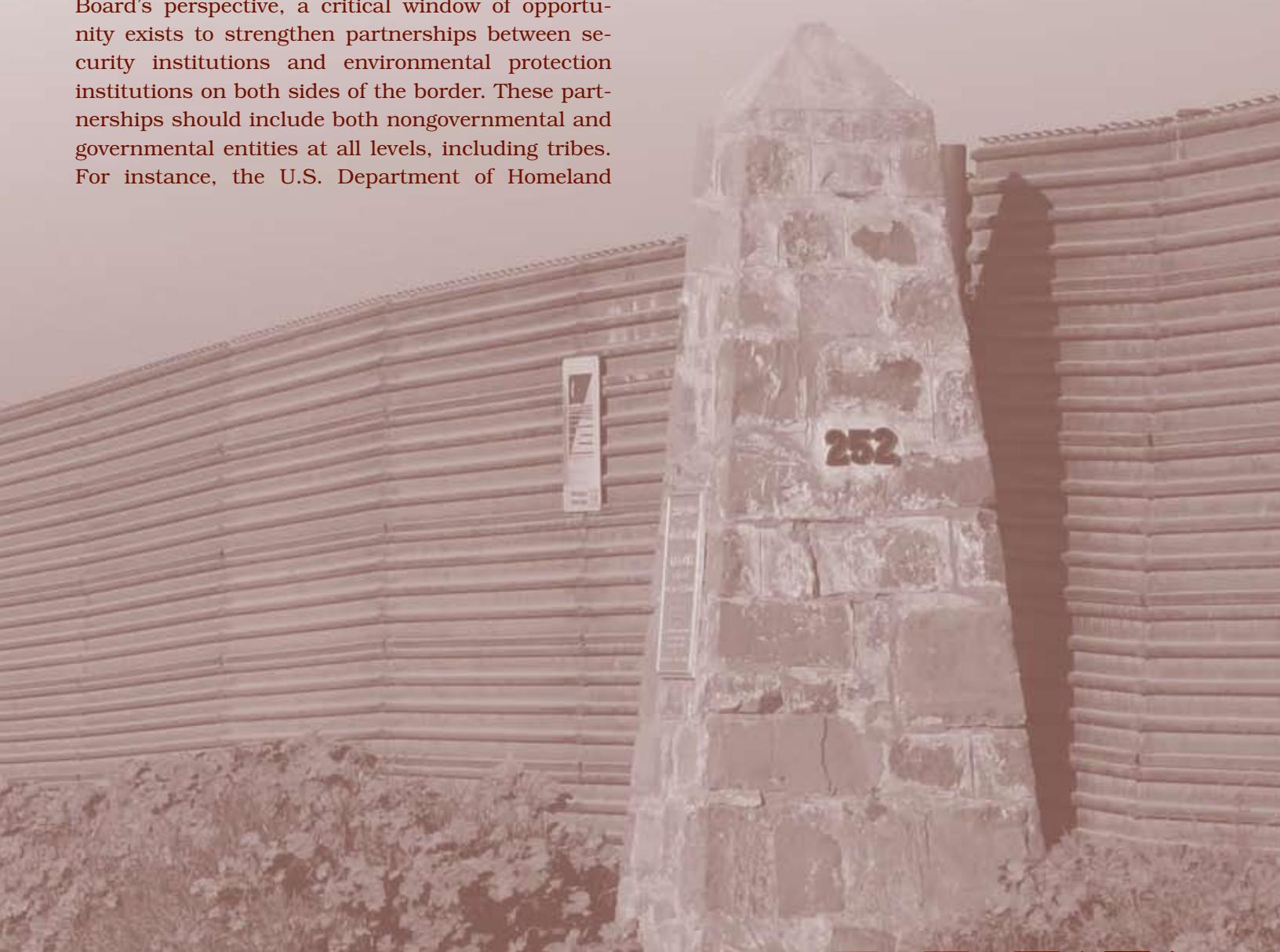
The border fence at Otay Mesa between San Diego and Tijuana. The fence is constructed of surplus steel landing mats. A border monument, maintained by the International Boundary and Water Commission is in the right foreground and construction of the double fence and associated infrastructure can be seen on the left beyond the landing mat fence. (Source: Paul Ganster, San Diego State University)

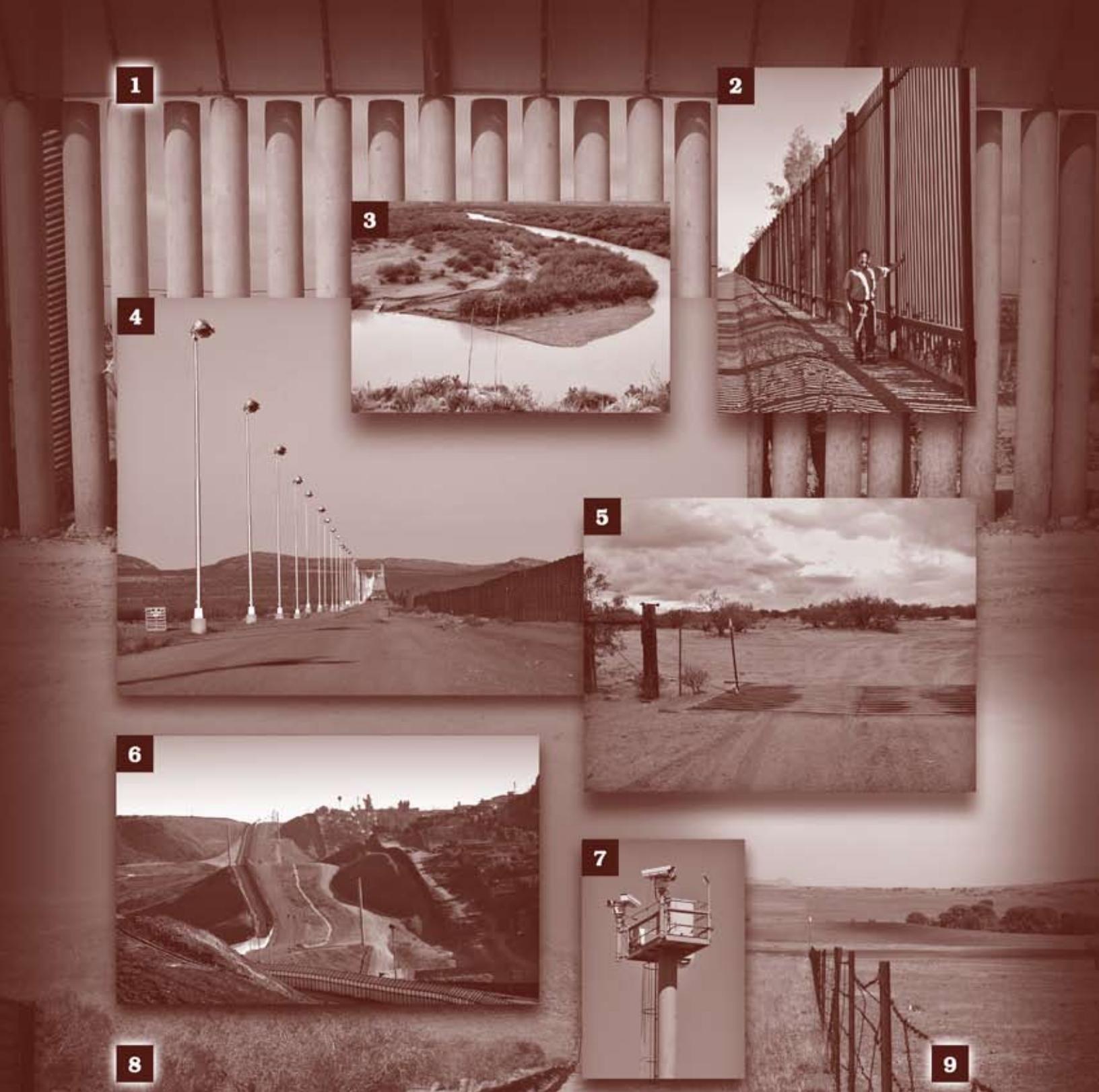
The Board consciously decided not to include additional significant environmental ramifications such as air pollution resulting from delayed security inspections at ports of entry (see Board's Ninth Report, <http://www.epa.gov/ocem/gneb/gneb9threport/English-GNEB-9th-Report.pdf>); ecosystem security threats from invasive species (see Board's 2004 Comment Letter on this topic); and pesticide drift. Nor, for the most part, does the Board discuss the links between environmental quality and domestic policy in other areas such as immigration, economic development, and trade—although it recognizes the value of examining these links. Its approach, primarily, was to formulate recommendations based on current border security policies and environmental policies.

Communities along the southwest border of the United States face a unique set of challenges, and they deserve special environmental policy attention as border security work there intensifies. From the Board's perspective, a critical window of opportunity exists to strengthen partnerships between security institutions and environmental protection institutions on both sides of the border. These partnerships should include both nongovernmental and governmental entities at all levels, including tribes. For instance, the U.S. Department of Homeland

Security has the opportunity to build a strong environmental ethic into its policies as the Department continues to redefine roles and responsibilities. It also has the opportunity to improve stakeholder understanding of its environmental and security practices through increased transparency and communication. Other opportunities need to be identified and acted on, and existing partnerships at all levels need to be highlighted.

Securing our borders is important, but environmental protection must not be relegated to a second-class seat behind the security policy-making table. Strong security and strong environmental protection along the U.S.-Mexico border can go hand in hand. The federal government has a pivotal role to play within this scenario. It is hoped that the recommendations that follow will help move that win-win process forward.





A combination of barriers and surveillance technology is used along the U.S.-Mexico border to help the Border Patrol address security concerns. (1) Bollard barrier, a combination of concrete columns with mesh fencing on top, located near the International Wastewater Treatment Plant in the Tijuana River Valley portion of San Diego, California. (2) High steel bar fence between Calexico, California, and Mexicali, Baja California. (3) Rio Grande River at Big Bend, Texas. (4) New fencing constructed of surplus steel landing mat, together with stadium lighting, east of Naco, Arizona. (5) Cattle crossing barrier on Tohono O'odham Nation borderland south of Sells, Arizona. (6) Multiple fencing, access roads, and stadium lighting east of the San Ysidro Port of Entry, California. (7) Tower with video camera east of Douglas, Arizona. (8) Vehicle barrier in eastern San Diego County, designed to allow water drainage and small animal crossings while inhibiting vehicle crossings. (9) Barbed wire fencing in the San Rafael Valley east of Nogales, Arizona/Sonora. (Source: Paul Ganster, San Diego State University)

Section I

Context

Homeland security is a complex and multilayered subject, especially as it is manifested at the southern border of the United States. Residents of Mexico and beyond, seeking a better way of life for themselves and their families, have been crossing the U.S.-Mexico border without valid U.S. documentation for decades. Accompanying this ever-larger flow of migrants have been criminal elements engaged in a range of illicit activities. These criminal activities include human smuggling by *coyotes*, drug trafficking, and crimes against undocumented border crossers such as assault, robbery, and murder. Because the immediate effects of these migration flows have been

confined largely to border communities in the southwest region of the country, unauthorized migration has received only sporadic widespread national attention in the past.

The terrorist attacks of September 11, 2001, however, changed all of that. The impact of the attacks, combined with other border issues such as unprecedented levels of undocumented migration over the past decade and a half, sharpened the attention of the national policy community on border security matters. The first of these issues was drug smuggling, which produced a wave of violence in Mexican and U.S. border communities, as well as large narcotics



**Homeland security along the 1,952-mile U.S. border with Mexico is a complex and multilayered topic.
(Source: Harry Johnson, San Diego State University)**

DHS Organizational Chart	
Secretary	
Deputy Secretary	
Chief of Staff	
Executive Secretary	
Military Liaison	
Under Secretary Management	
Under Secretary Science and Technology	
Assistant Secretary Policy	
Under Secretary Preparedness	
Under Secretary Federal Emergency Management (FEMA)	
General Counsel	
Assistant Secretary Legislative and Intergovernmental Affairs	
Assistant Secretary Public Affairs	
Inspector General	
Assistant Secretary Office of Intelligence and Analysis	
Director Operations Coordination	
Director Office of Counternarcotics Enforcement	
Ombudsman Citizenship and Immigration Services	
Privacy Officer	
Civil Rights and Civil Liberties Officer	
Director Federal Law Enforcement Training Center	
Director Domestic Nuclear Detection Office	
Federal Coordinator Gulf Coast Rebuilding	
Assistant Secretary Transportation Security	
Administration	
Commissioner United States Customs and Border Protection	
Director United States Secret Service	
Director United States Citizenship and Immigration Services	
Assistant Secretary Immigration and Customs Enforcement	
Commandant, U.S. Coast Guard	

The Department of Homeland Security (DHS) is an umbrella institution of more than 180,000 employees in a range of previously independent security agencies. Customs and Border Protection (CBP), within DHS, plays the most critical role in securing the U.S.-Mexico border. The Border Patrol is within CBP. (Source: <http://www.dhs.gov/index.shtm>)

seizures. Arrests of U.S. and Mexican officials, along with career criminals, produced the widely held image in the United States that the border was lawless and out of control. This image has been reinforced by the continued flow of undocumented immigrants across the border.

The outcome was an intensified focus on increasing border controls. Some observers thought that because so many undocumented workers crossed the border easily, so could terrorists. They reasoned that recent data from Immigration and Customs Enforcement (ICE) indicated that drugs are regularly smuggled across the border in huge quantities and, therefore, the same could happen with dangerous quantities of hazardous materials.

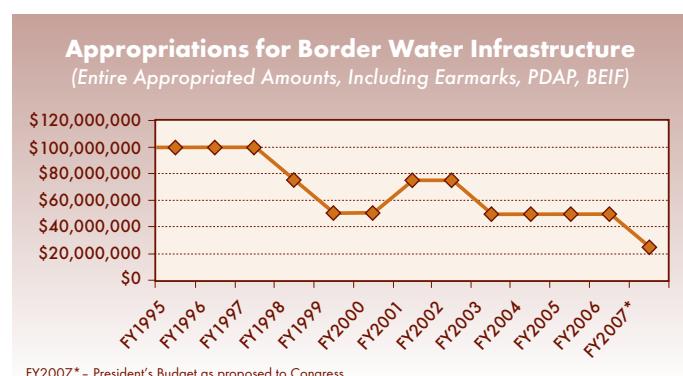
Even as security concerns have increased and the federal response to these concerns has seen greater resources devoted to security practices, environmental conditions along the U.S.-Mexico border remain fragile. As the Good Neighbor Environmental Board pointed out in previous annual reports to the President and Congress, a range of serious environmental management and protection problems remain. These challenges include the difficulty of managing water resources in a binational context; water requirements for rapid economic development and urbanization colliding with limited water supplies in the arid climate; the complexity of managing threatened and endangered species in a cross-border region; and addressing air pollution within binational air basins.

Now, with heightened security concerns, these already fragile environmental conditions are being subjected to additional pressures from both stepped-up security efforts and from the cross-border flows of undocumented migrants and criminal activities. Previous initiatives beginning in the early 1990s to tighten border security at the largest urban crossings such as San Diego and El Paso have driven undocumented human crossers into more remote areas of mountainous and desert terrain. To carry out their border security responsibilities in these rural areas, the Border Patrol and other supporting agencies use four-wheel-drive vehicles, all terrain vehicles, horse patrols, and aircraft. Makeshift access roads prone to erosion also are constructed in these areas. These security activities often inadvertently damage the landscape and wildlife habitat, leaving a heavy environmental footprint in their wake (see *Undocumented Human Crossings* section of this report).

Compounding the threat to environmental quality are the individuals the Border Patrol is trying to apprehend—undocumented migrants, including many women and children. These crossers, along with coyotes and drug smugglers, have opened networks of new footpaths and informal vehicle trails across the fragile landscape and have left behind abandoned vehicles and tons of clothing and trash. One such affected area is the Cabeza Prieta National Wildlife Refuge, named one of the 10 most endangered wildlife refuges in the country. Equally sobering is the fact that two other federal land areas in the region—the Buenos Aires National Wildlife Refuge and Organ Pipe Cactus National Monument—have had to close portions of their land to the public over the past several years because of security concerns surrounding smuggling. Media coverage of the Buenos Aires partial closure cited statistics indicating that more than 250,000 illegal immigrants had entered the refuge in 2004 and 2005, cutting more than 1,300 miles of trails through the native grassland; it could take more than a century for some of these areas to recover.

Within this complex scenario, both environmental protection agencies and security agencies are finding it difficult to get their jobs done to their satisfaction. Developing successful strategies to achieve their respective missions is anything but a one-size-fits-all effort. The border region spans four U.S. states, six Mexican states, and extensive tribal lands. Roughly two-thirds of the 1,952 mile border lies in Texas and is demarcated by the Rio Grande River. Within Texas, the majority of the land along the riverbank is in private hands. By contrast, in New Mexico, Arizona, and California—except for a short stretch along the Colorado River—the boundary is a “line in the sand” drawn by human agency through treaty language. This line often is contiguous with land that is in the public domain in the form of national parks, national forests, military bases, Bureau of Land Management lands, or state and local parks and protected areas.

Significant areas of land along the border are held by sovereign tribal authorities, especially the Tohono O’odham Nation, whose reservation occupies some 75 miles along the border with Mexico. Tribes living on, or near, the international boundary are experiencing the consequences of the increased security in urban areas, which has been pushing undocumented migrant crossings into more rural areas, including tribal lands. Reservations in California such as Ewi-



The Border Environmental Infrastructure Fund enables U.S.-Mexico border communities to improve their wastewater treatment plants and other environmental infrastructure. As the chart above shows, funding has decreased in recent years. Whereas in the past, environmental protection competed primarily with economic growth, it now also finds itself in unfortunate competition with national security concerns, to the detriment of both important interests. (Source: Doug Liden, U.S. Environmental Protection Agency, Region 9)

apaayp and Campo have been overwhelmed with trash left behind from undocumented human crossings and have experienced an increase in smuggling-related violence that creates dangerous conditions for some tribal environmental agency personnel.

Achieving both strong environmental protection and strong border security will entail scenario-specific approaches that are strategically planned and implemented through collaboration between environmental protection and security agencies, with full involvement of affected communities. In this section, we detail the complex socio-economic, cultural, and environmental context from which latter portions of the report explore the nexus of security and environmental concerns.

History of Environmental Protection and Border Security

To balance environmental protection efforts with national security efforts along the border, it is helpful to examine the history of both issues, including how the debate on border issues has changed since the events of September 11, 2001. Until the early 1980s, the environment/natural resources issue that merited the most formal binational attention was water supply. The surface waters of the two major border river systems, the Rio Grande/Rio Bravo and the

Profile of U.S.-Mexico Border Region

The U.S.-Mexico border region is one of the most dynamic areas in the world in terms of its socio-economic characteristics, and it has a complex physical environment. The border zone is defined by the La Paz Agreement (see below) as the region that lies approximately 62.5 miles on each side of the international border. This international border extends 1,952 miles from the Pacific Ocean to the Gulf of Mexico.

Rapid population and economic growth continue to characterize the region, with the population expected to nearly double between 2000 and 2030. Currently, more than 11 million people live within the border zone of the 10 border states of California, Arizona, New Mexico, and Texas in the United States and Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, and Tamaulipas in Mexico.

Most border residents are urban and live in 14 paired sister or twin cities—cities that lie directly across the border from one another. Residents of these sister cities make frequent crossings for work, schooling, and shopping and to visit family and friends. Although there are some affluent communities in the border region such as San Diego, overall it is among the poorest areas of the United States. If the U.S. border counties were considered the 51st state and compared to the rest of the states, it would rank last in access to health care; second in death rates caused by hepatitis; third in deaths related to diabetes; last in *per capita* income; first in the number of school children living in poverty; and first in the number of children without health insurance (from the U.S./Mexico Border Counties Coalition's *At the Cross Roads: US/Mexico Border Counties in Transition*, March 2006). The unauthorized settlements of the U.S. border region, the colonias, are symptomatic of the region's relative poverty. These unregulated settlements lack basic services such as potable water, sewage treatment, solid waste collection, or paved roads and sidewalks. In Texas alone, there are more than 400,000 residents in more than 1,500 colonias.

The culture of the region is largely Hispanic, including residents whose ancestors arrived in the borderlands centuries ago, as well as recent arrivals from Mexico. The region also is home to 26 federally recognized tribes, as well as related Native American groups that live in Mexico. Anglos add to this cultural mix, yielding a region with a range of cultural groups, practices, and values. Approximately 300 million legal human crossings take place northbound from Mexico into the United States each year through about 50 border crossings. Moreover, owing to large-scale migration flows related to economic factors, many other aliens enter without documentation. Some 1.1 million illegal immigrants were apprehended along the border with Mexico during the fiscal year that ended September 30, 2006; it is not known how many persons avoided apprehension and entered the United States without valid documents.

The U.S. and Mexican economies are deeply interconnected. Mexico is the second largest trading partner of the United States, and the United States is Mexico's largest. Major transportation corridors that slice through the border region help facilitate the \$292 billion in bilateral trade between the two countries. This economic integration is especially evident in the border region. Robust trade is partially a result of the *maquiladora* industry, in which manufacturing plants in Mexico—normally operating in conjunction with “twin plants” in the United States—assemble foreign industrial inputs and then export the finished goods. Much of the bilateral trade moves across the border between adjoining cities on trucks, saturating the border's transportation and port of entry infrastructure. (The resulting negative environmental effects, plus initiatives to address those effects, are detailed in the Board's *Ninth Report*.)

The region's physical environment is varied and complex. It includes deserts, mountain ranges, rivers, wetlands, estuaries, and shared aquifers. It also encompasses various climates, a remarkable biological diversity (including many rare and threatened species), and national parks and protected areas. Overall, the borderlands are characterized by aridity and fragility of ecosystems, which are under severe stress from the impacts of human activities.

Colorado River, were shared by the United States and Mexico according to the terms of the Convention of 1906 and the 1944 Water Treaty. This partition of surface waters is administered by the International Boundary and Water Commission, United States and Mexico (abbreviated as IBWC in English and CILA in Spanish).

As population increased in the border area, a number of longstanding environmental concerns became more acute, affecting residents and communities on both sides. Among the most prominent were drought and flooding, inadequate sanitation and water delivery and treatment infrastructure, dangers from pesticides and hazardous waste, loss of natural areas such as riparian habitat, depletion and contamination of aquifers, air quality issues in urban areas, smelter pollution of the “gray triangle” of the

Sonora-Arizona border region, and numerous attendant environmental health problems. Some of these issues were attributable to physical and climatic conditions, but most difficulties were human-induced. Among the causes of deteriorating environmental conditions were economic growth and industrialization, increased industrialized agricultural production, large population growth, and rapid urbanization. These developments stressed and strained the region's environment and natural resources and remained largely unaddressed at that point in time.

In 1983, however, the presidents of Mexico and the United States signed the *La Paz Agreement on Cooperation for the Protection and Improvement of the Environment*. The La Paz Agreement created binational workgroups to systematically address a range of border environmental problems, and it became the

basis for subsequent bilateral border environment agreements. In 1992, the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and its Mexican counterpart, *the Secretariat of Environment and Natural Resources (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT)*, began to craft a series of binational environmental protection programs, the most recent of which is Border 2012. Additional motivation for stronger environmental protection came from the environmental side agreement of the North American Free Trade Agreement of 1994, which included creation of new binational and trinational environmental organizations.

Priorities for binational cooperation between the United States and Mexico undeniably shifted after the events of September 11, 2001. Though viewpoints differ as to what extent these events alone resulted in a much greater focus on border security, they undeniably played a strong role. Some observers would go on to say that the ensuing, refocused national security interests resulted in taking critical resources and attention away from the valuable binational environmental work being carried out along the border. Whereas in the past, environmental protection competed primarily with economic growth, it now also finds itself in unfortunate competition with national security concerns, to the detriment of both important interests.

Definitions of Security

Since the 9-11 attacks, a great deal of debate has emerged on what precisely is included within terms such as homeland security, environmental security, and national security as well as related concepts. Below are the definitions the Board selected for use as reference points as it developed the contents of this report.

Homeland Security—According to *The National Strategy for Homeland Security*, published by the U.S. Department of Homeland Security (DHS) in July 2002, homeland security is defined as “a concerted national effort to prevent terrorist attacks within the United States, reduce America’s vulnerability to terrorism, and minimize the damage and recover from attacks that do occur.” It describes six mission critical areas: intelligence and warning, border and transportation security, domestic counterterrorism, protecting critical infrastructure, defending against

catastrophic terrorism, and emergency preparedness and response.

Environmental Protection and Homeland Security—According to the *U.S. Environmental Protection Agency Homeland Security Strategy*, initially published in 2002 and revised in October 2004, the terrorist events of September 11, 2001, resulted in EPA’s mission being expanded beyond its traditional role of safeguarding the natural environment to also include protecting the environment from terrorist acts. It identifies five mission critical areas that are tied to the national homeland security strategy and also are specific to EPA’s work. These are critical infrastructure protection; preparedness, response, and recovery; communication and information; protection of EPA personnel and infrastructure; and evaluation for efficient use of resources.

Environmental Security—As described in *Diversification, Environmental Stress, and the Euro-Mediterranean Space*, by P. H. Liotta, environmental security focuses on how environmental quality may be degraded by human activities and how this degradation and scarcity of needed resources negatively impacts social welfare. The focus of security in this view deals with the security of human beings and society relative to access to adequate resources and environmental quality and not the hostile actions of other human beings. Accordingly, this view argues that environmental security and a more traditional view of security exist in a complex relationship of interdependence. Failure to effectively manage one facet of this relationship may lead to a threat to the other dimension.

Border Security—For the purposes of the *Tenth Report*, the Board has opted to view security at the U.S.-Mexico border as having two key components: addressing the impacts associated with the flow of undocumented migrants across the border (see *Undocumented Human Crossings* section of this report); and promoting the safe and efficient transportation of materials across the border (see *Hazardous Materials Crossings* section of this report). Note also that DHS’ *The National Strategy for Homeland Security* discusses the issues of border security and transportation security as one topic, and it includes both the northern and southern borders of the United States.

Border Environmental Security—To encourage a productive national policy discussion on how to balance the above interpretations of security, the Board offers a broad view of border environmental

Tribal Perspective

The U.S.-Mexico borderlands are home to 26 U.S. federally recognized Native American tribes (see map), as well as related Native American groups that live in Mexico. These groups face a range of issues associated with environment and security issues. In the United States for instance, tribes are required to apply for homeland security funds through state or county channels. States and counties, however, often do not receive enough funding themselves from the federal government to enable them to fund tribes as well. The result is that most tribes have difficulty obtaining funding to meet even minimal homeland security requirements (see *Border 2012 Tribal Accomplishments & Issues Report*, published in April 2006 by the Native American Environmental Protection Coalition). One exception is the Tohono O'odham Nation, which received funding from the DHS grants program through the Arizona State process for equipment and training.

Homeland security funding is critically needed because border-region tribes are being profoundly affected by the shift in undocumented border crossings to rural areas, including tribal lands. For instance, in the 1970s and 1980s, tribal reservations near the border in San Diego County experienced only occasional undocumented migrants and very little Border Patrol activity. Since the inception of Operation Gatekeeper in 1994, however, that scenario has changed dramatically. Case in point: El Hongo, a small Baja California community in the mountains east of Tecate near the border, has become a staging area for drug and undocumented alien traffickers, who cross the border into the backyards of the tribes.

Tribal land along the border has become a dumping ground for large amounts of solid waste left behind by undocumented migrants and drug smugglers. In addition, anecdotal evidence indicates that tribes are being affected by the law enforcement activities being carried out to apprehend the illegal aliens. For example, tribes have witnessed an increase in the number of arrests of both tribal and nontribal members in their communities as a result of harboring undocumented immigrants and/or possession of contraband. Tribal members also report that isolated gun battles between Border Patrol agents and illegal crossers, as well as car chase accidents, are threatening personal safety in their communities.

Besides the funding barrier and the impacts of enforcement activities, tribes also face information barriers. Many tribes in the United States have major transportation and trade corridors that cross through, or are adjacent to, their reservations; yet they do not have information about hazardous waste materials that are being transported along these corridors. Without this information, tribes cannot adequately prepare for responding to emergencies. The Torres Martinez Desert Cahuilla Indians, for example, have large numbers of trucks passing through their lands transporting hazardous materials between Mexicali and Los Angeles, but the tribe does not have access to truck manifest data to help them carry out emergency preparedness.

security as the mitigation and prevention of potential threats at U.S. borders to public health, environmental quality, and social infrastructure or economy. Border environmental security includes eliminating threats from undocumented human crossings as well as improper, unauthorized, or undocumented transport of hazardous, toxic, radiological, or pathological materials that could potentially cause any harm to the public and/or existing infrastructure or could potentially be used to threaten the security of the United States or its border allies. In addition, border environmental security involves ensuring the ability of communities to respond to nearby and border emergencies involving these substances or any other threat.

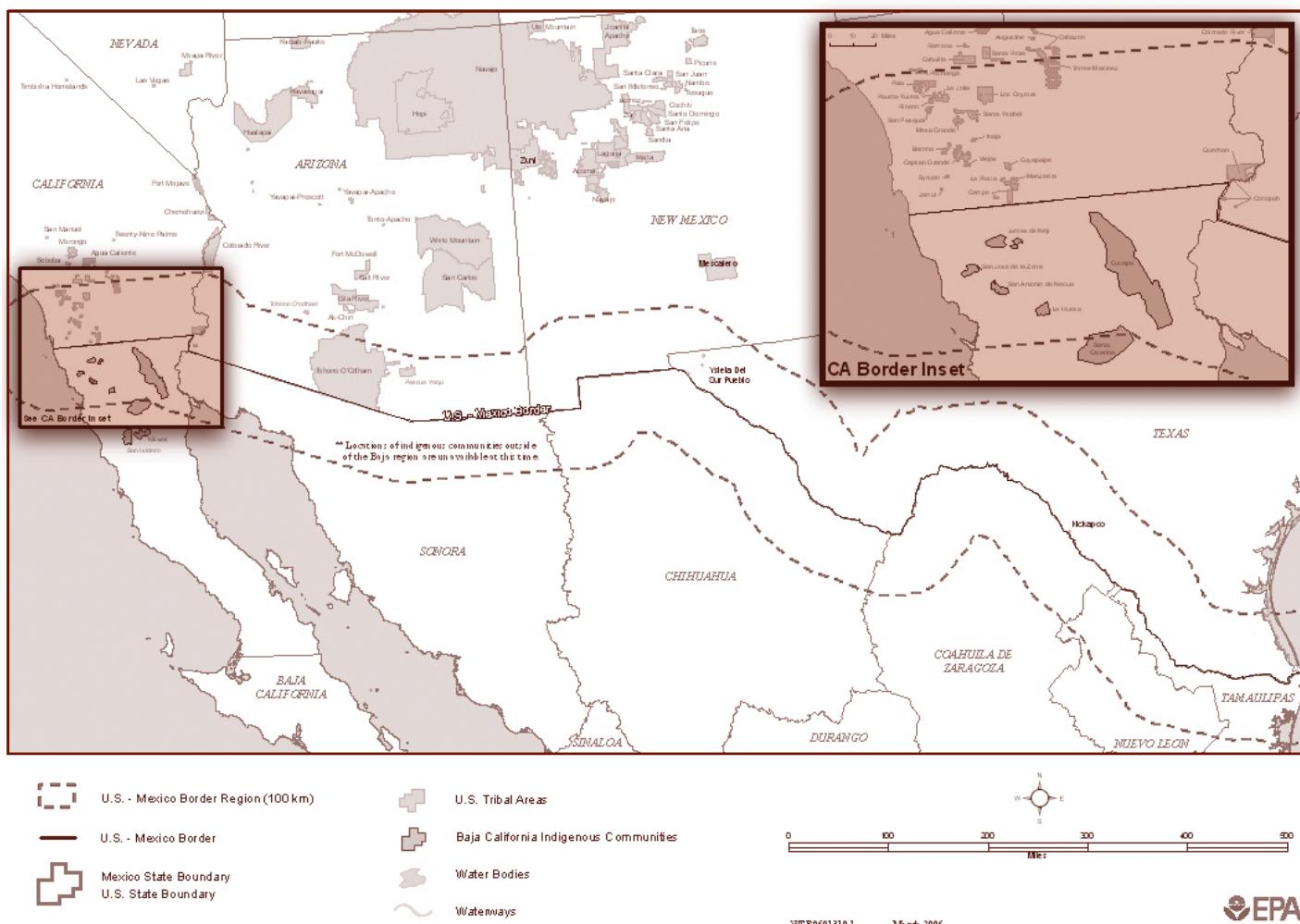
Environmental Protection Institutions

U.S. Institutions

Along the U.S. side of the border, the major agencies and institutions responsible for environmental protection operate at the federal, state, and local levels. Added to this complex mix of institutions are the activities of Native American tribes. Some of these tribal activities are undertaken in conjunction with state, federal, and local agencies, whereas others are undertaken as autonomous nations.

On the federal level, EPA establishes national standards and regulations to protect human health and the environment. Although EPA has the lead for regulation and enforcement for most environmental issues in the United States, other federal agencies, such as the U.S. Department of Agriculture and the U.S. Department of the Interior, cooperate in matters of land preservation and ecological protection. Additional federal agencies also play key roles in the border region. For example, under the National Environmental Policy Act (NEPA), federally funded projects such as building a dam must undergo an assessment of environmental impacts. Thus, agencies such as the U.S. Army Corps of Engineers, the U.S. Bureau of Reclamation, the U.S. Section of the IBWC, and agencies within DHS such as Customs and Border Protection (CBP) and ICE, may engage in environmental protection activities. An exception to the above rule is the recently enacted Real ID Act of 2005 (PL 109-13). It allows the Secretary of Home-

U.S. - Mexico Border Tribes and Indigenous Communities



Native American border-region communities face a range of challenges associated with environmental and security issues. (Source: U.S. Environmental Protection Agency, Region 9 GIS Center)

land Security to waive all legal requirements determined necessary to ensure expeditious construction of the barriers and roads needed to prevent illegal immigration, as was the case with the construction of the security corridor in the San Diego-Tijuana region.

State, local, and tribal environmental agencies come into the picture by being delegated authority for most federal regulatory programs, such as environmental permitting and compliance assurance. These agencies deal with air pollution and air quality issues, protection and regulation of surface and groundwater resources, solid and liquid waste disposal and management, occupational and environmental health, and hazardous materials and emergency response. Although every state in the United

States handles environmental protection differently, the issues themselves, and management approaches to responsibilities passed down from the federal level, often are similar. It should also be mentioned that in areas not reserved for the federal government, the states have developed quite distinct laws and regulations; groundwater is an example. In some cases, states actually may implement stronger laws and regulations than the federal government, as California recently did with rules and regulations that reduce greenhouse gas emissions in the state by 25 percent over the next 15 years. Local governments and related agencies also pass a range of laws and regulations that deal with environmental issues, adding to the complexity of environmental regulations across levels of government.



Both Organ Pipe Cactus National Monument and Buenos Aires National Wildlife Refuge have had to close portions of their land to the public during the past several years as a result of security concerns surrounding smuggling. Here, in nearby Coronado National Forest—which spans both sides of the Arizona border—federal officials have posted signs cautioning travelers that they may encounter smuggling and illegal immigration activities. (Source: Paul Ganster, San Diego State University)

Mexican Institutions

The international border separating the United States from Mexico delineates two starkly different cultures, economies, political systems, and public administration systems. The United States was created with a federal system, in which power is shared among the national government and the individual states. By contrast, in Mexico, authority, financing, and decision making primarily reside in the national government. Although there has been some gradual evolution toward decentralization in recent years, Mexico has retained a strongly centralized governing structure. State and municipal officials often are dependent on centrally disbursed revenue and have limited authority and budgets for managing local and regional affairs. In many cases, local delegates of federal agencies are the key administrative entities for local issues. This situation applies to nearly all aspects of governance to varying degrees: education, health, housing, labor, agriculture, energy—and, of course water, natural resources, and environment. Although decentralization through devolution of responsibilities and budgets from the federal government to state and municipal entities has been underway for decades, progress is slow.

Several federal institutions dominate environmental decision making in Mexico. The first is SEMARNAT, which is responsible for assuring envi-

ronmental sustainability, enforcing environmental quality standards, and representing Mexico in binational environmental cooperation. During the past 15 years, SEMARNAT has worked closely with EPA to develop and carry out a series of binational environmental initiatives based on the La Paz Agreement: the Integrated Border Environmental Plan, Border XXI, and, currently, Border 2012. SEMARNAT maintains regional offices in each of the states, and the agency is constrained by limited budgets, staffing, and influence among ministries. In addition, the National Water Commission (Comisión Nacional del Agua, CONAGUA) dictates most aspects of national water policy and is housed within SEMARNAT. By most accounts, however, CONAGUA is quasi-autonomous and represents the interests not only of SEMARNAT but also of several more powerful ministries: finance, agriculture, energy, health, social development, and administration. The priorities set by CONAGUA often reflect national development imperatives, with environmental interests holding secondary importance.

In addition, each of Mexico's states has its own environmental agency and water supply agency. Because these institutions are dependent on the central government for funding, however, their scope of action and their independence are circumscribed. At the same time, despite gains over the past decade, Mexican civil society has not kept pace with its U.S. analogue. For a variety of reasons—the difficulties of obtaining official status as nongovernmental organizations, the relatively recent rise of environmental activism, the relative lack of leisure time, and other social constraints—Mexican communities and non-governmental organizations often have not had the influence gained by counterpart groups in the United States. The result is that environmental decision making in Mexico remains far more centralized, uniform, and government-dominated than in the United States. This situation has considerable impact on the ability of state and municipal governments in Mexico to effect environmental policy along its northern border with the United States.

Other Institutions

Besides these governmental institutions within the United States and Mexico, several international organizations have been created with environmental protection responsibilities: the North American

Development Bank, the Border Environment Co-operation Commission, and the trinational North American Commission for Environmental Cooperation. Also, under the framework of the La Paz Agreement, the Border 2012 U.S.-Mexico Environmental Program brings together many of these stakeholders and agencies to improve the border environment.

Note also that to enrich its recommendations to the U.S. President, the Good Neighbor Environmental Board actively communicates with representatives from counterpart Mexican advisory groups called Consejos Consultivos para el Desarrollo Sostenible. These Consejos are regional councils created by the Mexican federal government, which include elected and appointed stakeholders from all sectors, that address environment and development issues through their advice to Mexico's federal environmental agency, SEMARNAT (see *Business Report* section in this report).

The IBWC wields considerable clout on transboundary water-related issues along the U.S.-Mexico border. IBWC is comprised of two Sections, the U.S. Section and the Mexican Section, and is responsible for applying the boundary and water treaties between the two countries and settling differences that arise in their application. IBWC responsibilities include assuring the allotment of waters of the Rio Grande and Colorado River to each country in conformance with the water treaties, demarcating the boundary between the two countries, erecting and maintaining boundary monuments and markers on the international land boundary, addressing border sanitation problems, operating international dams, and handling other aspects of transboundary water management.

Nongovernmental organizations also have become active concerning environmental protection in the borderlands. Efforts of national organizations such as Environmental Defense, World Wildlife Federation, and Defenders of Wildlife in the United States and Pronatura in Mexico are notable. Locally, numerous nongovernmental organizations that address specific issues also play a role. For example, the Native Cultures Institute (Instituto de Culturas Nativas, commonly known as CUNA) is a Mexican nonprofit organization that addresses health, cultural, and environmental concerns of native peoples of Baja California, including the Paipai, Kumiai, Kiliwa, and Cucapa. Another example is the Environmental Health Coalition, which addresses environmental

justice and toxic waste issues in the California-Baja California border region. Most of the twin cities along the border have nongovernmental organizations that bring public participation to environmental policy formulation and implementation in the region.

Homeland Security Institutions

The major federal institution responsible for security in the United States is DHS. Created in 2002 by the Homeland Security Act, it is an umbrella institution of more than 180,000 employees in a range of previously independent security agencies. DHS contains the agency that plays the most critical role in securing the U.S.-Mexico border: CBP. Within CBP is the Border Patrol. CBP inspectors staff the ports of entry, whereas the Border Patrol operates primarily between ports of entry.

U.S. security agencies such as DHS base their strategies and actions, in part, on information that is gathered and analyzed by U.S. intelligence agencies. The National Implementation Plan was launched to eliminate overlap and set priorities for the nation's counterterrorism strategy, and the Office of the Director of National Intelligence provides overall coordination and direction for these activities.

Recent Developments

During the past 2 years, several key initiatives were advanced in the United States that are helping to shape border security and environmental protection efforts. First, as noted earlier in the report, the Real ID Act of 2005 (PL 109-13) was passed, which allows the Secretary of Homeland Security to waive all legal requirements determined necessary to ensure expeditious construction of the barriers and roads needed to prevent illegal immigration. This provision was invoked on September 22, 2005, for the construction of the security fence and corridor for the border between San Diego and Tijuana. The provision waives requirements of NEPA, Endangered Species Act, Coastal Zone Management Act, Clean Water Act, National Historic Preservation Act, Migratory Bird Treaty Act, Clean Air Act, and Administrative Procedures Act. DHS officials have explained that the agency exercised this option to move the project forward more rapidly, and before and after the exemption, DHS has continued to meet regularly with

Border Security, Environmental Protection, and the Private Sector

In the global marketplace, companies make decisions about where to site their facilities based on numerous considerations. Water resources, highway infrastructure, labor rates and worker availability, taxes, permits to operate, quality of life, and stability are just a few. Given these criteria, the economy of the border region stands to benefit from increased cooperation between security institutions and environmental protection institutions that strengthens both types of work.

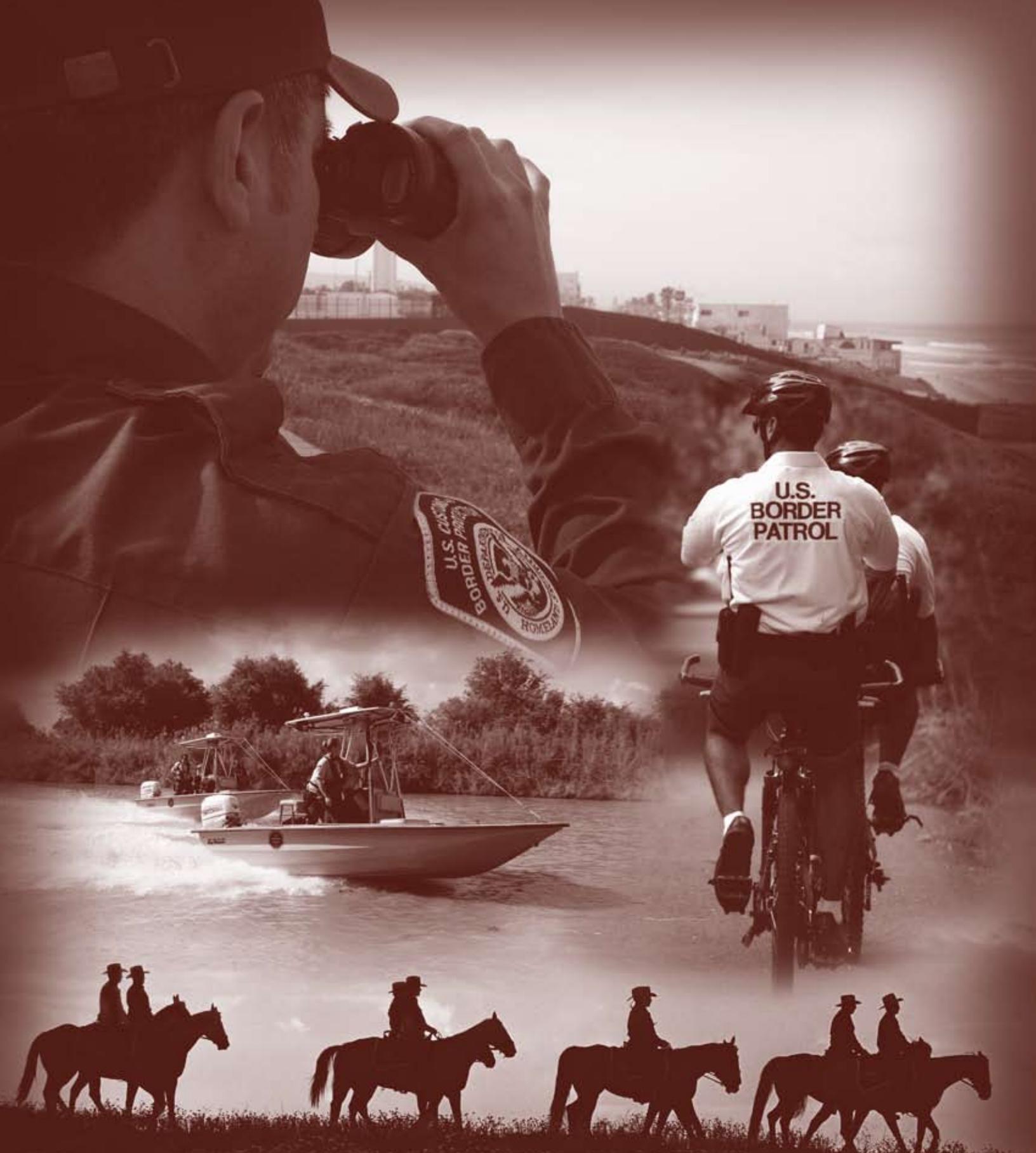
key state, local, and federal agencies and members of the public.

In May 2006, President Bush proposed the dispatch of 6,000 National Guard troops to the U.S.-Mexico border to assist Border Patrol agents with their work. Troops would be charged with helping to operate surveillance systems, analyze intelligence, install fences, build patrol roads, and provide training, as has been the practice for previous use of National Guard troops along the border. A few months later, Congress voted for authorization (but not funding) of 700 miles of physical fencing along the border. Then, in September 2006, under the Secure Border Initiative (SBI), a large technology contract was awarded by DHS for installation of 1,800 high-tech towers designed to feed live video to Border Patrol agents carrying wireless hand-held receivers. (SBInet calls for deploying a mix of fencing, vehicle barriers, sensors, cameras, and other surveillance technology along the U.S. southern and northern borders.) Meanwhile, Congressional debate on the most effective type of infrastructure to secure the U.S.-Mexico border from undocumented crossers continued.

In conclusion, the 2001 strike against the United States was unprecedented and provoked a thorough reexamination of national priorities, including the function of the border with Mexico. Because the attack involved a breach of U.S. sovereignty, it was inevitable that all of U.S. borders would need better surveillance and protection. The southern border with Mexico drew intense scrutiny. Drug trafficking, crime, and fear of terrorist infiltration, combined with growing concerns about undocumented immigration, resulted in making the issue of controlling the border with Mexico a national priority.

Given circumstances that have featured a rapid and massive shift in priorities and allocation of financial resources, it is essential to achieve a reasonable sense of balance. A strong Mexican economy, a healthy environment, and most of all, cross-border trust and cooperation are keys to ensuring the stability and safety of the region. Environmental security (i.e., the assurance of a safe, abundant, protected, and sustainable environment), no less than enforcement-induced impenetrability, is an essential ingredient for national security. A healthy environment on both sides of the border in which human welfare for both U.S. and Mexican citizens is advanced supports border security. Sustainable solutions for security and environmental issues require multi-stakeholder participation, including state and local actors. The trinational dimension also is critical, where the autonomous tribal nations of the United States and related indigenous culture groups in Mexico are actively included in both development and implementation of effective solutions.

In the remainder of this report, the Board examines strategies for balancing border environmental protection and border security in two arenas: undocumented human crossings in rural areas between ports of entry and hazardous materials crossings at ports of entry and beyond.



Border Patrol agents rely on numerous modes of transportation to carry out their work. (Source: U.S. Customs and Border Protection, photographers Gerald L. Nino and James Tourtellotte, <http://www.dhs.gov>)

Section 2

Undocumented Human Crossings

To address problems associated with unauthorized flows of people across rural areas of the U.S.-Mexico border and also continue to protect the environmental quality of the region, the Good Neighbor Environmental Board recommends:

Strengthen communication and collaboration between security agencies and environmental protection agencies, including land management agencies, on both sides of the border. Early and ongoing cooperation and participation in the cross-agency dialogue will contribute to effective solutions that serve the core agency missions of homeland security and environmental protection, while also addressing quality of life concerns of border communities.

Strategically employ a mix of technology and personnel to meet the security and environmental needs of different sections of the border region. Vehicle barriers and sensor technology along the boundary that permit habitat connectivity and migration of important species can serve well in rural areas characterized by fragile habitats.



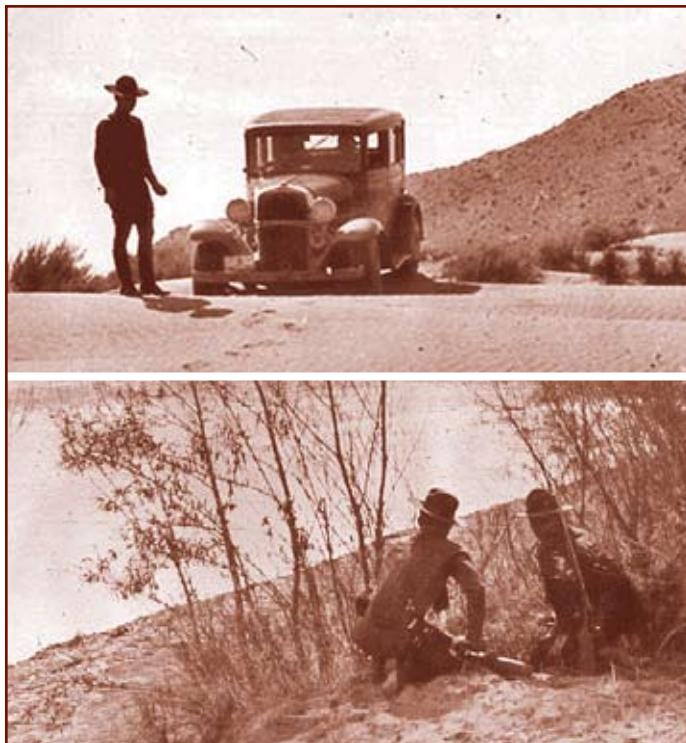
Crossing the U.S.-Mexico border illegally these days often is a case of risking one's life in remote mountain and desert regions of the U.S. border states. These regions are characterized by difficult-to-traverse topography, extremes of temperature, and absence of water. Though many undocumented migrants still cross in urban areas, rapid advancements in inspection technology at the ports of entry, improved infrastructure, and more effective enforcement strategies in cities have redirected the majority of crossers toward more rural settings. Statistics bear out this shift. In fiscal year 1995, the San Diego, California, Border Patrol Sector located 524,231 deportable aliens. That number had dropped to 138,608 in fiscal year 2004. During that same period, the numbers in the more rural Yuma and Tucson Sectors in Arizona rose dramatically, from 20,894 to 98,060 in Yuma and from 227,529 to 491,771 in Tucson. This change in migrant crossing patterns has had a dramatic impact on the border environment.

Several U.S. government initiatives have contributed to this shift. The first, Operation Hold the Line in El Paso, was launched in 1993. Operation Gatekeeper, mentioned previously in this report, in the

San Diego area began in 1994; Operation Safeguard in central Arizona started in 1995; and Operation Rio Grande was initiated in the south Rio Grande Valley of Texas in 1997. These operations included new strategies for deploying agents at the border and installing security infrastructure such as concrete, bollard-type fences; dual and triple wire or steel fences with patrol roads; buried sensors; 24-hour video surveillance; stadium lighting; and infrared night scopes. More recently, the Arizona Border Control Initiative has increased the number of Border Patrol agents stationed in Arizona, expanded the use of checkpoints, and strengthened investigations and enforcement targeting human smuggling operations.

For this section of the report, the Good Neighbor Environmental Board concentrates specifically on undocumented crossings and enforcement in rural areas. It identifies a specific set of challenges for both environmental protection and security officials working in rural areas and suggests both interim and longer term approaches for moving forward.





The Border Patrol has been at work for more than eight decades. (Source: National Border Patrol Museum, El Paso, Texas)

The Border Patrol, housed in U.S. Customs and Border Protection (CBP) within the Department of Homeland Security (DHS), carries the primary responsibility for apprehension of undocumented migrants along both the urbanized and the more remote sections of the U.S.-Mexico border. As an agency, it has been working for more than eight decades along the northern and southern borders of the United States. During the 1920s, new immigration restrictions and Prohibition led to increased concern about undocumented migration and liquor smuggling. In response, Congress passed legislation in 1924 to create the Border Patrol. The new agency quickly expanded to 450 officers. Today's Border Patrol has a workforce of more than 11,000, and the Administration's goal is to boost that total to 18,000 by 2008.

Border Patrol agents rely on a wide range of tools to carry out their work. For instance, surveillance transportation may range from foot and horse patrol to helicopters and fixed-wing unmanned aircraft. Increasingly, agents also make use of a range of technological tools: motion and seismic sensors installed on fences and hidden underground; stationary pole-mounted cameras that are checked when motion sensors are triggered; mobile video sensors, which are trucks with periscope-like cameras and night vi-

sion equipment; night vision goggles worn by Border Patrol agents in towers and during patrols; and ground-penetrating radar equipment to locate tunnels built and used by smugglers and drug dealers. Agents say that the newer technology, as well as access to criminal databases and terrorist watch lists, has helped them do their job better.

Border security activities in rural areas are intensifying dramatically in response to significant increases in numbers of undocumented migrants and smugglers. Given the recently increased presence of National Guard troops, plus the deployment of more advanced technology and improved infrastructure resulting from the Secure Border Initiative (see *Context* section of this report), this trend is not likely to reverse. At the same time, conservation organizations and federal, state, and local land managers are hard at work in these same rural areas trying to preserve natural resources in national wildlife refuges, national forests, and state parks and on private ranches and tribal nation lands.

U.S.-Mexico Border Ecoregions

The U.S.-Mexico border runs through five main ecoregions: California with its Coastal Sage, Chaparral, and oak and pine forests; Sonoran Desert; Madrean Sky Islands Montane Forests; Chihuahuan Desert; and Tamaulipan Thornscrub. Precipitation throughout the borderlands, ranging from 3" to 25" annually, is highest in the mountain regions of southern Arizona/northern Sonora but still is low compared to other parts of the United States. Most of the border is considered arid to semi-arid. Each of the five ecoregions possesses unique qualities. California is known for its fire-adapted shrub communities and extremely rare plants as well as great biodiversity. The Sonoran Desert is famous for its stately saguaros and beautiful palo verde trees, and the Madrean Sky Islands are known for their unusual bird species, such as the elegant trogon and the flame-colored tanager. The highest diversity of lizard species in any one place occurs in the Chihuahuan Desert along the border, and Tamaulipan Thornscrub is home to both ocelot and jaguarundi—two secretive and beautiful cat species.

Mixed Environmental Impacts

The environmental impact of this nexus among undocumented crossers, the security agencies that seek to apprehend them, and the environmental protection agencies that seek to prevent or mitigate damage from both groups is mixed. For example,

during the past several years alone, undocumented migrants and drug smugglers have created hundreds of miles of undocumented roads, abandoned hundreds of vehicles, damaged rare desert springs and wetlands, and left behind thousands of tons of trash on private, state, federal, and tribal lands (mentioned in the *Context* section of this report). As the Board pointed out in its *Ninth Report*, these activities also have destroyed precious cultural and natural resources such as archeological artifacts and sacred Native American sites. Each year, approximately 1 million deportable aliens are located by the U.S. Border Patrol along the U.S.-Mexico border.

From that perspective, rigorous border security can actually prevent, or at least limit, harm to the environment. Effective barriers can decrease the number of undocumented crossings, thereby decreasing likely ecosystem damage. An effective fence or wall project also can reduce the footprint of border enforcement activities, allowing more habitats to remain in a natural state and reducing the need for off-road pursuit. A positive effect of San Diego's Operation Gatekeeper has been the protection of nesting sites of endangered bird species in the sand dunes of the Tijuana River National Estuarine Research Reserve. Another positive example is the return of endangered lesser long-nosed bats to their cave at the Cabeza Prieta National Wildlife Refuge; the bats had been disrupted from their cave by smugglers using it as a staging area but they returned after border fencing was installed and the smugglers abandoned the cave. Commenting on the Arizona Border Control Initiative, which was mentioned earlier in this report, Department of the Interior Deputy Assistant Secretary Larry Parkinson said, "The best thing you can do for the environment is to have control of the border."

Border security activities themselves, however, may cause environmental damage. Environmental organizations such as Defenders of Wildlife, as well as representatives from other nongovernmental groups such as the Center for Biological Diversity and the Society of Conservation Biology, have voiced serious concerns about unintended impacts of fencing and other security activities. As the Board also pointed out in its *Ninth Report*, increased off-road traffic and new Border Patrol roads cause damage to sensitive desert lands and sacred tribal sites. Although this damage may be considered an unfortunate but necessary consequence of safeguarding the

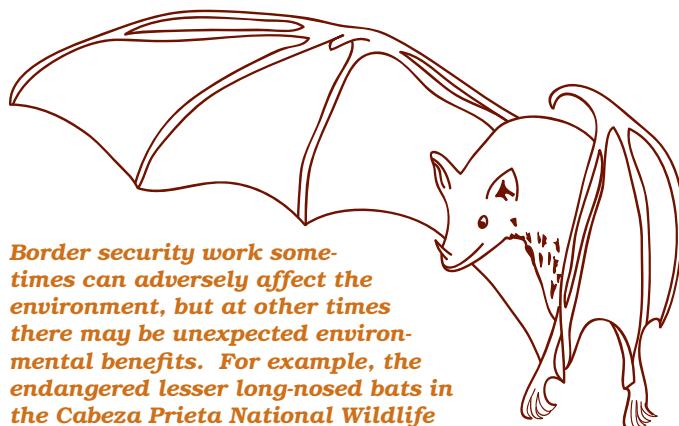
public, much of it could be prevented through more effective strategic planning.

The Board has identified the four most significant challenges faced by environmental protection and border security agencies related to impacts associated with undocumented migrant crossings. In formulating its recommendations for next steps, the Board examined how the various institutions' responsibilities intersect and the sometimes surprising outcomes. Based on this analysis, it formulated approaches for both overcoming the challenges and seizing some of the formerly unidentified opportunities.

Challenges and Next Steps

CHALLENGE 1

Roads and foot trails created by undocumented migrants, migrant smugglers, and drug smugglers and by the interdiction agencies that pursue them cause damage to wildlife and fragile ecosystems. Use of unimproved roads that often are created initially by undocumented migrants as footpaths can destroy desert plants and create tire ruts. These ruts, in turn, erode easily and can dramatically affect the hydrologic cycle. Erosion, dust pollution, and habitat fragmentation are visible results of undocumented crossers and efforts to apprehend them. Although the Border Patrol has a policy of re-



Border security work sometimes can adversely affect the environment, but at other times there may be unexpected environmental benefits. For example, the endangered lesser long-nosed bats in the Cabeza Prieta National Wildlife Refuge were driven from their cave by smugglers using it as a staging area. Later, the bats returned after border fencing was installed and the smugglers vacated the site.

maining on appointed roads and trails except when in immediate pursuit of undocumented crossers, or when involved in rescue operations, significant environmental damage can result from even these limited operations.

Next Steps

When possible, use technology rather than new roads and barriers to achieve security goals. If additional security infrastructure is required, combine permanent vehicle barriers with ground-based radar and other technology, as well as personnel, to effectively halt undocumented crossers as close to the border as possible. Using technology such as ground-based radar, buried sensors, and motion detectors along much of the border, in combination with permanent vehicle barriers, will improve apprehension rates close to the border. Apprehending undocumented immigrants closer to the border reduces the impacts of footpaths and unplanned roads, as well as the broader impacts on these open, rural areas.

DHS should take appropriate steps to identify important or sensitive natural resources along the U.S.-Mexico border and avoid, minimize, or mitigate environmental impacts on such resources whenever possible. As mentioned previously in this report, the Real ID Act of 2005 gives the Secretary of Homeland Security the ability to waive environmental laws such as the National Environmental Policy Act (NEPA) to assure expeditious completion of border road and barrier projects. DHS continues to support selective use of the waiver in addition to maintaining its responsibility to be a good environmental steward. At the same time, some observers believe that exercising this waiver may reduce the amount and quality of public input into the process and may result in projects that are perceived by some stakeholders as not adequately addressing local environmental concerns. These observers maintain that continued compliance with all provisions of NEPA and other relevant legislation will provide an opportunity for formal written comment on DHS proposals and participation in public hearings. Those commenting might include members of the public, land management agencies (such as U.S. Fish and Wildlife Service [USFWS], Bureau of Land Management [BLM], U.S. Forest Service [USFS], National Park Service [NPS], and tribal environmental agencies), environmental organizations, and other stakeholders.

Strengthen communication and outreach to the public to enable greater interaction with appropriate land management agencies and DHS, thus resulting in continued public input on border project development and implementation. DHS regularly interacts with representatives of US-FWS, BLM, USFS, NPS, and other federal, state, and local agencies. The public, however, is not always aware of opportunities for input. Both perceived and actual lack of access to ongoing discussions creates the impression among some stakeholder groups that environmental concerns are ignored. Transparency and public participation are important trends in U.S. and Mexican border governance, and these principles are fully embedded in the operations of the Commission for Environmental Cooperation, the Border Environment Cooperation Commission, the North American Development Bank, and the Border 2012 process. The Board recommends that DHS and land management agencies initiate steps to bolster public participation in their discussions, while still protecting classified information. More involvement with the public fosters more sustainable solutions that will both enhance border security and protect the environment.

Establish an office within a relevant federal agency that is dedicated to analyzing and communicating the impacts of border security on the environment. This office would conduct scientific assessments of the impacts of undocumented migrants and related smuggling and criminal activities on the environment, as well as the impacts of security activities, and take a lead role in federal strategic planning and policy making. Until the areas impacted are assessed, it is difficult for agencies to determine how to protect or rehabilitate areas. As the Border Patrol gets more technology and infrastructure to strengthen its control of the border, agencies will need more expertise in the recovery phase. This development might provide an opportunity for grants or other resources to be provided to affected federal agencies or to nongovernmental organizations that can study cross-jurisdictional problems.

For example, the U.S. Environmental Protection Agency's (EPA) Environmental Technology Council is working to identify the high-priority environmental problems whose solutions likely will depend on the availability of new technology. Given that one of EPA's strategic goals is land preservation and restoration, it would seem appropriate that the Council



Before and After: Undocumented migrants and drug smugglers have left behind thousands of tons of trash along the U.S.-Mexico border. Though much of it remains untouched, projects such as the Bureau of Land Management's Southern Arizona Project are making a difference. Project partners include other federal agencies, counties, cities, the Tohono O'odham Nation, and nonprofit organizations. (Source: U.S. Bureau of Land Management)

designate the U.S.-Mexico border region, and the potential environmental impact of security operations there, as one of its top priorities.

CHALLENGE 2

Trash and other waste left by undocumented migrants and drug smugglers in the process of crossing despoils the landscape and puts people and wildlife at risk for disease. In the process of trying to stay alive while crossing harsh landscapes, undocumented migrants and other crossers outside the law tend to leave behind everything they do not need. At pick-up locations where they obtain transportation to urban areas, crossers usually jettison everything except the clothes they are wearing. The result is trash of all descriptions, including water and food containers, backpacks, extra clothing, and even hypodermic needles. Vehicles abandoned by apprehended migrants and smugglers litter the landscape. Human waste left by the migrants, or even those patrolling the border, also is a problem.

Trash left behind by undocumented migrants remains a particularly vexing problem all along the border—on private, local, state, federal, and tribal lands. Trash removal is a major problem for the Cleveland National Forest in California, the Cabeza Prieta National Wildlife Refuge in Arizona, and the Gray Ranch in New Mexico, among others. The Tohono O'odham Nation, the Cocopah Indian Tribe, the Quechan Indian Tribe, and the Campo Band of the Kumeyaay

Indians are just a few of the tribes affected. In the Tohono O'odham Nation, for example, it has been estimated that up to 1,500 undocumented migrants dump 6 tons of trash on the reservation every day. Although the Nation successfully completed a pilot waste removal project in 2005 (see *Projects and Partnerships* section below), heavy undocumented migration through the area continues and there is no one agency or organization that is clearly responsible for removing the solid waste left behind.

The Good Neighbor Environmental Board learned firsthand about the impacts of undocumented immigration on Tohono O'odham land during a field trip following its October 2005 public meeting near Tucson, Arizona. In the small tribal border community of New Fields, Arizona, tribal elders met with Board members to explain how their daily lives are affected by both undocumented alien crossings and Border Patrol surveillance and enforcement activities.

Next Steps

Provide federal government support to tribes, private landowners, rural communities, state parks and protected areas, and federal land management agencies to address sanitation and solid waste issues associated with undocumented crossings. For sanitation concerns, the Centers for Disease Control and Prevention or state health departments should evaluate the risk of disease from exposure to human waste left by migrants. Appropri-

ate sanitation facilities should be provided for use by personnel patrolling the border, taking into consideration the need for sanitation measures compatible with deployment to remote areas. For solid waste concerns, new partnerships—or at least improved coordination—should be developed for the timely retrieval of undocumented migrant belongings left behind when they are apprehended by Border Patrol personnel. Consideration should be given to using National Guard troops deployed at the border to undertake retrieval of solid waste as part of their efforts to support Border Patrol activities. The Good Neighbor Environmental Board made a similar recommendation for support in its *Ninth Report*.

CHALLENGE 3

Impenetrable fences may present significant negative consequences to wildlife and the environment. Fences may disrupt hydrologic patterns, causing flooding and erosion. Wildlife migration routes and territories for some species may be truncated, fragmenting habitats and causing declines in regional populations of large animals such as deer, black bear, pronghorn antelope, mountain lions, and jaguar, and small animals such as snakes, lizards, turtles, and foxes. Migratory birds, as well as bird and mammal breeding behavior, will be affected by lights associated with fences in some areas. Border lighting projects associated with fencing also have been criticized for potential harm to species such as the jaguarundi and ocelot in the Lower Rio Grande Valley. A fence running along large sections of U.S.-Mexico border, with its accompanying roads, would permanently eliminate hundreds of thousands of acres of transboundary wildlife habitat.

The Border Patrol has pointed out that stepped-up border control measures have decreased undocumented migrant crossings in high-traffic areas such as San Diego, thus reducing damage to sensitive habitat from migrant foot traffic, littering, and pursuit and rescue operations. Although fences can be an effective barrier to unauthorized crossings, they also present unique challenges from an environmental standpoint.

Current proposals call for the construction of many miles of new single, double, and triple fences and related access roads on the border. Although statements from Border Patrol Chief Aguilar and Sec-

retary of Homeland Security Michael Chertoff are reassuring—that border fencing should be appropriate to each location and its particular security needs—the Board recognizes that public participation in the design and placement of the border fence and related infrastructure is essential, both for appropriate design and for local support of the projects.

One of the potentially imperiled species that would be impacted dramatically by a fence is the Sonoran desert pronghorn, a type of antelope that lives on both sides of the Arizona-Mexico border. Another species, the jaguar, recently has been sited in the U.S. border region again as a result of efforts of organizations such as the nonprofit ranching and grazing group, The Malpai Borderlands Group, to preserve open space. This group shares the concern about the impacts of fencing, saying it would disrupt the jaguar's migration north into the United States and prevent the chance to establish a viable population in the area.

Stephen Mumme, a political science professor at Colorado State University and an expert on environmental issues affecting the border, said the effect of fences on the small arroyos and mountain streams strung across the border could be devastating. "We're talking about a very fragile part of the North America continent where the percolation of just inches of water is vital for the maintenance of grasses and plants and different types of cacti. It's essential for their survival," said Mumme.

Next Steps

As a best business practice, hold a national conference on fencing/barrier technology that highlights successes to date and educates the public, with participation from private sector experts and nongovernmental organizations. As an outcome, develop recommendations for prototype fences that meet security goals while minimizing environmental damage or even improving environmental conditions. Many environmentalists presume that fences are harmful to the environment, whereas law enforcement officials may presume that more environmentally friendly barriers may provide ineffective security. By broadening multi-sector public dialogue about new technologies and alternate designs, it may be possible to develop fences and barriers that effectively meet both objectives—providing effective security and protecting the environment.

Continue to ensure that the U.S. Section of the International Boundary and Water Commission (IBWC) has the opportunity to review proposed border security infrastructure prior to construction to provide advice on ways to minimize negative transboundary impacts, such as erosion or flooding. By treaty, the Commission must ensure that projects along the Rio Grande and Colorado River boundary segments do not cause obstruction or deflection of the flows of these rivers. To minimize problems on the land boundary, the U.S. Section also reviews infrastructure plans to address stormwater issues and ensure that U.S. infrastructure is built entirely in the United States and does not interfere with the Commission's boundary demarcation responsibilities.



Proposed extensive new fencing along the U.S.-Mexico border could affect dramatically the Sonoran desert pronghorn antelope, which lives on both sides of the border. (Source: <http://www.midwestwilderness.com>)

CHALLENGE 4

Lack of collaboration across agencies with responsibility for border security, land management, and environmental protection tends to lessen the likelihood of win-win scenarios for both security and the environment. Although granting exemptions from environmental laws such as NEPA is not a surprising decision when national security is at stake, a better understanding of the environmental impacts of moving forward with particular security measures would better position policy makers to prevent or mitigate potential environmental damage.

In addition, despite efforts to strengthen support for both security work and environmental work, both types of activities continue to face staffing and funding shortages, which results in individual agencies diverting limited resources to urgent border security matters. Border Patrol operations on protected land potentially can conflict with the preservation mission of land management agencies such as the U.S. Department of the Interior's (DOI) USFWS, BLM, and NPS, and the U.S. Department of Agriculture's (USDA) USFS.

Land management agencies continue to lack sufficient resources to carry out their missions, a problem that is being compounded because they increasingly must devote large portions of their human and monetary resources to border security-related work on their lands. The Good Neighbor Environmental Board also identified this concern in its *Ninth Report*, noting that managers suffer from a lack of patrol officers to oversee public lands.

Next Steps

An interagency Task Force comprised of DHS, DOI, and USDA should be established that includes their respective law enforcement components; this Task Force then could develop strategic plans and establish mutual goals regarding law enforcement changes that would affect federal lands, including sensitivity to environmental impacts. This recommendation is an outcome of the General Accounting Office report of June 2004, *Border Security: Agencies Need to Better Coordinate Their Strategies and Operations on Federal Land*. Among the outcomes was a recommendation that federal agencies such as EPA and specific environmental programs such as Border 2012 take a lead role in promoting closer communication with security agencies, including DHS. To reduce any existing mistrust, if possible, they should build from existing successful cross-agency initiatives. (Note that during 2006, steps were taken to add a representative from DHS to the federal agency component of the Good Neighbor Environmental Board.)

In its *Ninth Report*, the Board also described the potential conflicting priorities across land management agencies and border security agencies. Officials concerned with resource preservation and those tasked with providing border security have different missions and responsibilities.

The federal government should identify communications gaps and place liaison personnel in the border states who facilitate communication among security, environmental, and border land management agencies. These liaison staff members should work closely with Border Patrol public liaison officers, especially in areas such as cross-agency conflict resolution. One example would be to enable U.S. and Mexican land management officials, such as those from the NPS, to easily cross the border at remote locations that are far from official ports of entry. This flexibility would enable managers of protected areas, such as the Big Bend National Park, to continue their valuable binational partnership projects for environmental protection on public lands in the United States and Mexico.



Installation of security fencing without regard for environmental factors such as stormwater runoff may produce accelerated erosion and resulting instability. (Source: International Boundary and Water Commission)

Projects and Partnerships

U.S./Mexico Critical Infrastructure Protection (CIP) Framework is a cooperative, bilateral effort to assess and enhance critical cross-border resources and infrastructures. The Bilateral CIP Steering Committee, co-chaired by DHS, representing the Government of the United States, and the Secretariat of Governance, representing the Government of Mexico, guides the U.S.-Mexico CIP efforts. The CIP includes working groups for Energy, Transportation, Telecommunications, Water/Dams, and Public Health/Agriculture. The Water/Dams Working Group, led by the U.S. Section of the IBWC and Mexico's Secretariat of Foreign Relations, identified critical infrastructure and resources with transborder implications, such as the Falcon and Amistad International Dams along the Rio Grande and potable water supplies and sanitation systems. The working group developed a program to implement measures to reduce vulnerabilities in priority order. The U.S. Section of the IBWC already has implemented some of the recommendations using existing agency funds, and will implement other priority recommendations as additional funding becomes available.

USDA Douglas-Agua Prieta stormwater partnership, involving the Border Patrol and numerous other agencies, was created to reduce erosion and flooding. A major focus is to control stormwater runoff, which contributes significantly to frequent flooding in Agua Prieta, Mexico. This binational watershed poses a particular challenge for stormwater manage-

ment because of its steep slopes, little herbaceous ground cover to slow down stormwater flows, and soils that do not absorb or hold moisture. Numerous agencies on both sides of the border participated in a binational workgroup that developed solutions to slow down stormwater runoff and improve watershed health through rangeland management and vegetation treatment. The Border Patrol supported the effort by working to reduce erosion along international boundary fences.

Memorandum of Understanding (MOU) to facilitate security and minimize environmental damage on federal borderlands is a multi-agency agreement that ensures CBP access to public lands, including the right to install tactical infrastructure and allowing all necessary actions to protect officer safety and respond to emergencies. At the same time, it encourages protection of natural, cultural, and wilderness resources through cooperation between CBP and federal land managers. For example, the MOU calls for parties to work together to identify methods, routes, and locations for Border Patrol operations that minimize impacts. CBP will request access to federal lands not previously designated for off-road use. Moreover, any off-road use in these areas should minimize impacts on threatened or endangered species and the resources and values of the federal lands. Other MOU provisions include environmental and cultural awareness training for Border Patrol agents and the development of maps that identify specific wildlife and environmentally or culturally sensitive areas.

Colorado River invasive salt cedar removal project is a multi-agency effort that addresses concerns about invasive species, with the added benefit of increasing visibility for border security work. During 2006, the Borderlands Management Task Force (BMTF) in Yuma, Arizona, undertook the Colorado River corridor salt cedar treatment and removal project, which includes local, state, federal, and tribal agencies: DHS Border Patrol, U.S. Army Corps of Engineers, BLM, Bureau of Reclamation, the Cocopah Nation, USFWS, the Yuma Proving Grounds, Arizona Game and Fish, and Yuma County Sheriff's Office. The short-term goal is to thin or remove salt cedar vegetation in a few select locations so that law enforcement officers and emergency personnel can work along the border. In the long-term, the multi-agency plan is to deal with 24 miles of dense vegetation. The work will consist of removing and thinning the salt cedar and also restoring cottonwood-mesquite-willow, which is native vegetation. This project is being carried out under BMTF's mission to facilitate an intergovernmental forum for cooperative problem solving on common issues related to the Arizona-Mexico border.

BLM's Southern Arizona Project, in partnership with federal agencies, tribes, and others, is cleaning up waste from undocumented border crossers. Since 2003, the Southern Arizona Project has provided \$3.4 million to clean up waste left by undocumented migrants and smugglers. The project partners also have rehabilitated roads and trails, protected sensitive riparian and threatened and endangered plant areas, placed barriers and barricades to prevent further dumping, and restored or protected native areas and watersheds from further degradation.

Examples of such work can be seen in projects conducted by the Cocopah Indian Tribe and the Tohono O'odham Nation. The Cocopah Tribe is working on a 60-acre restoration project, funded by the State of Arizona, with the goal of restoring the river watershed and removing invasive species, like salt cedar, that, in turn, will assist enforcement officers and emergency personnel who work along the border. The Tohono O'odham Nation, with funding from BLM and EPA, has identified 84 dump sites, conducted

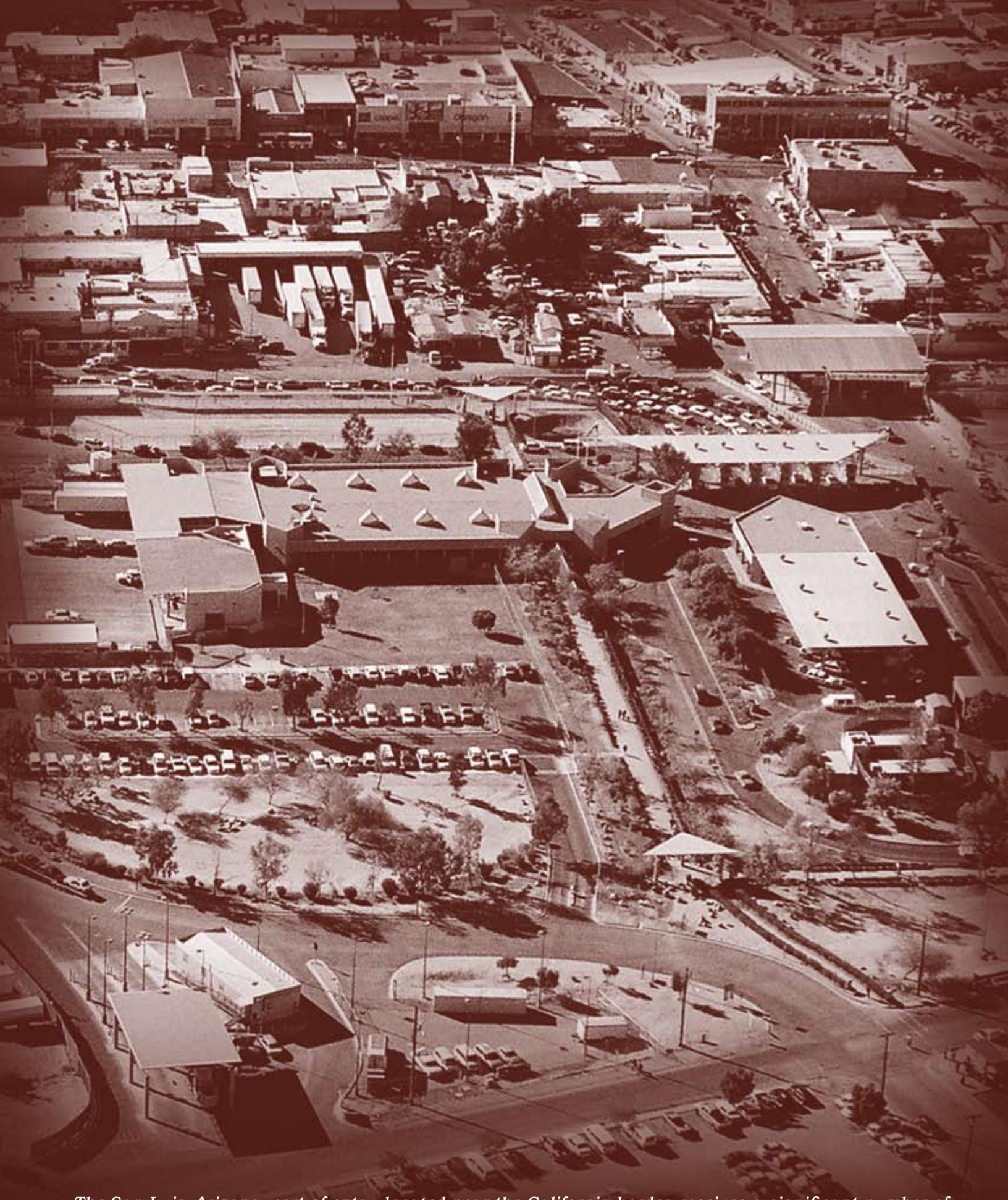
134 cleanups, collected more than 62 tons of waste and 1,260 bicycles, and identified recycling markets for the waste with the ultimate goal of program sustainability.

Two similar projects are scheduled for implementation. In the first, the Tohono O'odham Nation will expand efforts for abandoned vehicle removal and recycling; its Abandoned Vehicle Removal Project will inventory (via GPS) and remove 220 vehicles, which will be implemented by the Nation's Solid Waste Management Program. The project also will include the Border Patrol Aerial surveying team and the Tohono O'odham Police Department Rangers Program.

The second is an innovative project launched by the Arizona Department of Environmental Quality (ADEQ) to conduct cleanups on tribal lands in each of the four border counties, while developing partnerships among entities that can collaborate for cleanups in a long-term sustainable manner. Funded by an EPA Border 2012 grant, ADEQ will explore establishment of a public/private stakeholder organization to inventory resources and develop a sustainable cleanup strategy for Arizona's border region. This project is being integrated with the Tohono O'odham Nation's project for removal of abandoned vehicles and solid waste.

Ewiaapaayp Tribe agreement with the Border Patrol allows the Border Patrol access to the reservation. The Border Patrol has keys for the single locked access gate leading into and out of the reservation.

Tohono O'odham Nation partnership with DHS has permitted the construction of two Law Enforcement Centers (LEC) on Tohono O'odham Nation lands. The LEC facilities house DHS, CBP, the Tohono O'odham Nation Police Department, and, most recently, National Guard personnel. The facilities are located in the Chukut Kuk District of the Tohono O'odham Nation and have been operational since September 2004. Each facility has office space, sleeping quarters for Border Patrol Agents, a processing center, and temporary holding cells for apprehension of undocumented migrants. The facilities process up to 300 undocumented migrants a day.



The San Luis, Arizona, port of entry, located near the California border, receives a significant number of hazardous waste shipments. (Source: U.S. Customs and Border Protection)

Section 3

Hazardous Materials Crossings

To provide safety and security at ports of entry and beyond, as well as environmental protection from risks associated with the transborder flow of hazardous materials, the Board recommends:

At ports of entry, increase the number of hazmat inspectors and establish specific sites and hours for hazmat vehicles. Duplicate successful approaches, including use of appropriate technology. Increase co-operation between environmental agencies and security agencies through approaches that reflect site-specific language and staffing requirements.

Beyond ports of entry, resolve liability issues for cross-border emergency responders and provide targeted support that reflects the needs of border communities within the larger national strategic plan. Document and share best emergency response practices. In addition, increase dialogue with tribal entities about hazardous materials transported near and through tribal lands, and increase tribal participation in training exercises.



One theme that emerges from the *Undocumented Human Crossings* section of this report is that border security agencies and environmental protection agencies have different core missions when it comes to preventing undocumented migrant crossings (border security) and protecting fragile ecosystems (environmental protection).

By contrast, in this section—*Hazardous Materials Crossings*—border security work and environmental protection efforts often appear to dovetail. Proper handling of hazardous materials being transported in commercial vehicles near and at official ports of entry is mission-relevant to both types of agencies. Although border security officials are focused on accurate materials identification and the potential terrorist threat should the materials get into the wrong hands, they share with environmental officials the concern about potential risk to human health and the environment through accidental releases or explosions.

Hazardous materials are an essential element of modern industrialized society. Chemicals of all types are used in the manufacturing of goods ranging from cell phones and computers to cars and clothes. Many



Increasing sophisticated technology is being applied to scan incoming cargo for unauthorized contents. Shown are: (1) a truck passing through a gamma ray scanner at Otay Mesa port of entry in San Diego (Source: Paul Ganster, San Diego State University); and (2) a radiographic image showing stolen vehicles that has been installed in a port of entry office (Source: SAIC).

of these chemicals, and some of the goods produced from their use, are classified as hazardous materials, a term used for substances ranging from the most dangerous and lethal chemical compounds to rela-

tively benign products such as paint. To protect the public and the environment, the federal government administers an extensive set of laws and regulations to ensure safe handling of hazardous materials, including delegation to state agencies to enforce compliance. (See the Board's *Fifth Report*, which examines hazardous materials more generically. In this *Tenth Report*, by contrast, the specific focus is on hazardous materials crossings in light of border security.)

Hazardous Materials and Hazardous Waste Definitions

HAZARDOUS MATERIALS are materials designated by the Secretary of the U.S. Department of Transportation (DOT) as posing an unreasonable threat to the public and the environment, whose transportation is regulated by DOT. These include explosives, gases, flammable solids, flammable liquids, oxidizing substances and organic peroxides, poisonous (toxic) and infectious substances, radioactive materials, corrosives, and miscellaneous dangerous goods; among the latter are hazardous wastes (Title 49 of the Code of Federal Regulations [49 CFR 172.101]).

HAZARDOUS WASTES are wastes—either byproducts of manufacturing processes or simply discarded commercial products such as cleaning fluids or pesticides—that are potentially damaging to the environment and harmful to humans and other living organisms. They exhibit hazardous characteristics (ignitability, corrosiveness, reactivity, or toxicity) or are in one of four U.S. Environmental Protection Agency (EPA) lists (F, K, U, or P) (see 40 CFR Part 261 Subpart C). Hazardous wastes sometimes are produced by the release of a hazardous material, making them regulated at that time by EPA or a delegated EPA authority.

Pipelines account for the movement of enormous quantities of hazardous materials across the U.S.-Mexico border and include natural gas, petroleum, and petroleum products. The total amount of transborder natural gas transmission is expected to increase significantly in future years, with the completion of new projects in the Tamaulipas region and a large liquified natural gas degassification facility near Ensenada, Baja California. As mentioned in the *Introduction* section, however, pipeline transmission of hazardous materials falls outside the scope of this report.

The U.S.-Mexico border region, as elsewhere throughout the nation, must deal with the appropriate management of hazardous materials on a daily basis. Several special factors, however, come into play along the border:

- ◆ The use of hazardous materials by manufacturing plants (*maquiladoras*) on the Mexican side of the border. Many of these plants import hazardous materials from the United States for use in their production processes. To ensure proper disposal after use, the Unit-

ed States agreed to accept hazardous waste from *maquilas* under Annex III of the 1983 La Paz Agreement.

- ◆ Prior to shipment to Mexican plants, warehouses in border cities and further inland store large amounts of hazardous materials, which sometimes are abandoned, with potential leakage or releases that may endanger public health and safety.
- ◆ Hazardous materials incidents on one side of the border can endanger the environment and public health on the other side. Thus, it is in the best interest of the two nations, working with appropriate tribal governments, to cooperate in responding to such emergencies. Emergency personnel and equipment generally must pass through border crossings to reach incident sites, requiring governments to have elaborate agreements and protocols in place so that emergency responders can move without delay.

Institutional Responsibility

On the U.S. side of the border, responsibility for managing hazardous materials and hazardous wastes is shared by multiple government agencies at varying levels. DOT regulates the safe and secure transportation of hazardous materials and wastes in interstate, intrastate, and foreign commerce. DOT administers regulations specifying appropriate packaging and handling requirements for hazardous materials and requires shippers to communicate the material's hazards through use of shipping papers, package marking and labeling, vehicle placards, and material-specific emergency response information. DOT also regulates training requirements for persons who prepare hazardous materials for shipment or who transport hazardous materials in commerce (<http://www.dot.gov>). Hazardous material shipments originating in Mexico and transported across the border into the United States must conform to all applicable DOT regulatory requirements.

EPA has the federal lead for hazardous waste management, with other federal, state, and local agencies playing critical roles. Mexican hazardous waste generators that send their waste to the United States for treatment and disposal must comply with EPA manifest regulations as well as with relevant state regulations.

In addition, within the Department of Homeland Security (DHS), U.S. Customs and Border Protection (CBP) enforces compliance with U.S. trade regulations (<http://www.cbp.gov>). At the state level, various agencies have delegated authority from EPA to manage transboundary movement of hazardous waste when waste is being transported through, or being sent to, their state for final treatment or disposal. In some U.S. border communities, local governmental agencies also have a direct role, as with San Diego County, which inspects trucks at ports of entry.

On the Mexican side of the border, the federal Secretariat of Environment and Natural Resources (*Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales*, SEMARNAT) has primary oversight for managing hazardous materials and, like EPA, is supported by a number of federal and state agencies with specific roles; for example, Protección Civil is responsible for emergency response, including hazardous materials.

Border Crossings

Each year, millions of commercial vehicles and trains enter the United States from Mexico transporting materials of all descriptions, including hazardous materials. According to EPA commodity flow studies, petroleum, petroleum products, and natural gas account for most of these hazardous materials. A subset of these hazardous materials is hazardous waste. The Border Compliance Assistance Center estimates that 43.3 million pounds of hazardous waste are imported into the United States from Mexico each year.

Although the percentage of hazardous waste imported is relatively small, concerns remain about ensuring its proper disposal and the ramifications of not doing so. Unfortunately, HAZTRAKS, a database developed by EPA to track hazardous waste entering the United States, is no longer available; therefore, comprehensive, up-to-date statistics are not easily accessible. Specific statistics, however, provide insight: for a recent 12-month period, approximately 11,900 tons—about 70 percent of all hazardous waste entering the United States from Mexico—came through the Otay Mesa port of entry, ultimately going to 12 states for final disposal, including Minnesota, Pennsylvania, and South Carolina. Other data show that in 2005, of the hazardous waste imported to Texas facilities from Mexico, more than 50 percent,

or 5,700 tons, was refinery waste. Much of the rest was hazardous because it was flammable or contained heavy metals or spent solvents.

As the Board pointed out in its *Ninth Report*, there are approximately 50 U.S-Mexico border crossings. Fewer than 15 of these crossings accept trucks and trains carrying hazardous materials. Significant differences exist among these ports of entry, which range from the small facility at Naco, Arizona, with limited hazardous materials crossing, to the mega-ports at Otay Mesa, California, and Laredo, Texas.

Most, but not all, ports of entry are full service in the sense that they process both commercial and private vehicles as well as pedestrians. At several highly urban centers such as San Diego, Laredo, and Brownsville, crossings are managed as systems, and commercial traffic is routed to a single port of entry where U.S. inspection agencies can concentrate their efforts and resources. This approach also diverts trucks carrying hazardous materials or hazardous waste from highly populated areas.

Rail transportation also plays a major role in hazardous materials border transport. In some locations, trains have their own crossings; in many others, the rail line is co-located with a larger port. Once rail cars with hazardous materials cross the border, they often pass through urban areas. For example, in Nogales, Arizona, a large number of sulfuric acid tanker cars destined for mining operations move through the heart of the city almost daily.

U.S. tribes and small communities have expressed concern about hazardous materials passing through their lands and communities. Often, the content of the trucks/rail cars is not known to local authorities, and these areas often lack adequate emergency response capabilities, training, and equipment.

U.S. Entry System for Commercial Vehicles

Pre-entry Paperwork. As noted previously, CBP is the federal agency that first interacts with commercial vehicles entering the United States. At all ports of entry, shippers must prefile their documentation with CBP 24-72 hours prior to their cargo arriving at the border, depending on the system in place at each port of entry. Documents must include a Customs manifest and an EPA Uniform Hazardous Waste Manifest. Prefiling procedures allow CBP to review documents, commodity analysis, and arrival/information scheduling. Shipments arriving without

required prefiled packets are refused entry and returned to Mexico. As mentioned earlier, all vehicles or rail cars entering the United States from Mexico with hazardous materials must comply with appropriate DOT rules and regulations.

Primary Inspection. Because the sheer volume of commerce makes it impossible for CBP to conduct a thorough physical inspection of each truck, rail car, and container entering the United States, it performs a primary inspection on all cargo, during which it reviews documentation and decides whether the shipment should be referred to secondary inspection.

Secondary Inspection. CBP has developed procedures and technologies to assist in facilitating legitimate trade, identifying low-risk shipments, and focusing inspection activities on trucks and containers that could pose a higher threat to the United States. Nonintrusive inspection procedures using X-rays or gamma rays can quickly reveal the contents of a truck or rail car, allowing CBP officials to search vehicles/containers without danger to themselves or the environment. If necessary, CBP can refer a truck or rail car for additional inspection to other local or state agencies with special hazardous materials expertise. Additional federal agencies can inspect the vehicle as well, such as the U.S. Department of Agriculture or the Drug Enforcement Administration. Vehicles exit secondary inspection after a final document review and release by a CBP officer.

Border crossings that receive trucks and rail cars with hazardous materials are equipped with special facilities to deal with leaks and spills; these vary, depending on the port of entry. In many cases, a major release of a dangerous chemical would oblige CBP officers to obtain assistance from other entities with specialized training and equipment, such as local fire departments or state environmental agencies.

Federal and State Safety Inspection. Depending on the state and port of entry, there may be additional safety inspection of trucks, either at the port of entry, facilities adjacent to the port of entry, or at some distance from the border crossing. Federal inspectors are from DOT's Federal Motor Carrier Safety Administration; state inspectors are from delegated state agencies. The Federal Railroad Administration conducts safety inspections of rail cars.

Mexican Transporters. Mexican carriers authorized by DOT usually deliver hazardous material cargo to a U.S. warehouse in the border zone, where cargo is transferred to a U.S. carrier. As of August

10, 2006, Mexican hazmat drivers must be enrolled in the Free and Secure Trade (FAST) program and precleared with background checks to engage in transport into the United States. The FAST program expedites border processing of low-risk participants and enables CBP to focus on high or unknown risk commerce.

Differences Among U.S. Border State Entry Systems

The four U.S. border states—California, Arizona, New Mexico, and Texas—have differing procedures at their ports of entry. Some brief descriptions follow.

California has enacted such stringent environmental regulations at ports of entry that some shippers reportedly divert their trucks importing hazardous materials to the San Luis, Arizona, border crossing. Only California has local and state inspectors working alongside federal Customs inspectors at ports of entry; in Arizona, New Mexico, and Texas, CBP hazardous materials inspectors work independently, although they can call upon state agencies for support. Three of California's border crossings process hazardous materials and use local and/or state inspectors: Otay Mesa in San Diego County, Calexico East in Imperial County, and Tecate. Otay Mesa and Calexico allow import/export of hazardous materials, whereas Tecate is export only. The Otay Mesa port of entry schedules hazardous waste/materials imports from Mexico 3 days a week.

Export of hazardous materials occurs at Otay Mesa and Tecate ports of entry, with no set schedule either by CBP or its counterpart, Aduana México. San Diego County Hazardous Materials Division (HMD) performs random truck inspections to identify illegal export of hazardous wastes to Mexico. In San Diego County, a hazardous materials/waste incident on the U.S. side of the port of entry results in CBP notifying the local fire department or San Diego County HMD, with the County Hazardous Incident Response Team notified via normal dispatch procedures.

In Arizona, hazardous materials may pass through all border crossings with no restrictions on hours of operation. CBP calls on local or state emergency responders, as needed. Inspectors may isolate a truck if a problem is detected during inspection, such as a dangerous chemical leak.

The large commercial facility at Nogales/Mariposa has the most extensive containment area;

facilities at other ports are more modest. The San Luis port of entry, located near the California border, receives the most significant number of hazardous waste shipments with many of the loads originating in Baja California. As mentioned previously, reports indicate that shippers opt to pass through this Arizona port to avoid the strict inspections at the California ports.

Environmental agencies have a limited presence at Arizona ports of entry: they perform periodic spot checks but do not have the resources to cover all of the ports all of the time. With no restriction on hours for hazardous materials, an environmental inspector can spend all day at a port and inspect only a few trucks. The Arizona Department of Environmental Quality (ADEQ) would like to increase resources to cover the border more fully, and EPA has provided some assistance. Although ADEQ continues to seek additional support for border inspections of hazardous waste shipments, available EPA resources will be redirected to strengthen the current ADEQ presence at the Mexican ports of entry. ADEQ and EPA are continuing to work with CBP officials at the San Luis and Nogales ports of entry to explore the possibility of restricting hours of operations for trucks with hazardous materials, as is done in California. Such restrictive hours would significantly enhance the effectiveness of the limited resources available for environmental inspections on the Arizona-Mexico border.

In Texas, procedures are similar to those in Arizona, but Texas investigators/emergency responders are utilized by CBP on an as-needed basis and do not typically perform joint inspections with CBP at the port of entry.

Beyond Border Crossings

Tracking and Enforcement

Tracking hazardous materials from origin to final destination and eventual disposal is a multi-agency effort. EPA is the U.S. agency with primary responsibility for this process. EPA works closely with CBP on tracking imports from Mexico (the U.S. Bureau of Census is responsible for exports). For example, EPA Region 6 has collaborated with CBP and local, county, and state partners to conduct commodity

flow surveys that provide a snapshot of the types of hazardous materials that cross the border at a given port of entry.

One tracking mechanism available to federal agencies with responsibilities in this area is via the domestic requirement for submissions of hazardous waste manifests. Waste exports are monitored through the paper system of the Uniform Hazardous Waste Manifest, which became effective September 5, 2006. EPA's export notice and consent regulations and procedures also provide information (waste transported for recycling is exempted). Another source of tracking information is provided by DOT's Bureau of Transportation Statistics, which maintains databases on traffic flow of people and goods across national borders. (As mentioned earlier, hazardous waste imports formerly were tracked through EPA's HAZTRAKS database, but the database was discontinued in 2003.) Enforcement of hazardous waste shipments is the responsibility of EPA which, in turn, delegates roles to U.S. states and local agencies.

In Mexico, the Hazardous Waste Regulation requires cradle-to-grave documentation and disposal, just as the Resource Conservation and Recovery Act does in the United States. SEMARNAT uses a system developed by the Mexican National Ecological Institute (Instituto Nacional de Ecología) called SIRREP (Sistema de Rastreo de Residuos Peligrosos) to monitor hazardous waste exports to the United States.

Because no system currently exists to provide real-time tracking for hazardous materials in the binational border zone, U.S. and Mexican authorities are unaware of hazardous materials in trailers or warehouses 50 yards on the other side of the border; therefore, regulators and first responders of both nations often are forced to deal with border zone incidents with incomplete information. Radio Frequency Identification (RFID) is one example of a promising technology to help address this information gap (see *Projects and Partnerships* section below).

Risk and Emergencies

At any time of day, border communities through which hazardous materials are transported may be at risk. An accidental or deliberate release of a hazardous material, such as ammonia gas from a commercial tanker, sulfuric acid from a derailed train car, or a butane tanker truck fire or explosion, can pose great dangers to border residents. A hazardous

materials incident can begin at the point of manufacture, during transportation, or at ports of entry. The two incidents described below highlight the need for cross-border emergency preparedness.

In the first incident, a U.S. citizen crossing from Mexico at the San Ysidro port of entry was taken into the secondary CBP inspection compound, transporting 20 bags of mortar for tile work. One of the bags, which actually contained red phosphorus, was opened and a sample taken that then ignited and caught the rest of the load on fire. This fire closed the port of entry for 2 days, and several CBP employees exhibited respiratory distress symptoms from the acid fumes. The incident required response actions from both the San Diego County and City emergency response teams.

In the second incident, a butane tanker truck/train collision near Matamoros, Mexico, caused an explosion, resulting in 6 deaths and 30 injuries and affecting at least 35 businesses and homes. Mexican authorities as well as the Fire Departments of both Brownsville and Harlingen, Texas, responded to the incident.



Cross-border emergency preparedness dates from Annex II of the La Paz Agreement, which established the binational Joint Response Team (JRT, or Team) and the development of the U.S.-Mexico Joint Contingency Plan for Preparedness for and Response to Environmental Emergencies in the Inland Border Area (JCP). JRT is co-chaired by EPA and SEMARNAT; the latter through its Federal Attorney General for Environmental Protection (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA), and its General Coordinator of Civil Protection of the Interior Ministry (Secretaría de Gobernación, SEGOB). The Team includes federal, state, and local representatives of both countries and U.S. tribal representatives responsible for emergency prevention, preparedness, and response in the border area.

The JCP was created to establish cooperative measures for the Team, including emergency response planning, exercises, and training, for preparing and responding to oil and hazardous substance incidents along the border. It has provided the basis for 14 Sister City Binational Emergency Response Plans developed over the last few years. During 2006, the Plan was revised through the Border 2012 Emergency Preparedness and Response Border-Wide

Workgroup (BWWG) to incorporate: (1) “all hazards,” such as radiological, biological, and nuclear explosions; (2) recent changes made to the National Response Plan; and (3) additional stakeholders, such as DHS and border tribal nations.

One example of the binational collaboration that has resulted from the initiative is the Del Rio, Texas/Ciudad Acuña, Coahuila, Binational Hazardous Material Mutual Aid Agreement. The Agreement calls for the two sister cities (pairs of U.S. and Mexican cities located across the U.S.-Mexico border from one another) to determine their areas of common concern, assess collective resources, and conduct a binational exercise every 2 years. Moreover, in the event of an emergency release, the Agreement sets forth binational notification and response procedures, including how to request assistance from the States of Texas and Coahuila. In addition, if required, the JCP can be activated, with assistance provided by EPA and/or PROFEPA and SEGOB.

DOT also plays a role in cross-border emergency preparedness. Every 4 years, DOT's Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) and its Canadian and Mexican partners update their Emergency Response Guidebook for first responders. The Guidebook prescribes initial actions to be taken in the critical first minutes after an incident to protect the public and mitigate potential consequences. It is published in several languages, including Spanish, French, and English.

PHMSA also operates a planning and training grants program to assist local responders at hazardous materials incidents. The Emergency Prepared-



Emergency response planning, exercises, and training for responders on both sides of the U.S.-Mexico border will enable border communities to be better prepared. (Source: San Diego County Department of Environmental Health)

ness Grants program provides assistance to states, territories, and Indian tribes and, through them, to local communities. Some of the grants have been awarded to agencies in the border region, as well as to border tribes including the Campo Band of Mission Indians and the Cocopah Indian Tribe. Since 2001, an annual grant of \$160,000 has been awarded to Arizona's Inter Tribal Council, and the State of Arizona received \$183,238.

U.S.-Mexico Border 2012 Program

The U.S.-Mexico Border 2012 Program, mentioned earlier in this report, is a 10-year, binational environmental program for the U.S.-Mexico border region (<http://www.epa.gov/usmexicoborder/>). It is the latest planning effort to be implemented under the La Paz Agreement and succeeds Border XXI, a 5-year program that ended in 2000.

Goal 5 of Border 2012 is to: Reduce Exposure to Chemicals as a Result of Accidental Chemical Releases and/or Acts of Terrorism. The Border 2012 Emergency Preparedness and Response BWWG was created to coordinate discussions and implement this goal. The Workgroup is co-chaired by EPA's Office of Emergency Management and Mexico's PROFEPA, and its partners include other U.S. and Mexican federal, state, and local agencies, as well as U.S. border tribes responsible for emergency prevention, preparedness, and response in the border area. The BWWG essentially functions as the JRT steering committee (see *Risk and Emergencies* section above).

Two of the three Goal 5 objectives to protect the public have been achieved. First, a chemical emergency advisory/notification mechanism between Mexico and the United States has been established. Second, joint contingency plans for 14 pairs of sister cities are in place and operating, with the establishment of binational committees for chemical emergency prevention. Sister city joint contingency plans now are being supplemented with preparedness and prevention-related efforts, such as consequence analysis, risk reduction, and counter-terrorism.

The Workgroup also has revised the all-hazards emergency notification system between Mexico and the United States and updated contact information through the sister city plans. The new notification system is in place and has been tested. It currently is included in the JCP, and the goal is to eventually incorporate it into all sister city plans.

Another example of binational emergency preparedness cooperation under Border 2012 is its Arizona/Sonora Task Force, chaired by Sonora Civil Protection and the Arizona Department of Homeland Security. Made up of representatives from fire, police, health, emergency managers, environmental agencies, and customs from the United States and Mexico, the group developed the region's four sister city plans, conducted training in exercise design and first-responder awareness, and executed a full-scale binational simulation exercise. A priority for the Arizona/Sonora Task Force is to increase collaboration with other border stakeholders, particularly the Tohono O'odham Nation and the Arizona/Mexico Commission.

In addition to the statewide group, a local planning committee for Nogales, Arizona, and Nogales, Sonora, was established in late 2005 and is co-chaired by the Mexican and U.S. Consuls. The committee updated its joint contingency plan, signed April 25, 2006, at Lane 7 of the Nogales border crossing by the mayors of both cities as well as Arizona and Sonora state officials. The plan includes all-hazards response, updated notification procedures, and a commitment to cross-border response.

Tribal Preparedness

A number of Native American tribes have reservations adjacent to or near the Mexican border, and in some cases, tribal lands lie on both sides of the international boundary. Tribes, as with other communities, plan for emergencies. They often do so, however, while also contending with funding barriers and a lack of information about hazardous materials traveling through or along tribal boundaries. This lack of resources and information can compromise their ability to be adequately prepared.

Some border tribes have security and technical personnel who work closely with federal, state, and local authorities. In California, for example, some of the tribes in San Diego County, such as Pala, Campo, La Posta, Cuyapaipe, and Manzanita, are part of a Joint Powers Authority which, in turn, uses the San Diego Department of Environmental Health and San Diego Fire Department's Hazardous Incident Response Team to assist with hazardous materials incidents on their lands. Several border tribes in California have created fire departments to respond to emergencies, and many are part of local Commu-

nity Emergency Response Teams and/or have their own Tribal Emergency Response Teams. Tribes also participate in trainings covering the National Incident Management System and Crisis and Risk Assessments, and several tribes have approved pre-disaster migration plans in place.

Representatives of border tribes also participate in preparedness activities as members of three Border 2012 Binational Emergency Preparedness Task Forces. These task forces are coordinated by the EPA Region 9 office, which covers Arizona and California. As an example, an emergency preparedness exercise was conducted during the week of September 18, 2006. EPA coordinated the exercise at the request of the Mexican government on behalf PROFEPA and the Kickapoo Traditional Tribe of Texas. The scenario involved a tank car of fuming sulfuric acid and a passenger vehicle containing dangerous materials being transported from Mexico that would spill and potentially affect all three nations.

Challenges and Next Steps

Although both environmental and security officials are focused on the safe transportation of hazardous materials at ports of entry and beyond and plan for emergency response in the event of a release, they do not always have the opportunity to leverage their efforts. In addition, groups such as tribes and surrounding communities may not be included fully in strategic planning, communications, or resource allocation decisions. Analysis of these and other issues follows, along with recommended actions.

CHALLENGE 1

Ports of entry lack staff to inspect all shipments of hazardous materials, including hazardous waste, and some local emergency responders have inadequate training. Environmental agencies also lack hazmat tracking data as well as more general chemical storage data. Although CBP prescreens shipments before leaving 32 foreign ports, it does not do so at land ports in Mexico. Only a few CBP inspectors at any port are trained as hazmat inspectors. In the event of a release or a problem with a load (an unidentified material found in a shipment, for example), CBP relies on state or local responders. In addition, despite JCP

efforts to conduct exercises with sister cities, local Mexican emergency responders (Protección Civil) often are not adequately trained to respond and are poorly equipped. Many emergency response exercises do not actually involve a response to an event in Mexico, instead simulating a spill or release on the U.S. side; a customary practice is to call U.S. emergency responders for assistance if there is an actual chemical spill or release. Finally, information about the amount and type of hazardous materials, including radiological and pathological, transported through or near the border at any given time is limited and consequently compounds emergency response and transboundary enforcement of hazardous materials regulations. Other than the paper manifest system, there has not been a transboundary system for tracking hazardous waste since support for the HAZTRAKS database ceased.

Next Steps

Increase the number of hazmat inspectors at ports of entry. Inspectors could come from any federal, state, tribal, or local agency. Inspectors are needed who can inspect hazardous waste and materials at every border port that accepts hazardous materials during designated hours.

DHS should provide additional support for Mexican counterparts, especially Protección Civil and local Mexican fire departments. In addition, the U.S. federal government should consider funding positions for local/state officials at U.S. border ports of entry for inspections and emergency response. It also should support local U.S. efforts to train Mexican first responders and provide needed emergency response equipment. Funding also should be made available for frequent joint training exercises on both sides of the border.

Establish specific ports of entry sites/hours for hazmat vehicle use. The designated ports of entry would have trained personnel and current hazmat technology to screen vehicles and conduct inspections. U.S. inspectors could certify the load and seal the cargo and would have the option of opening seals and confirming hazmat documentation.

Best practices, such as San Diego County's hazmat inspection program or the City of Laredo's warehouse ordinance, need to be shared with other communities. These programs likely will need to be financed through some kind of local fee for



Ports of entry linking Mexico and the United States began as modest crossings. Shown is the San Ysidro, California, port of entry in the 1930s. Currently, the same crossing consists of 24 lanes and is estimated to provide a crossing point for 17.4 million passenger vehicles into the United States each year—see the Board's Ninth Report. (Source: El Paso Border Patrol Museum)

implementation in other communities. Information from state and local programs needs to be shared.

New Electronic Manifest. EPA is proposing that an electronic manifest (e-Manifest) system be put into place in the next 3 or 4 years. Once implemented, hazardous waste shipment data will be transmitted electronically and instantly. The goal is for this electronic manifest to be compatible with any similar system in Mexico.

Radio Frequency Identification (RFID). To complement e-Manifest, which does not track hazardous waste beyond the border, EPA currently is piloting the RFID system to track hazardous waste shipments from their point of origin to the receiving facility (cradle to grave) and is proposing implementation of this technology in collaboration with Mexico if field testing is successful (see *Projects and Partnerships* section below).

Automated Commercial Environment (ACE) system and International Trade Data System (ITDS).

Accelerate EPA's involvement in U.S. Customs' ACE system and the multi-agency ITDS (see *Projects and Partnerships* section below).

CHALLENGE 2

Emergency responders are not able to easily cross the border to respond to incidents because of insurance, liability, national sovereignty, and command issues, and customs and border procedures may delay response. When an incident occurs in Mexico near the border and U.S. and tribal emergency response is requested, emergency responders from the United States and U.S. tribes often find it difficult to provide assistance because of insurance/liability concerns. Mexican federal officials can be reluctant to sanction the assistance, and incident command issues can hinder adequate responses. In addition, CBP often is concerned about allowing response equipment and personnel back into the United States after an incident has occurred. In a similar fashion, it can be difficult for Mexican emergency responders to enter the United States, although the Border Fire Council (see *Projects and Partnerships* section below) has developed procedures to allow Mexican fire fighters to respond. At the February 2006 U.S.-Mexico Inland JRT Meeting in San Diego, California, participants identified customs and border procedures as potential obstacles that may delay response times during an actual emergency, which could result in further damage to the environment, public health, property, or welfare. The Tohono O'odham Nation participated in this meeting, where it was agreed to work on conducting an emergency response event on the Nation's lands.

Next Steps

Resolve liability issues for cross-border emergency responders. Problems with liability insurance may need to be addressed by state legislatures in the United States; these issues should be identified, and legislation should be introduced and enacted. DHS also needs to be integrated into the U.S.-Mexico JCP to ensure that if U.S. or tribal responders cross the border for an incident in Mexico, they are allowed to bring their equipment back across the border without concerns of forfeiture. Similar liability protection needs to be developed for responders from Mexico who cross the border for an incident in the United States.

Coordinate binational federal customs. Coordinating policies and procedures to address border security and environmental protection as a tandem

concept will facilitate preparedness and expedite emergency response, improving homeland security on both sides of the border. Both CBP and its Mexican counterpart (Aduana México) currently are working on procedures to expedite the entry and exit of emergency responders during incidents along the U.S.-Mexico border.

CHALLENGE 3

Technology equipment and personnel issues: environmental protection needs of small U.S. communities, Mexican communities, and U.S. tribes are overlooked in the “big picture.” With homeland security a top priority, large funding packages to develop advanced technology to be applied on a massive scale have assumed added importance. Yet along the U.S.-Mexico border, small U.S. and Mexican communities or tribes with very limited resources may need a relatively basic piece of equipment to operate much more effectively; however, they often lack the resources to obtain that equipment. The focus on large ticket items overlooks small communities not provided for in the “big picture” approach. Even very large Mexican border communities may have few resources. For example, Reynosa, Tamaulipas (2006 population of 620,000), has only two fire stations: one main station and one substation.

Next Steps

Provide additional support for low-tech, small-scale, local environmental protection efforts, Mexican communities, and tribes as part of overall strategic planning for national security. Smaller U.S. border communities and their emergency response needs must be given more consideration when homeland security funds are being disbursed. Only two of the U.S. border cities have populations greater than 500,000 (San Diego and El Paso), with the next largest city being Laredo, Texas, with a population of 230,000. Most U.S. communities have considerably smaller populations, such as Hidalgo, Texas (2000 pop. 7,322), which is across from Reynosa, Tamaulipas, or Eagle Pass, Texas (2000 pop. 22,413), which is across from Piedras Negras, Coahuila (pop. 170,000). In addition, most tribes also have relatively small populations.

Fortunately, some small U.S. border communities such as McAllen, Brownsville, and Harlingen,

Texas, already have received DHS support to enhance or improve their hazmat response capabilities; unfortunately, their sister cities in Mexico have not. One solution would be to establish a fund for Mexican communities and/or border tribes and make them aware that they now can apply for Border 2012 funds.

Where U.S. local emergency responders provide assistance, their experiences need to be documented and shared for the benefit of other U.S. and Mexican responders. For example, in the Matamoros rail car/butane tanker collision and explosion mentioned previously, local U.S. responders entered Mexico. In a separate incident that same month, rail cars carrying sulfuric acid at San Lázaro, Sonora, by the Santa Cruz River near the Sonora-Arizona border derailed. Approximately 25,000-30,000 gallons of sulfuric acid spilled, with acid entering the river. A “lessons learned” interview by DHS and EPA staff with those responders in both the Tamaulipas-Texas and Sonora-Arizona incidents should be conducted, and this information should be shared with local emergency responders along the entire border.

CHALLENGE 4

An overarching strategic plan for border region ports of entry is needed that reflects development, population, language, and staffing requirements, which also would lessen tensions that exist between security and environmental protection personnel at some ports of entry. After the events of September 11, 2001, there were changes in the reliance of CBP inspectors on state and local officials to help with inspections. For example, Texas Commission on Environmental Quality investigators were asked by CBP to no longer provide assistance at some South Texas ports of entry. If state investigators or emergency responders cannot assist CBP in inspecting transboundary shipments of hazardous waste, even if on an infrequent basis, environmental risks to border communities are multiplied.

Other border concerns include industrial development on the border, the large population on the border, lack of personal protective equipment for Mexican emergency responders, the language barrier, and tourists and migrant workers in the area. All of these factors could exacerbate the affects of a chemical release—because large numbers of people could be affected, the accident or even death

rate could increase, and language issues could result in further mistakes.

Next Steps

Strengthen communication and collaboration. Communication at all levels between security and environmental protection personnel on both sides of the border should be strengthened through face-to-face meetings between staff of relevant local, state, and federal agencies and U.S. border tribes. These activities should be followed up by memoranda of understanding or agreement (although the latter take longer to implement, they formalize the structure). Radio and cellular telephone communications between Protección Civil and U.S. and tribal emergency responders should be tested and updated regularly. Grant funding from DHS has allowed interoperability communications for some communities such as those in the Lower Rio Grande Valley of Texas but only on the U.S. side of the border.

When planning for border emergencies, consider actual settings of the border. The unique challenges of binational emergency response planning along the border require targeted, additional response measures and cooperation with Mexican colleagues. The most effective plans are developed and implemented on a local-to-local basis, with state and federal support. Emergency responders on both sides of the border should meet regularly and plan for contingencies; the sister city plans require regular planning exercises. Given the 3-year terms of local administrations in Mexico, along with significant staff turnover because there is no civil service system for staff permanence, frequent exercises are critical. U.S. emergency responders should familiarize themselves with potential industrial sites in Mexico where they may need to respond and vice versa. Tailored plans should reflect concerns of local communities and situations.

CHALLENGE 5

Tribal funding and communication pose a challenge, specifically the inability of border tribes to receive funding for emergency response and less than desirable communication on hazardous materials transported through and adjacent to tribal lands. In the United States, nearly all tribes are unable to meet the minimal require-

ments to qualify for directly receiving homeland security funds to help prevent terrorist attacks or to plan for impacts from such attacks. Instead, they are required to apply for funding through the state or county. These entities, in turn, do not receive enough funding themselves from the federal government to fund tribes, as pointed out in the Native American Environmental Protection Coalition's *Border 2012 Tribal Accomplishments & Issues Report* (April 2006). Exceptions include the Tohono O'odham Nation, which received funding directly from DHS, and DOT assistance to Arizona's Inter Tribal Council, which includes several border tribes. As pointed out earlier in this *Tenth Report*, there needs to be better communication with tribes about transportation of hazardous materials through or near their lands.

Next Steps

DHS should earmark funding specifically for border tribes. As sovereign nations, tribes should be allowed to apply directly to the federal government for funds for emergency response, or their applications should be given more consideration.

Increase tribal participation in training exercises that involve federal, state, and local entities. Working cooperatively with tribal governments and their tribal agencies will enable a quicker response time and more efficient protection of affected communities and surrounding environmental resources. Tribal governments are better equipped than outside agencies to contact their tribal communities.

Projects and Partnerships

This section presents some examples of partnerships that are making a difference and, therefore, potentially could be tapped to help develop a strategic plan to address both border security and environmental protection. Some items are partnerships between security and environmental agencies, whereas others are partnerships between agencies within the security sector.

Border 2012 partnerships. To accomplish the Border 2012 goal of reducing the risk of public exposure to chemical, biological, and radiological releases, and to enhance the La Paz Agreement, the JCP, and the sister city plans, a number of partnerships

have been initiated at the regional and national levels. One such initiative is the Radio Frequency Identification Pilot (see next project).

Radio Frequency Identification (RFID) Pilot to track hazardous waste shipments. EPA, in partnership with the National Aeronautics and Space Administration's Dryden Space Center and several vendors, is piloting the use of RFID technology to track transboundary shipments of hazardous wastes. Funded by EPA's Office of Research and Development and Office of International Affairs, the pilot will test the feasibility of using this emerging technology. The vendors voluntarily contribute tags, readers, and technical staff necessary for laboratory and field testing, with results posted on the Internet. The goal of the pilot is to track hazardous wastes leaving generators in the Mexico/U.S. border zone across the border and to a U.S. receiving facility. Field testing is scheduled for early spring 2007.

Baja California Emergency Management Institute. In April 2006, this public/private binational partnership signed a memorandum that provides for an infrastructure and timeframe for sustainable emergency preparedness. Based in Tijuana, partners include Baja California State Civil Protection; Tijuana Fire and Civil Protection Department; PROFEPA; Autonomous State University of Baja California (the Institute's fiscal and organization coordinator); EPA; the County of San Diego; the California Specialized Training Institute; and industry partners, such as Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Mexican National Chamber of Commerce) and the Pro-Bomberos Tijuana Association. Additional 2006 Institute activities included standardizing and certifying first-responder courses, creating binational teams to conduct HAZMAT technical training, and collaborating with the Agency for Toxic Substances and Disease Registry to offer bilingual training for the medical consequences of exposure to chemical agents of opportunity. Between September and November 2006, the Institute's partners hosted five binational capacity building sessions that reached 260 participants. Three of those sessions covered multiple environmental programs such as emergency preparedness/response, risk management, and pollution prevention.

The Border Agency Fire Council (BAFC). BAFC of the San Diego-Baja California border area exemplifies effective transborder collaboration for emergency response in the form of wildfire fighting. It

was established formally during the 1996 fire season after a dramatic increase in wildfire activity caused by campfires of undocumented immigrants in remote mountainous areas of San Diego County and the border. The Council includes 33 U.S. and Mexican members, including government agencies, elected officials, emergency responders, private organizations, and environmental specialists. Since 1998, a mutual assistance agreement has enabled emergency responders to cross the border to protect lives and property. Under this agreement, Mexican fire agencies have crossed into San Diego County to assist local fire fighters on a number of occasions. In addition, U.S. agencies regularly provide assistance south of the border.

Four Sister-City Collaboration (Imperial County, California and Mexicali, Baja California; Yuma, Arizona and San Luis Rio Colorado, Sonora). In 2006, these two pairs of sister cities initiated projects to enhance preparedness and reduce the risk of all hazard releases in this four-state area with a joint population of more than 1 million. Projects include building first-responder capacity, involving industry in sister city plan exercises and updates, implementing emergency management systems focused on industry compliance with civil protection laws, and developing and exercising expedited border-crossing protocols for emergency personnel.

Collaboration between the Arizona/Sonora Emergency Preparedness and Response Task Force and the Arizona/Mexico Commission Emergency Management Committee. The Task Force is collaborating with the Arizona/Mexico Commission and three Arizona counties, the Tohono O'odham Nation, and the Community of Sonoyta, Sonora, to develop a trinational emergency contingency plan. The Task Force and the Committee held a joint meeting November 15-17, 2006, to review progress in trinational planning, including additional training for 100 border first responders.

Interagency Arizona Port Inspection Exercise. A summer 2006 interagency operation coordinated by the U.S. Department of Justice to inspect hazardous materials trucks at Arizona's principal commercial crossings, Nogales/Mariposa and San Luis, detected some violations, although most trucks were in compliance. This may, in part, result from the fact that many of the north- and southbound hazardous materials trucks are regular customers—shippers and drivers familiar with the procedures and well

known to inspectors. Vehicles from unknown shippers are naturally given special scrutiny.

Southwest Consortium for Environmental Research and Policy (SCERP). SCERP's 2007 conference, held annually in Rio Rico, Arizona, will examine the issue of homeland security and the border environment. SCERP is a collaboration of five U.S. and five Mexican universities located in all 10 U.S.-Mexico border states. The five U.S. universities are Arizona State University, New Mexico State University, San Diego State University, the University of Texas at El Paso, and the University of Utah. The Mexican universities are El Colegio de la Frontera Norte, Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Autónoma de Baja California, and Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (<http://www.scerp.org/>).

North American Commission on Environmental Cooperation (CEC) Waste Tracking Project. CEC has undertaken a study of transboundary hazardous waste tracking in North America in its role as an international organization created by Canada, Mexico, and the United States under the North American Agreement on Environmental Cooperation (NAAEC). The Agreement complements the environmental provisions of the North American Free Trade Agreement. There are three objectives for this project: (1) expedite movement of legal materials across borders; (2) stop illegal shipments that could threaten human health and the environment; and (3) improve enforcement capacity. Scheduled for completion in December 2009, the project will include information exchange; training to customs officials and other law enforcement officials, including border and port inspectors; and capacity building within legal and judicial systems.

Automated Customs Environment/International Trade Data System (ACE/ITDS). During 2006, EPA obtained direct, online access to U.S. Customs' imports data for the first time. This access

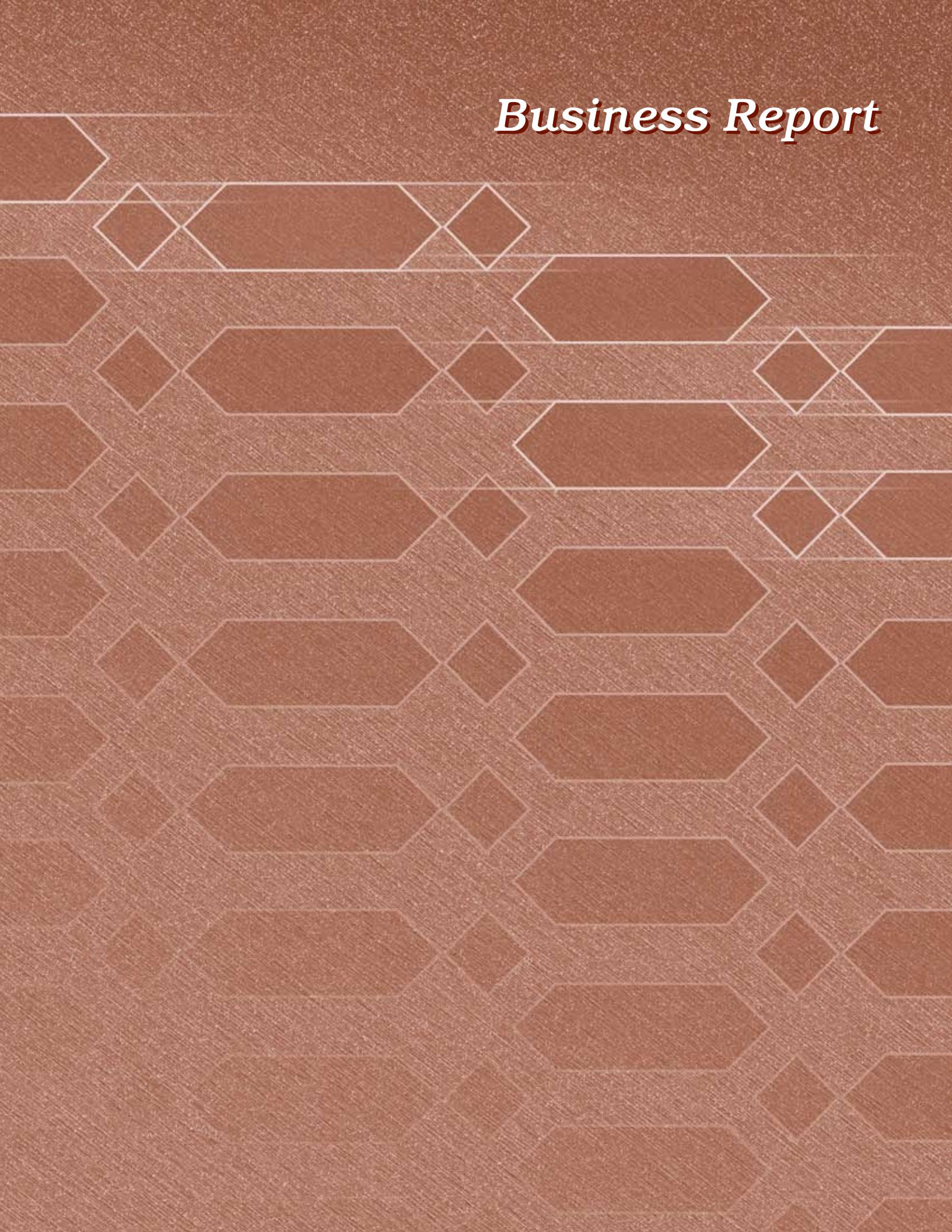
allows comparison of permitted import waste quantities against actual imports to identify discrepancies. EPA is adding its import/export data needs to Customs' modernized database, ACE, which currently is under development. The goal of this multiyear, \$300 million-plus database is to provide a secure, integrated, government-wide system for electronic management of trade and transportation data. Some 25 federal agencies, organized as ITDS, rely on ACE. ACE/ITDS will enable federal agencies to target high-risk cargo while expediting low-risk cargo and also will allow importers and exporters to provide their data electronically, without filing multiple reports with various agencies. Some of the ACE/ITDS information EPA needs will not be available until 2009.

EPA Enforcement and Compliance Assistance Training Programs. EPA's Office of Enforcement and Compliance Assurance has developed online training in undocumented trafficking of endangered species; training for Mexican judges; identifying, understanding, and addressing differences in laws between countries; and developing and sharing protocols for detecting noncompliant transboundary shipments of hazardous waste.

Joint Contingency Plan (JCP). The JCP addresses emergencies caused by releases, spills, fires, or explosions of hazardous substances and provides a mechanism for cooperative responses to potential polluting incidents by the United States and Mexico in the border area (see *Risk and Emergencies* section above for more information).

Tribal Participation in Trinational Exercises. The Kickapoo Traditional Tribe of Texas hosted meetings and participated in a trinational emergency response exercise with representatives from all levels of government from the United States and Mexico. The trinational exercise simulation was held the week of September 18, 2006, and also included participation by the sister cities of Eagle Pass, Texas, and Piedras Negras, Coahuila.

Business Report



Board Meetings

During 2006, as in previous years, the Board held three public meetings. One took place in Washington, DC, and the other two were in U.S. border communities—San Diego, California, and Alpine, Texas. One highlight of the Washington, DC, meeting was the release of the Board's annual report to the President and Congress. The DC meeting also included briefings from national policymakers and a strategic planning session.

By contrast, the focus of the two border community meetings was to more closely examine particular environmental issues that present challenges and opportunities for those portions of the border region. Speakers included local government officials as well as regional environmental policy experts. Particularly valuable were the Public Comment sessions, when the Board heard the perspectives of community members whose daily lives are affected by border-region environmental policies. Following are summaries of the 2006 meetings, including a list of public attendees who signed the meetings' registration lists.



(1) EPA Administrator Steve Johnson (right) joins (left) Border 2012 U.S. Coordinator Jerry Clifford and (center) Board Chair Paul Ganster at the Washington, DC, meeting. (2) Board members gain additional input from presentations given by guest speakers. (3) and (4) Postmeeting field trips—such as this one to Big Bend National Park that took place after the Board's Alpine, Texas, meeting—enable Board members to better understand issues faced by specific portions of the border region. (5) Public attendees, such as these at the San Diego meeting, add their perspectives via Public Comment sessions and informal discussions.

Washington, DC – March 14-15

The Board's annual meeting in Washington, DC, took place March 14-15, 2006. The meeting on March 14 began with keynote remarks from *Honorable Stephen L. Johnson*, U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Administrator, followed by remarks from *Jerry Clifford*, U.S. National Coordinator, Border 2012, and Deputy Assistant Administrator, EPA Office of International Affairs. They thanked the Board for the advice contained in its Ninth Report, which had just been released at a press event prior to the meeting. After their remarks, two panel discussions took place during which U.S.-Mexico border environmental policy experts provided feedback on the report. Panelists for the Air Quality and Transportation section of the report included *Gary A. Ragatz* of U.S. Customs and Border Protection (CBP); *Jill Hochman* of the Federal Highway Administration; *Merrylin Zaw-Mon* of the EPA Office of Air and Radiation; *Carlos de la Parra*, Minister for Environment, Embassy of Mexico; and *Sergio Sanchez*, Clean Air Initiative for Latin American Cities, World Bank. Panelists for the Cultural and Natural Resources section of the report included *Alida Montiel* of the Inter Tribal Council of Arizona, *Mariddie J. Craig* of the White Mountain Apache Tribe, *Daniel G. Carey* of the National Trust for Historic Preservation, *David Tarler* of the U.S. Department of the Interior (DOI), and *Melinda Tajbakhsh* of the U.S. Fish and Wildlife Service. During the afternoon of March 14, the Board heard from speakers who were experts on the topic it had selected for its Tenth Report: the intersection of environmental protection and U.S.-Mexico border security. Speakers included *Kevin Stephens* of CBP; *Janet Bearden* of the EPA Office of Enforcement and Compliance Assurance; and *Brian Segee* of the Defenders of Wildlife. On the following day, March 15, the Board held its annual Strategic Planning session and briefed additional officials in the Washington, DC, area on the recommendations in its report.

Public Attendance

Timothy Borky, EPA; *Oscar Carrillo*, EPA; *Steve Cook*, Daily Environment Report; *Tricia Elbrock*, Malpai Borderlands Group, Animas, NM; *Brian Hansen*, Platts News Service; *Chris Hope*, CBP, Department of Homeland Security (DHS); *Sherry Hutt*, National Park Service (NPS); *Davis Jones*, EPA; *Cynthia D. Jones-Jackson*, Associate Director, Office of Cooperative Environmental Management, EPA; *Aurelia Micko*, Department of State; *Toni Rousey*, EPA; *Phoebe L. Ng*, White Mountain Apache Tribe, Whiteriver, AZ; *Chris Oh*, CBP, DHS; *Jonathan Putnam*, NPS; *Christine Senteals*, Hispanic Link, Washington, DC; *Marc Thomas*, EPA; *P. Sanchez*, UNIVISION; *Ron Slortkin*, EPA; *D. Rick Van Schoik*, Southwest Consortium for Environmental Research and Policy (SCERP); *Maven Williams*, DHS.

San Diego, California – July 18-19

The second meeting of 2006 took place in San Diego, California, July 18-19, 2006; it was preceded the afternoon before by a premeeting joint session with the Border 2012 Emergency Preparedness and Response Task Force in the Chula Vista Community Center. Opening remarks on July 18 were made by the *Honorable Denise Moreno Ducheny*, State Senator, 40th District of California and Secretary *Enrique Villegas*, General Director Environmental Protection, Baja California. Speakers on July 18 addressed the topic of border security and environmental protection and included *Michael Hance* of the U.S. Border Patrol; *Diane Takvorian* of the Environmental Health Coalition; *Michael P. Dorsey*, Border 2012 California/Baja California Emergency Re-

sponse Taskforce Official; *Barbara Maco* of EPA Region 9; *Flavio Olivier*, Liaison for Consejo Consultivo de Desarrollo Sostenible; *Ing. José Luis Sánchez* of the Grupo Ambiental del Noroeste; *Mike White* of the Conservation Biology Institute; *Tina Terrell*, Forest Supervisor for the Cleveland National Forest; and *Leonardo Hurtado*, SAIC. The second day of the meeting, July 19, the Board held a business meeting in the morning. Then, to supplement its understanding of environmental issues in this portion of the border region, the Board went on a postmeeting afternoon field trip that included the following components: Border Field State Park via Tijuana River Valley, International Wastewater Treatment Plant, and City of San Diego Water Reclamation Plant; briefing on Tijuana Estuary; viewing of site of proposed "triple fence"; and tour of Otay Mesa Port of Entry commercial inspection facility as well as the site of a new proposed border crossing at East Otay Mesa.

Public Attendance

Javier Avila, Office of California State Senator Ducheny; *Edward Cardenas*, San Diego Fire Department; *Lawrence Chang*, University of California at San Diego (UCSD); *Jorge Garces*, Managing Director, NADBank; *Amelia Giacalone*, UCSD; *Cecilia Gonzalez*, UCSD; *Deanneka Goodwin*, Office of California Congresswoman Susan Davis; *David Heilig*, U.S. Department of Agriculture; *Edward Janowicz*, UCSD; *Alven Lam*, U.S. Department of Housing and Urban Development; *Cecilia Lavaniga*, UCSD; *April Lee*, Native American Environmental Protection Coalition; *Doug Liden*, EPA; *Charles Mallon*, Citizen, San Diego, CA; *Brian Martin*, Border Patrol, El Cajon, CA; *Nick Martorano*, EPA San Diego Border Office; *Katie Meehan*, University of Arizona; *Suzanne Michel*, Conservation Biology Institute; *Ryan Moreland*, UCSD; *Jennifer Neeley*, Defenders of Wildlife; *Daniel Newbold*, UCSD; *Franco Ocampo*, UCSD; *Tae Park*, UCSD; *Mitesh Patel*, UCSD; *Jim Peugh*, San Diego Audubon Society; *Jessica Piekeilek*, University of Arizona; *Jose C. Pierre*, Citizen, Tijuana, Mexico; *Lorena Lopez Powers*, EPA San Diego Border Office; *Oscar Romo*, National Oceanic and Atmospheric Administration; *Christin Rubin*, California State and Consumer Services Agency; *Ron Saenz*, San Diego Association of Governments; *Melody Sees*, Los Coyotes Band of Indians; *Stephen Siciliano*, Bureau of National Affairs; *Paula Stigler*, Pala Band of Mission Indians; *Sean Sullivan*, Sierra Club; *Tomas Torres*, Director, EPA San Diego Border Office; *Alice Tsing*, UCSD; *Julieta Valdez*, Citizen, San Marino, CA; *Rick Van Schoik*, SCERP; *Chris Wong*, UCSD.

Alpine, Texas – October 24-26

The theme of the final meeting of 2006, which took place October 24-26, 2006, in Alpine, Texas, was Big Bend/El Gran Recodo. Opening Remarks were made by *Vic Morgan*, President of Sul Ross State University; Alpine Mayor *Mickey Clouse*; and County Judge *Val Clark Beard*. Speakers addressed the Board on environmental issues pertinent to the Big Bend region. Keynote speakers included *Dr. Ernesto Enkerlin*, President, National Commission on Protected Areas, Mexico; and *Russ Whitlock*, State Coordinator, Texas National Parks, NPS. Other speakers included *Paul Silver*, Rio Grande private landowner; *Tom Beard*, Far West Texas Water Planning Region; *David Schanbacher*, Chief Engineer, Texas Commission on Environmental Quality; *Jack Schmidt*, Professor, Utah State University; and *Mark Briggs*, World Wildlife Fund. On October 25, the Board heard presentations from additional National Park Service officials during an all-day field trip to Big Bend National Park. Speakers there included *Brad*

Brad Traver, Vidal Davila, Joe Sirotnak, Jeff Bennett, and Don Corrick. The Board also heard a presentation from *Billy Pat McKinney* of CEMEX. The last day of the meeting, October 26, was devoted to a business meeting during which it determined meeting dates and locations for 2007: March 13 and 14, Washington, DC; July 24 and 25, Brownsville, Texas; and October 3 and 4, Las Cruces, New Mexico.

Public Attendance

Larry Allen, Citizen, Albuquerque, NM; *Adelina Beall*, Sul Ross State University (SRSU); *Tom Beard*, Citizen, Alpine, TX; *Jeff Bennett*, Physical Scientist, Big Bend National Park; *Vidal Davila*, Big

Bend National Park; *Margaret Earnest*, Texas Commission on Environmental Quality; *Chad Ellis*, Natural Resources Conservation Service, Alpine, TX; *Ty Fain*, Rio Grande Institute; *Aimee Roberston*, U.S. Fish and Wildlife Service; *Juan Antonio Flores*, Public Affairs Director, NADBANK; *Leslie Hopper*, Rio Grande Research Center, SRSU; *Keith Klein*, Professor, Industry and Technology Department, SRSU; *Matthew O'Toole*, Research Technician, Rio Grande Research Center, SRSU; *Tom Shiller*, SRSU; *Keith Sternes*, Chair, Department of Biology, SRSU; *Brad Traver*, Acting Superintendent, Big Bend National Park; *Kevin Urbanczyk*, Chair, Department of Earth and Physical Science, SRSU.

Other Activities

Between meetings, Board members remained actively involved in the work of the Board through several channels: some served as members of planning committees for upcoming meetings, others took a lead role in drafting sections of the next report, and still others continued to conduct outreach on the current report at a variety of border-region and national events. In addition to its annual report, the Board also issued several short Comment Letters on time-sensitive topics. Finally, the Board also maintained its information exchange on U.S.-Mexico border environmental policy developments with counterpart Mexican advisory groups, referred to as Consejos.

One of the highlights of the year was the development of a closer working relationship with the Council on Environmental Quality, whose Chair, James Connaughton, serves as the President's principal environmental policy advisor.

Board's Ninth Report Released

After delivering its recommendations to key Administration officials, the Board publicly released its Ninth Report on March 14, 2006, at a press event that preceded its 2-day meeting in Washington, DC. Media coverage was extensive, including articles in publications such as *BNA Daily Environment Report*, *Department of State Washington File*, *Congressional Quarterly*, *San Diego Union Tribune*, *Albuquerque Tribune*, *Arizona Star*, and *USA Today*. Board members also met with Agency officials and senior officials from other organizations to disseminate the report and invite feedback on its recommendations.

The Ninth Report provides advice on two issues: (1) working toward healthy air quality while also supporting transportation activities; and (2) leveraging protection efforts for cultural and natural resources. Recommendations call for the following actions:

Air Quality and Transportation

Border Stations and Transportation Infrastructure: Bolster infrastructure, technology, personnel, and related activities through substantial new funding and intensify long-range planning and coordination at the binational, national, state, and local levels to cope with the congestion at border crossings and thus reduce air pollution.

Emissions: Harness new and emerging technologies and fuels to reduce emissions from diesel trucks, buses, municipal and private fleets, and passenger vehicles and identify private/public funding sources to accelerate the process.

Public Transit and Alternatives to Driving Alone: Encourage public transportation, ride-sharing, car-sharing, biking, and walk-

ing in border cities so that fewer people will drive alone, thus reducing motor vehicle trips and the emissions of pollutants.

Cultural and Natural Resources

Capacity Building: Efficiently use and leverage existing federal support initiatives such as the National Heritage Area Program. Establish more public-private partnerships to increase both funding and staffing levels. Foster more public involvement in cultural resources preservation through stronger public education about its value.

Growth: Increase partnerships between preservation groups and agencies to purchase land with high-value cultural and natural resources, thus helping to manage growth. Create incentive programs to encourage private landowners and developers to voluntarily protect cultural resources. Encourage tribal governments and agencies to participate in government-to-government consultation to minimize damage to cultural resources, including sacred sites.

Security: Undertake border security efforts while recognizing the need to protect cultural and natural resources. Improve efforts in interaction, coordination, and cooperation among federal, tribal, state, and local governments. Examine methods to reduce the number of undocumented migrants crossing border tribal lands, thus reducing associated damage to sacred sites, burial grounds, archeological sites, important ecosystems, and traditional lifestyles.

For the full English text of the report, see www.epa.gov/ocem/gneb/gneb9threport/English-GNEB-9th-Report.pdf. For the full Spanish text, see <http://www.epa.gov/ocem/gneb/gneb9th-report/espanol-gneb-9th-report.pdf>.



CHAIRMAN

EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT
COUNCIL ON ENVIRONMENTAL QUALITY
WASHINGTON, D.C. 20503

November 2, 2006

Dr. Paul Ganster
Chair, Good Neighbor Environmental Board
5500 Campanile Drive
San Diego, California 92182-4403

Dear Dr. Ganster:

I am pleased to respond on behalf of President George W. Bush to the Ninth Report of the Good Neighbor Environmental Board, entitled "*U.S.-Mexico Border Environment: Air Quality and Transportation & Cultural and Natural Resources.*" President Bush and his Administration appreciate the valuable role the Board plays in informing decisions related to environmental and infrastructure issues along the U.S. border with Mexico.

The diversity and breadth of its membership places the Good Neighbor Board in a unique position to provide information and recommendations that are invaluable in shaping our national environmental policy along the border region. Your insights on how collaboration can be strengthened so the region's fragile environment is protected while its economy is strengthened are proving especially valuable.

I also want to thank you for your recent request that the Council on Environmental Quality play a more active and visible role in the activities of the Board. As you are aware, I have assigned Mitch Butler from my staff to work with you on these important issues. Mitch will report back frequently to ensure that I and relevant members of my staff remain engaged going forward.

Best wishes as you complete preparations for your upcoming Tenth Report to the President and Congress; I look forward to working with you on this and future reports.

Yours Sincerely,

James L. Connaughton



Chair
Paul Ganster
Telephone: (619) 594-5423
Email: pganster@mail.sdsu.edu

Designated Federal Officer
Elaine Koerner
Telephone: (202) 233-0069
Email: koerner.elaine@epa.gov
Website: www.epa.gov/ocem/gnecb

April 14, 2006

The President
The Vice President
The Speaker of the House of Representatives

As your advisors on environmental and infrastructure issues along the U.S. border with Mexico, we write to express our continued support for the North American Development Bank (NADB) and the Border Environment Cooperation Commission (BECC). Both agencies were created in 1993 under a bilateral side agreement to the North American Free Trade Agreement to improve environmental infrastructure in the U.S.-Mexico border region. The NADB was established specifically to help finance projects in the U.S.-Mexico border after certification by BECC.

Recent media reports in both the United States and Mexico indicate that over the past few years, members of the U.S. Department of Treasury have discussed an attempt to close down the NADB with members of Mexico's Secretariat of Finance and Public Credit. In fact, Treasury spokespersons have acknowledged these talks in public statements. While it appears that a shutdown has been averted for now, the Good Neighbor Environmental Board remains very concerned that this issue may arise again, and that the benefits of NADB still are not fully understood.

Any movement toward eliminating the NADB is, in our view, extremely regrettable because the Bank and the Commission are the very institutions helping to provide solutions to environmental infrastructure needs in the border region: As of December 31, 2005, NADB had provided \$704 million, through grants or loans, to 90 border environmental infrastructure projects in both the U.S. and Mexico border regions. These projects have an estimated total cost of \$2.35 billion dollars and demonstrate NADB's ability to leverage additional capital. As a result of these NADB grants or loans, many of the recipient communities have improved their potable water facilities or wastewater treatment plants; in some cases, these funds have made possible the development of facilities where none had existed before. NADB's water and wastewater programs are directly and indirectly benefiting more than 6 million people on the U.S.-Mexico border.

We recognize that all institutions have room for improvement, and we respect the recent reforms your administration made to the NADB and the BECC. Just last year, you issued Executive

Administrative support: U.S. Environmental Protection Agency, Office of Cooperative Environmental Management,
Mail Code 1601E, 655 15St. N W Suite 800
Washington, D. C. 20460 *(T) 202-233-0090 *(F) 233-0060

Order 13380 regarding membership of a combined NADB-BECC board. In addition, in April 2004 you signed into law HR 254, which made changes to the NADB and the BECC, preceded by a Statement of Administration Policy (February 26, 2003) that read:

“The Administration strongly supports passage of H.R. 254, which authorizes key reforms of the North American Development Bank (NADB) and the Border Environment Cooperation Commission (BECC). Since taking office, President Bush has worked closely with Mexico’s President Fox to make these institutions more effective in addressing the critical environmental needs of the communities of the U.S.-Mexico border region and, thus, improve the quality of life for the region’s 12 million residents...”

In January of this year, to fulfill Executive Order 13380, U.S. members were appointed to the combined board. With this series of reforms to NADB and BECC having recently occurred, we believe these changes should be allowed to work their course. In addition, we strongly urge members of the new board to hold a public meeting as soon as practical and act on pending projects.

The U.S.-Mexico border region continues to be an area of tremendous environmental and infrastructure needs. More than \$900 million in water and wastewater infrastructure needs were identified in 2005. The dissolution of the NADB would create serious problems for border community residents and, ultimately, for the nation. Rather than consider terminating the NADB, we advise, instead, that the NADB be strengthened through continued funding and a recommitment by the members of its Board, as well as high ranking staff within the U.S. Department of Treasury, to advance its important work.

Sincerely yours,



Paul Ganster,
Chair

Note: As the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of State are members of the combined BECC-NAB board, the Good Neighbor Environmental Board representatives from those agencies have recused themselves from this Comment Letter. In addition, the representatives from the U.S. Departments of Agriculture, Health and Human Services, Interior, and Transportation also have recused themselves, as has the U.S. Commissioner of the International Boundary and Water Commission.



*an independent federal advisory committee
on environmental sustainability in the
U.S.-Mexico border region*

Chair
Paul Ganster
Telephone: (619) 594-5423
Email: pganster@mail.sdsu.edu

Designated Federal Officer
Elaine Koerner
Telephone: (202) 233-0069
Email: koerner.elaine@epa.gov
Website: www.epa.gov/ocem/gneb

October 12, 2006

The President
The White House
Washington, D.C. 20500

Dear Mr. President:

Members of the Good Neighbor Environmental Board (Board)* are concerned about the potential environmental impacts resulting from construction of new fencing, access roads, and other related infrastructure being proposed and, in some cases, built, along the border with Mexico. The Board supports the need for efforts to enhance national and border security; however, we seek to assure that these efforts are balanced with efforts toward environmental protection.

The Board believes that border security projects can be developed that promote both security and conservation. Failure to work towards a balanced approach will reduce the effectiveness of both efforts. To promote such a balanced perspective, we respectfully request that the following recommendations be followed by U.S. federal agencies when designing and implementing infrastructure projects to advance security along the U.S.-Mexico border:

- Use the expanded security corridor, sometimes referred to as “triple fencing,” only in areas where environmental damage will be minimal and where this new infrastructure will protect important environmental, historical, and cultural resources.
- In sensitive rural areas that are important wildlife corridors, promote the use of barriers that are impermeable to vehicular traffic but allow wildlife movement.
- Aggressively explore the use of information and remote sensing technologies that will enhance border security while reducing the physical footprint of interdiction activities along the border.

**The Good Neighbor Board is an independent federal advisory committee that advises the President and Congress of the United States on environmental issues and infrastructure needs along the border with Mexico. The Board's Tenth Annual Report, which we are currently developing, seeks to balance national security activities with a continued commitment to protect environmental quality in the U.S.-Mexico Borderlands.*

- More fully incorporate appropriate environmental review, public participation, and scientific analysis into the design and implementation of all border security infrastructure projects; this review should include consideration of transboundary drainage patterns.
- Establish ongoing training for border security personnel about the local natural environment and significant natural and cultural resources.
- Work with the government of Mexico to protect particularly important and sensitive habitats that span the border.

Thank you for your consideration of this request. We would be happy to discuss it with appropriate members of the Administration, and we would appreciate a reply on this important issue.

Respectfully,



Paul Ganster, Chair
Good Neighbor Environment Board

CC The Vice President
Speaker of the House of Representatives
James L. Connaughton, Chair, Council on Environmental Quality
Stephen L. Johnson, Administrator, U.S. Environmental Protection Agency

Note: The Good Neighbor Environmental Board representatives from the U.S. Department of State, the U.S. Department of Transportation, the New Mexico Environment Department, and the Texas Commission on Environmental Quality have recused themselves from this Comment Letter.



CHAIRMAN

EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT
COUNCIL ON ENVIRONMENTAL QUALITY
WASHINGTON, D.C. 20503

December 7, 2006

Dr. Paul Ganster
Chair, Good Neighbor Environmental Board
Mail Code 1601 E., 655 15th St. NW Suite 800
Washington, DC 20460

Dear Chairman Ganster,

Thank you for your letter regarding the potential environmental impacts resulting from construction of fencing, access roads, and other infrastructure along the border with Mexico. President George W. Bush appreciates the Board's input on these important matters and has requested that I respond to you on his behalf.

Passed into law on October 26, 2006, the Secure Fence Act (Act) authorized the installation of additional physical infrastructure along the US-Mexico border. An important step forward in our nation's efforts to control our borders, the Act will also serve as a source of protection from environmentally harmful immigrant traffic through the Federal lands lying along 39% of our Southern border.

Thank you for your suggestion regarding the use of remote sensing equipment, wildlife friendly barriers, and other technologies. As you know, the Act authorizes the Department of Homeland Security to use surveillance, barrier tools "and other means" to secure mountainous areas where erecting a fence would be difficult. The President and his Administration are committed to ensuring that this authority is utilized in a manner that will enhance security while also mitigating the impact on the many species of wildlife that utilize mountainous corridors along the border.

The Administration is similarly committed to working with Federal and non-Federal government agencies, the Mexican Government, landowners, and conservation organizations to identify and utilize additional methods of environmental mitigation wherever possible throughout implementation of the Act.

The President understands that while national security concerns are paramount, we can and must protect the nation in a manner that accounts for the importance of environmental stewardship and natural resources conservation. The President and his Administration remain committed to working with the Good Neighbor Environmental Board going forward. I would be happy to meet with you and other members of the Board to discuss your recommendations and the implementation of the Secure Fence Act. Thank you for your input and for your continued service to our country.

Yours Sincerely,

James L. Connaughton

Recycled Paper

Counterpart Mexican Advisory Groups, the "Consejos"

The following report was prepared by "Consejo" representative Flavio Olivieri, Baja California Business Sector representative, Northwest Regional Board, Citizens Sustainable Development Advisory Board.

The Mexican "Consejos" advise the Mexican Federal Secretary for Environment and Natural Resources (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; SEMARNAT) by providing written recommendations on environmental policy. These advisory groups are comprised of five regional councils (Northeast, Northwest, South, Central, Central-West) and one national council. The Good Neighbor Environmental Board works most closely with the Northeast and Northwest Councils. Council members serve as elected representatives from each state and come from nongovernmental organizations; the social, business, and academic sectors; and state governments and local congresses. Women, youth, and Indian representatives are designated in the national council.

The Consejos were very active in 2006, which ended with preparations for the transition of the new federal government administration in Mexico. During the year, the councils' relationship with the Good Neighbor Environmental Board was highlighted by the participation of Consejo members from northern border states in two of the Board's meetings. In addition, the Board's Ninth Report was distributed to all Consejo members from the northern border states and via presentations at the Consejos' national meetings.

Regional councils and the national council worked in technical groups to develop their recommendations. At November's national council meeting, 44 recommendations were approved. The International and Border Issues Working Group focused on the following issues:

- Strengthen SEMARNAT's participation and funding in Border 2012 Working Group, Commission for Environmental Cooperation, and Border Environment Cooperation Commission activities.
- Promote binational working groups to review and present recommendations on mitigating potential environmental impacts caused by the construction of fences on the U.S.-Mexico border.

- Continue the Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes' (Mexico's registry of emissions) followup and further harmonization with the United States and Canada.
- Strengthen the overview and resolution of environmental conflicts in Mexico's southern border with Belize and Guatemala.

In addition to preparing the recommendations, most council members participate in other working groups and forums. Some highlights of their accomplishments include:

- *Presidential Decree for the Marine Environmental Zoning of the Gulf of California.* Several Consejo members participated over a 2-year period with various federal, state, and local government officials to develop the Marine Environmental Zoning Plan for the Sea of Cortez, which was finally approved by the President of Mexico and published in the Official Gazette last November. This Plan will provide environmental guidelines for federal authorities to regulate the sustainable use of this pristine sea.
- *Fourth World Water Forum.* A large group of Consejo members participated in the organization and preparation of presentations for the Fourth World Water Forum that took place March 16-22, 2006, in Mexico City. Almost 20,000 people from throughout the world participated in 206 working sessions in which a total of 1,600 local actions were presented. Official representatives and delegates from 140 countries participated, including 120 mayors and 150 legislators as well as experts and representatives from nongovernmental organizations, companies, and civil society.
- *National Educational Program for Sustainable Development.* Members of the Consejos Working Group on Environmental Education collaborated with SEMARNAT's Center for Sustainable Development Education to develop the first national educational program for sustainable development.

Membership

Representation on the Board remained diverse, with the business, academic, local and state government, tribal, and non-profit sectors represented. Federal agency representation included the departments of: Agriculture, Health and Human Services, Housing and Urban Development, Interior, State, and Transportation; the U.S. Environmental Protection Agency; and the U.S. Commissioner of the International Boundary and Water Commission.

2006 Membership Roster

Nonfederal Members (Nongovernmental, State, Local, Tribal)

Paul Ganster, Ph.D., Chair

Director

Institute for Regional Studies of the Californias
San Diego State University
5500 Campanile Drive
San Diego, CA 92182-4403
619-594-5423; 619-594-5474 (fax)
E-mail: pganster@mail.sdsu.edu

Amanda Aguirre

CEO/President
Regional Center for Border Health, Inc.
P.O. Box 1669
San Luis, AZ 85349
928-627-9222; 928-627-8315 (fax)
E-mail: amanda@rcfbh.com

Larry S. Allen*

Board of Directors
Malpai Borderlands Group
1310 Sara Way
Rio Rancho, NM 87124
505-898-3424
E-mail: Larry9869@msn.com

Christopher P. Brown, Ph.D.

Associate Professor
New Mexico State University
P.O. Box 30001/MSC MAP
Las Cruces, NM 88003-8001
505-646-1892; 505-646-7430 (fax)
E-mail: brownchr@nmsu.edu

Gedi Cibas, Ph.D.*

Manager
Border Programs
New Mexico Environment Department
1190 St. Francis Drive, P.O. Box 26110
Santa Fe, NM 87502-6110
505-827-2176; 505-827-2836 (fax)
E-mail: Gedi_Cibas@nmenv.state.nm.us

Ron Curry

Secretary
New Mexico Environment Department
1190 St. Francis Drive, P.O. Box 26110
Santa Fe, NM 87502-6110
505-827-2855; 505-827-2836 (fax)
E-mail: ron.curry@state.mn.us

Michael P. Dorsey

Chief
Hazardous Materials Division
San Diego County Department of Environmental Health
P.O. Box 129261
San Diego, CA 92112-9261
619-338-2395; 619-338-2319 (fax)
E-mail: michael.dorsey@sdcounty.ca.gov

Edward Elbrock

Malpai Borderlands Group
P.O. Box 25
Animas, NM 88020
505-548-2270
E-mail: elbrock@vtc.net

Gary Gillen

President
Gillen Pest Control
205 S. 10th Street
Richmond, TX 77469
281-342-6969; 281-232-6979 (fax)
E-mail: gary@gillenpestcontrol.com

Genevieve S. Long

Pro-Tem Mayor
City of Mission
101 Tom Landry Boulevard
Mission, TX 78572
956-580-7852; 956-580-8669 (fax)
E-mail: longen.1@netzero.com

Rosario Marin

Secretary
California State Consumer Services Agency
915 Capitol Mall, Suite 200
Sacramento, CA 95814
916-653-2979; 916-653-3815 (fax)
E-mail: rmarin@sccs.ca.gov

Jennifer A. Montoya

U.S. Program Director
Chihuahuan Desert Conservation Project
World Wildlife Fund
100 E. Hadley Street
Las Cruces, NM 88001
505-525-9537; 505-523-2866 (fax)
E-mail: *jatchley@zianet.com*

Douglas S. Smith

Director
Corporate Environmental Safety and Health
Sony Electronics, Inc.
16450 W. Bernardo Drive
San Diego, CA 92127
858-942-2729; 858-942-9181 (fax)
E-mail: *Douglas.Smith@am.sony.com*

Stephen M. Niemeyer, P.E.

Texas Commission on Environmental Quality
MC-121
Austin, TX 78711-3087
512-239-3606; 512-239-3333 (fax)
E-mail: *sniemeye@tceq.state.tx.us*

Robert Varady, Ph.D.

Deputy Director
Udall Center for Studies in Public Policy
The University of Arizona
803 E. First Street
Tucson, AZ 85719
520-626-4393; 520-626-3664 (fax)
E-mail: *rvarady@email.arizona.edu*

Ned L. Norris, Jr.

Vice Chairman
The Tohono O'odham Nation
P.O. Box 837
Sells, AZ 85634
520-383-2028; 520-383-3379 (fax)
E-mail: *NedNorris@tonation-nsn.gov*

Ann Marie A. Wolf

President
Sonora Environmental Research Institute, Inc.
3202 E. Grant Road
Tucson, AZ 85716
520-321-9488; 520-321-9498 (fax)
E-mail: *aawolf@seriaz.org*

Kenneth Ramirez

Brown McCarroll, LLP
111 Congress Avenue, Suite 1400
Austin, TX 78701
512-479-9711; 512-226-7271 (fax)
E-mail: *kramirez@mailbmc.com*

Federal Members**Department of Agriculture**

Rosendo Treviño, III
Special Assistant to the Chief
U.S. Department of Agriculture
5563 De Zavala, Suite 290
San Antonio, TX 78249
210-691-9248; 210-691-9270 (fax)
E-mail: *rosendo.trevino@tx.usda.gov*

Department of Commerce

(currently vacant)

A. Leonard Smith*

Regional Director
Seattle Economic Development Administration
U.S. Department of Commerce
915 Second Avenue, Suite 1856
Seattle, WA 98174
206-220-7660
E-mail: *lsmith7@eda.doc.gov*

Diane Rose*

Mayor
City of Imperial Beach
825 Imperial Beach Boulevard
Imperial Beach, CA 91932
619-423-8303; 619-429-9770 (fax)
E-mail: *dianehomeloans@yahoo.com*

Peter S. Silva*

Vice Chair
State Water Resources Control Board
1001 I Street
Sacramento, CA 95814
916-341-5607
E-mail: *psilva@waterboards.ca.gov*

Department of Health and Human Services**Marilyn DiSirio**

Associate Director of Global Health
 Agency for Toxic Substances and Disease Registry
 National Center for Environmental Health
 Centers for Disease Control and Prevention
 1600 Clifton Road, N.E., MS-E97
 Atlanta, GA 30333
 404-498-0909; 404-498-0064 (fax)
 E-mail: mdisirio@cdc.gov

Department of Housing and Urban Development**Shannon H. Sorzano**

Deputy Assistant Secretary for International Affairs
 U.S. Department of Housing and Urban Development
 451 Seventh Street, S.W., Room 8118
 Washington, DC 20410
 202-708-0770; 202-708-5536 (fax)
 E-mail: shannon_h.sorzano@hud.gov

Department of the Interior**James Stefanov**

U.S. Geological Survey
 U.S. Department of the Interior
 8027 Exchange Drive
 Austin, TX 78754-4733
 512-927-3543; 512-927-3590 (fax)
 E-mail: jestefan@usgs.gov

Department of State**Daniel D. Darrach**

Coordinator, U.S.-Mexico Border Affairs
 U.S. Department of State, WHA/MEX
 2201 C Street, N.W., Room 4258
 Washington, DC 20520
 202-647-8529; 202-647-5752 (fax)
 E-mail: darrachdd@state.gov

John Ritchie*

Border Coordinator
 Office of Mexico Affairs
 U.S. Department of State
 2201 C Street, N.W., Room 4258-MS
 Washington, DC 20520
 202-647-8529; 202-647-5752 (fax)
 E-mail: RitchieJA@state.gov

Department of Transportation**Linda L. Lawson**

Director
 Safety, Energy and the Environment
 U.S. Department of Transportation
 400 Seventh Street, S.W.
 Washington, DC 20590
 202-366-4416; 202-366-0263 (fax)
 E-mail: linda.lawson@ost.dot.gov

Environmental Protection Agency**Carl Edlund**

Director
 Multimedia Planning and Permitting Division
 Region 6
 U.S. Environmental Protection Agency
 1445 Ross Avenue, Suite 1200, MC 6PD
 Dallas, TX 75202-2733
 214-665-8124; 214-665-7263 (fax)
 E-mail: edlund.carl@epa.gov

International Boundary and Water Commission**Carlos Marin**

Acting Commissioner
 U.S. Section
 International Boundary and Water Commission
 4171 N. Mesa, Suite C-100
 El Paso, TX 79902
 915-832-4101; 915-832-4191 (fax)
 E-mail: carlosmarin@ibwc.state.gov

Designated Federal Officer (DFO)**Elaine M. Koerner**

Designated Federal Officer
 Good Neighbor Environmental Board
 U.S. Environmental Protection Agency
 1200 Pennsylvania Avenue, N.W.
 Mail Code 1601E
 Washington, DC 20460
 202-233-0069; 202-233-0060 (fax)
 E-mail: koerner.elaine@epa.gov

***Note: The list above includes all members who served during 2006. An asterisk (*) indicates individuals who completed their service during the year. See the Good Neighbor Environmental Board Web Site for the most recent membership list (<http://www.epa.gov/ocem/gneb>).**

Note, also, during the latter portion of 2006, the Department of Homeland Security (DHS) participated on an informal basis in Board activities, including development of the Tenth Report. Although the Department is in concurrence with many of the Board's recommendations, it holds differing views in several cases (e.g., the Board's recommendation that DHS carry out additional public outreach, in addition to what it already is doing, related to its National Environmental Policy Act activities).

Resource Specialists

(non-Board members who work closely with the Board)

Federal Agency Alternates

Manuel Ayala

Natural Resource Manager
 Natural Resources Conservation Service
 U.S. Department of Agriculture
 1400 Independence Avenue, S.W., Room 4237-S
 Washington, DC 20250-1081
 202-720-1883; 202-720-0668 (fax)
 E-mail: manuel.ayala@usda.gov

Miguel Flores

Director
 Water Quality Protection Division
 Region 6
 U.S. Environmental Protection Agency
 1445 Ross Avenue, Suite 1200, MC 6PD
 Dallas, TX 75202-2733
 214-665-8587; 214-665-7263 (fax)
 E-mail: flores.miguel@epa.gov

Rachel Kauffman, Ph.D., M.P.H.

Office of Global Health
 Agency for Toxic Substances and Disease Registry
 National Center for Environmental Health
 Centers for Disease Control and Prevention
 1600 Clifton Road, N.E., MS-E97
 Atlanta, GA 30333
 404-498-3053; 404-498-0064 (fax)
 E-mail: rbk8@cdc.gov

Rachel Poynter

Office of Mexico Affairs
 U.S. Department of State
 2201 C Street, N.W., Room 4258-MS
 Washington, DC 20520
 202-647-8529; 202-647-5752 (fax)
 E-mail: PoynterRM@state.gov

Christina Machion Quilaqueo

Program Analyst
 U.S. Department of Housing and Urban Development
 451 Seventh Street, S.W., Room 8118
 Washington, DC 20410
 202-708-0770; 202-708-5536 (fax)
 E-mail: christina_a._machion@hud.gov

Sally Spener

Acting Secretary
 International Boundary and Water Commission
 4171 N. Mesa, Suite C-100
 El Paso, TX 79902
 915-832-4175; 915-832-4195 (fax)
 E-mail: sallyspener@ibwc.state.gov

EPA Regional Office Contacts

REGION 9

Hector Aguirre
 Region 9
 U.S. Environmental Protection Agency
 75 Hawthorne Street
 San Francisco, CA 94105-3901
 415-972-3213; 415-947-8026 (fax)
 E-mail: aguirre.hector@epa.gov

REGION 9 BORDER OFFICE

Tomas Torres
 U.S.-Mexico Border Program Coordinator
 Region 9
 U.S. Environmental Protection Agency
 610 W. Ash Street (905)
 San Diego, CA 92101
 619-235-4775; 619-235-4771 (fax)
 E-mail: torres.tomas@epa.gov

REGION 6

Gina Weber
 U.S.-Mexico Border Program Coordinator
 Region 6
 U.S. Environmental Protection Agency
 1445 Ross Avenue, Suite 1200, MC 6PD
 Dallas, TX 75202-2733
 214-665-8188; 214-665-7263 (fax)
 E-mail: weber.gina@epa.gov

REGION 6 BORDER OFFICE

Carlos Rincon, Ph.D.
 Border Office Director
 Region 6
 U.S. Environmental Protection Agency
 4050 Rio Bravo, Suite 100
 El Paso, TX 79902
 915-533-7273; 915-544-6026 (fax)
 E-mail: rincon.carlos@epa.gov

Membership Changes

Nonfederal Members

EPA Administrator Stephen L. Johnson appointed two new members to the Board to represent their respective state governments. *Rosario Marin* from the California Integrated Waste Management Board was appointed to represent California, and *Ron Curry*, Cabinet Secretary for the New Mexico Environment Department, was appointed to represent New Mexico. In addition, three existing members were appointed to serve a second term: *Paul Ganster* of San Diego State University (serving as Board Chair); *Ned Norris, Jr.*, Vice Chairman, The Tohono O'odham Nation; and *Robert Varady*, Deputy Director for the Udall Center for Policy Studies. Other new members appointed include: *Christopher P. Brown* of New Mexico State University; *Michael P. Dorsey* of the County of San Diego Department of Environmental Health, Hazardous Materials Division; *Edward Elbrock* of the Malpai Borderlands Group; *Gen Long*, Pro-Tem Mayor for the City of Mission, Hidalgo County, Texas; and *Jennifer A. Montoya* of the World Wildlife Fund. The following nonfederal members' terms came to an end during 2006: *Larry Allen* of the Malpai Borderlands Group; *Gedi Cibas*, Border Program Manager, New Mexico Environment Department (representing New Mexico); *Diane Rose*, Mayor, City of Imperial Beach, California; and *Pete Silva* of the California Water Resources Board (representing California).

Federal Members

New federal members joining the board in 2006 included: *Daniel D. Darrach*, Coordinator, U.S.-Mexico Border Affairs, U.S. Department of State; *Marilyn DiSirio*, Associate Director, Global Health, U.S. Department of Health and Human Services; *Carl Edlund*, Director of the Multimedia Planning and Permitting Division, EPA Region 6; *Carlos Marin*, Acting U.S. Commissioner, International Boundary Water Commission; and *James Stefanov*, Deputy Director, U.S. Geological Survey Texas Water Science Center, U.S. Department of the Interior. Federal members whose terms ended in 2006 included: *John Ritchie*, Border Co-

ordinator, Office of Mexico Affairs, U.S. Department of State; and *A. Leonard Smith*, Regional Director, Economic Development Administration, U.S. Department of Commerce. Reappointments included: *Linda L. Lawson*, Director, Safety, Energy and the Environment, U.S. Department of Transportation; *Shannon H. Sorzano*, Deputy Assistant Secretary for International Affairs, U.S. Department of Housing and Urban Development; and *Rosendo Trevino, III*, State Conservationist, Natural Resources Conservation Service, U.S. Department of Agriculture.

Note of Thanks

Again this year, the Board's preparation of this Tenth Report to the President and Congress was strengthened by valuable input from a number of other border-region environmental policy officials. These contributions were greatly appreciated by the Board Members, Alternates, Resource Specialists, and Regional Office contacts (see 2006 Membership Roster).

Our thanks go to all those individuals listed below and to anyone else whose name inadvertently may have been omitted. We appreciate the value you added to the Good Neighbor Environmental Board's deliberations that led to formulating its recommendations: *Michael Hance* and *Kevin Stevens* (DHS); *Roger Di Rosa*, *Shela McFarlin*, and *Ernesto Reyes* (DOI); *David DeCarme*, *John Gray*, *Sylvia Grijalva*, *Jill Hochman*, *Bob McGuire*, *Camille Mittelholtz*, *Jeanne O'Leary*, *Bob Richard*, *Chuck Rombro*, and *Shari Schaflein* (DOT); *Linda Chambers*, *Dave Fege*, *Valmichael Leos*, *Lorena Lopez-Powers*, *William Luthans*, *Barbara Maco*, *Yvonne Manske*, *Linda Reeves*, *Stacey Takeda*, and *Juan Zepeda Valdez* (EPA); *Raymundo Aguirre*, *Cesar Bois selier*, *Isela Canava*, *Gabriel Duran*, *Rong Kuo*, and *Jose Nunez* (IBWC-U.S. Section); *Placido dos Santos* (ADEQ); *Cindy Padilla* (NMED); *Kim Vacariu* (Wildlands Project); *Ken Wheatley* (Sony Electronics, Inc.) *Mary Miner*, *Martin Ramirez*, and *Angie Russo* (TCEQ); *Melissa Estes* (Campo Band of Kumeyaay Indians); *Desi Vela* (Ewiaapaayp Band of Mission Indians); *Nina Hapner* (Native American Environmental Protection Coalition); *Cornelius Antone* and *Lorinda Sam* (Tohono O'odham Nation).